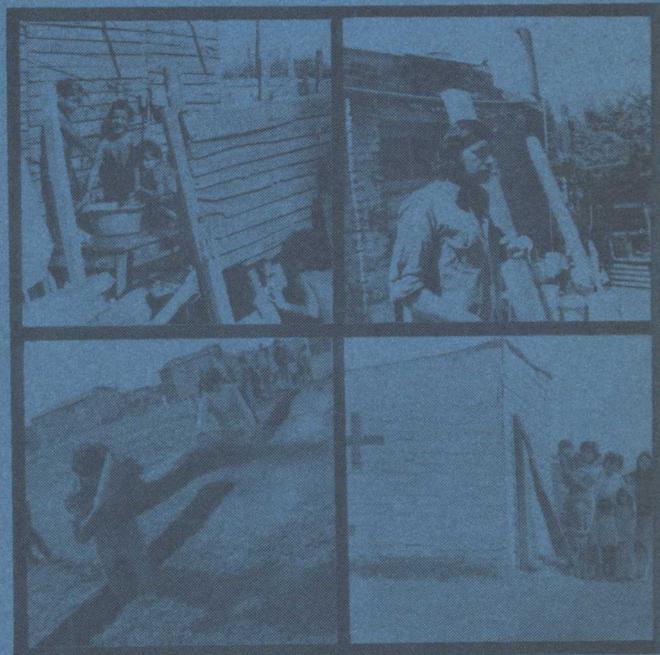


Leopoldo J. Bartolomé

(compilador)

Relocalizados:

Antropología Social
de las Poblaciones Desplazadas



Colección
Hombre y Sociedad

Ediciones del **ides** 3

El verse obligado a abandonar el hogar, la comunidad y el entorno social y natural que definen el marco habitual para la vida de una persona, acarrea una *crisis vital* asimilable a una "pérdida", y cuyas consecuencias a nivel individual son ampliamente reconocidas. ¿Qué sucede cuando tal situación afecta a cientos, miles de personas y familias? ¿Cuándo esta "pérdida" afecta, no ya la rutina vital de un individuo o familia, sino la organización y las estrategias de vida de comunidades enteras? Estos son tan sólo algunos de los interrogantes que plantea el fenómeno de las relocalizaciones masivas y compulsivas de población.

Este volumen reúne algunas de las ponencias presentadas al simposio sobre "Relocalización Compulsiva y Antropología Urbana", que se llevó a cabo en Vancouver (Canadá) en agosto de 1983, como parte de las actividades del XI Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas.

Con una introducción de L. Bartolomé —a cargo de la selección— se incluyen contribuciones de G. Lins Ribeiro, W. Partridge, E. Hermitte-M. Boivin, V. Casabona-R. Guber y del propio compilador.

ISBN 950-43-0368-4

Portada:
Fotos de las películas
"Los Totos" y "Por una tierra nuestra",
de Marcelo Céspedes.

ides

EDICIONES DEL IDES

Consejo Editorial: Torcuato S. Di Tella, Juan José Llach,
Alfredo Monza y Catalina Wainerman.
Getulio E. Steinbach (Coordinador).

TITULOS PUBLICADOS

1. JUAN J. LLACH (Selección, prólogo y notas): *La Argentina que no fue* [Tomo I: "Las fragilidades de la Argentina agroexportadora (1918-1930)"]. (CEP)
2. TORCUATO SALVADOR DI TELLA: *La rebelión de esclavos de Haití.* (CAL)
3. LEOPOLDO J. BARTOLOME (comp.): *Relocalizados: Antropología social de las poblaciones desplazadas.* (CHS)
4. FELIX GUSTAVO SCHUSTER: *Términos teóricos en ciencias sociales.* (CMC)
5. MIGUEL TEUBAL: *Crisis y deuda externa: América Latina en la encrucijada.* (CEP)
6. J. SAMUEL VALENZUELA: *Democratización vía reforma. La expansión del sufragio en Chile.* (CAL)

Leopoldo J. Bartolomé
(compilador)

Relocalizados:

Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas

Contribuciones de:

- ◆ Gustavo Lins Ribeiro
- ◆ Esther Hermitte y Mauricio Boivin
- ◆ William L. Partridge
- ◆ Victoria Casabona y Rosana Guber
- ◆ Leopoldo J. Bartolomé

3

Ediciones del 
Buenos Aires, 1985

INDICE GENERAL

*Relocalizados: Antropología social
de las poblaciones desplazadas*
Primera edición, enero 1985

Realización gráfica:
Departamento Editorial del IDES.
Redacción, administración y distribución:
Güemes 3950 (Tel.: 71-6197),
1425 Buenos Aires, Argentina.

IMPRESO EN LA ARGENTINA
Derechos reservados © 1985, por el
Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

	Pág.
Leopoldo J. Bartolomé Introducción: Las relocalizaciones masivas como fenómeno social multidimensional	7
Gustavo Lins Ribeiro Proyectos de gran escala: hacia un marco concep- tual para el análisis de una forma de producción temporaria	23
William L. Partridge Reasentamiento de comunidades: los roles de los grupos corporativos en las relocalizaciones urbanas	49
Leopoldo J. Bartolomé Estrategias adaptativas de los pobres urbanos: el efecto "entrópico" de la relocalización compulsiva	67
Esther Hermitte y Mauricio Boivin Erradicación de "villas miseria" y las respuestas organizativas de sus pobladores	117
Victoria Casabona y Rosana Guber Marginalidad e integración: una falsa disyuntiva	145

Introducción

LAS RELOCALIZACIONES MASIVAS COMO FENOMENO SOCIAL MULTIDIMENSIONAL

LEOPOLDO J. BARTOLOME

I. Hacia una antropología de las poblaciones desplazadas

El verse obligado a abandonar el hogar, la comunidad y el entorno social y natural que definen el marco habitual para la vida de una persona, acarrea una *crisis vital* asimilable a una "pérdida", y cuyas consecuencias a nivel individual son ampliamente reconocidas (Marris, 1975). ¿Qué sucede cuando tal situación afecta a cientos, miles de personas y familias? ¿Cuando esta "pérdida" afecta, no ya la rutina vital de un individuo o familia, sino la organización y las estrategias de vida de comunidades enteras? Estos son tan sólo algunos de los interrogantes que plantea el fenómeno de las relocalizaciones masivas y compulsivas de población, motivadas por razones que son ajenas a la voluntad de aquellos que se ven involucrados, y que derivan en procesos sobre cuyo curso pueden influir en muy escasa o nula medida. Como fenómeno están lejos de constituir una novedad en la historia de la humanidad, y remite a procesos que van desde las migraciones de pueblos enteros, hasta el cíclico drama de los "inundados" del litoral argentino, o el de los villeros erradicados de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de esa frecuencia, es común que esos eventos sean tratados, explícita o implícitamente, como acontecimientos dramáticos y en cierto sentido únicos; *emergencias*

Selección de trabajos presentados en el Simposio sobre "Relocalización forzosa y antropología urbana", durante el XI Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, realizado en Canadá, del 14 al 25 de agosto de 1983.

que se agotan en sí mismas y que dan lugar a medidas de excepción¹.

Pero además de estos desplazamientos forzosos y dramáticos, originados en factores naturales o casi naturales², existen otros de carácter cada vez más recurrente y sistemático. Me estoy refiriendo a los desplazamientos de población o *relocalizaciones* derivadas de, o asociadas con, grandes proyectos de desarrollo. No es éste el lugar para discutir las ambigüedades y contradicciones del concepto de desarrollo socioeconómico, tanto en sus dimensiones ideológicas como en las económicas y sociopolíticas. Lo que quiero destacar, es que las relocalizaciones masivas se han convertido en un componente *normal* de los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura —por ejemplo, el tipo de emprendimiento que Lins Ribeiro (Cfr. este volumen) denomina Proyecto de Gran Escala (PGE)—, así como de los eufemísticamente llamados “de desarrollo urbano”, y que intentan hacer frente a los fenómenos derivados de la metropolización de las ciudades y del crecimiento de la pobreza urbana³. En otros términos, el drama social generado por el desplazamiento forzoso de poblaciones, de ser un acontecimiento —incorrectamente— considerado como excepcional, se ha convertido en un fenómeno recurrente y previsible, cuya incidencia está directamente vinculada a procesos de escala mundial.

¹ Más allá del descuido o el desinterés manifestado por las autoridades responsables, es muy probable que esta percepción contribuya significativamente para que, aun crisis de evidente recurrencia como las provocadas por las inundaciones, sean reiteradamente enfrentadas con medidas improvisadas.

² Un ejemplo de este último tipo de factores lo constituyen los desplazamientos provocados por situaciones bélicas o grandes trastornos sociopolíticos, como los que dieron origen al surgimiento en el sudeste asiático al llamado “pueblo de los botes”. Al decir casi *naturales*, quiero enfatizar el hecho que el desplazamiento de la población es un resultado no buscado ni planificado.

³ La magnitud del fenómeno de ocupación “ilegal” del espacio urbano se pone en evidencia por la cifra estimativa de 300 millones de personas que vivirían en esas condiciones actualmente (*Newsweek*, 1983, p. 19).

La característica distintiva de estos procesos es que en ellos el desplazamiento de población constituye un objetivo conscientemente planificado, ya sea por razones técnicas —en los emprendimientos del tipo PGE— o técnico-políticas, como en los que persiguen la erradicación de villas miserias o, más genéricamente, la “renovación urbana”. Otra de sus características esenciales radica en la *compulsividad* del desplazamiento; compulsividad que deriva del hecho de que rara vez o nunca los relocalizados tienen la posibilidad efectiva de optar por el mantenimiento del statu quo. Esta limitación de las opciones y de la posibilidad de influir en el curso de los eventos, si bien resulta evidente en el caso de, por ejemplo, las represas y los lagos artificiales que generan, no es menos cierta en el caso de los programas de “erradicación” o de “renovación urbana”, ya que la diferencia de poder entre los planificadores y sus mandantes, por un lado, y la población involucrada, por el otro, es frecuentemente demasiado grande como para que pueda ser resistida eficazmente. Y esta última afirmación me lleva a mencionar otra de las características distintivas de estos procesos: los relocalizados y los erradicados son reclutados fundamentalmente entre los sectores más pobres de la población y, por consiguiente, su capacidad de influir sobre los acontecimientos es muy reducida en la mayoría de los casos.

Dentro de los PGE, las grandes represas constituyen el tipo de emprendimiento más frecuentemente asociado con el desplazamiento forzoso de poblaciones, ya que inevitablemente avanzan sobre el espacio habitado. Si bien resulta difícil arriesgar una cifra para el total de personas que, a nivel mundial, han sido desplazadas como consecuencia de los lagos artificiales creados por las represas, el número de relocalizados por algunas de las grandes represas resulta suficientemente indicativo de la magnitud del problema. En el continente africano se destacan las represas de Kariba (55.000), Kainji (42.000), Volta (87.000) y Assuán (más de 100.000). En Asia pueden mencionarse las represas de Damodar (India, circa 100.000 personas),

Ubolratana (Tailandia, 30.000), y proyectos como el de Pa Mong (Tailandia) que, de concretarse, afectaría a cerca de 250.000 personas. La represa de Keban, en Turquía, produjo 30.000 relocalizados. En el continente americano, el conjunto de represas del Valle del Tennessee (Estados Unidos) dio lugar a la relocalización de cerca de 60.000 personas. En México, la represa Alemán y la Río Papaloapan II totalizaron 37.000 personas, la de Río Nazas, 31.800 y la de Pujal-Coy Fases I y II, 34.200. En Brasil se destacan Sobradinho (70.000), y Tucurui (para 1985, circa 30.000 personas). Esta lista sumamente parcial, resulta sin embargo lo suficientemente ilustrativa de que las relocalizaciones por represas están lejos de constituir un fenómeno excepcional.

En lo que concierne a nuestro país, es de destacar que las grandes represas construidas, en construcción y en proyecto se concentran en el Litoral, área densamente poblada. Salto Grande (Argentina-Uruguay) obligó a relocalizar, del lado argentino, a la antigua ciudad de Federación (circa 5.000 habitantes en 1979), con consecuencias sociales traumáticas aún no disipadas⁴. La represa de Yacyretá (Argentina-Paraguay) obliga a relocalizar a cerca de 40.000 personas en ambas márgenes del río Paraná, incluyendo la mayor afectación urbana a nivel mundial por esta causa (20.000 personas en la ciudad de Posadas). También producirán relocalizaciones significativas las futuras represas de Corpus (Argentina-Paraguay) y Paraná Medio. Tan sólo la mención de estos emprendimientos subraya la relevancia nacional que reviste la temática aquí tratada.

La antropología social ha efectuado una muy importante contribución al estudio de los procesos de relocalización asociados con la construcción de represas y con esquemas

⁴ Estas consecuencias disruptivas en Nueva Federación han sido destacadas por dos jóvenes antropólogos sociales, Mario Virgolini (1980) y María R. Catullo. Esta última ha iniciado un estudio intensivo sobre el impacto de la relocalización sobre la vida doméstica y social de habitantes de la nueva ciudad.

de aprovechamiento de recursos hídricos. En otro trabajo (Bartolomé, 1984 a) he analizado más detalladamente esos aportes, pero de todas maneras resulta imprescindible destacar aquí los nombres de Thayer Scudder y de Elizabeth Colson, quienes, ya sea individual o conjuntamente, han producido el más importante *corpus* empírico y teórico sobre los procesos de relocalización (Scudder y Colson, 1972 y 1982). Igualmente significativa resulta la obra del antropólogo egipcio Hussein M. Fahim (1983), quien ha estudiado desde prácticamente sus inicios todo el proceso de relocalización de población nubia como consecuencia de la construcción de la represa de Assuán. La bibliografía es más escasa para las represas latinoamericanas, aunque el Proyecto Papaloapan (Represa Alemán, México) puede ser considerado como uno de los casos más estudiados (McMahon, 1973; Barabas y M. Bartolomé, 1973; Partridge, Brown y Nugent, 1982).

Las poblaciones desplazadas como consecuencia de programas de erradicación de villas miseria o de programas de renovación urbana, han sido objeto de un estudio mucho más intensivo en las últimas décadas, aunque desde enfoques más variados que en el caso de las grandes represas. La magnitud de este fenómeno en nuestro país queda evidenciada por la cifra de más de 140.000 "villeros" erradicados entre 1978 y 1979 de la ciudad de Buenos Aires (Hermitte y Boivin, en este volumen), la gran mayoría de los cuales fueron a engrosar el contingente de más de 317.000 villeros registrados por el Censo Socioeconómico de Villas de Emergencia de 1981 en el Gran Buenos Aires (Hermitte et al., 1983, pp. 1 y 3). Aunque, a diferencia de los desplazados por la construcción de represas, los relocalizados bajo proyectos de este tipo tienen, en ocasiones y dadas ciertas circunstancias, alguna posibilidad de ofrecer una resistencia efectiva y hasta de modificar el curso de los eventos, su situación no difiere demasiado de la de los *represados*, según el neologismo acuñado por Scudder (1981).

Toda relocalización compulsiva constituye de por sí un *drama* y, por lo tanto, expone a la luz los mecanismos

básicos que sostienen el tejido social de una comunidad humana, y en especial aquellos que hacen a su ajuste con el medio físico y social. El desarraigo masivo e involuntario altera los parámetros básicos en que se basan las *estrategias adaptativas*⁵ de una comunidad o de un determinado grupo humano; estrategias que si bien se realizan en forma individual, se basan y expresan un hecho social colectivo. Como señala Partridge (en este volumen), "Las comunidades pueden ser consideradas como depósitos o reservorios de respuestas adaptativas", y es precisamente sobre ese reservorio que actúa el impacto de la relocalización masiva. Estrategias y procedimientos antes efectivos dejan de serlo, redes sociales pacientemente tejidas se desarticulan, liderazgos pierden vigencia, y se desdibuja o pierde totalmente la grilla de simbolismos que los seres humanos sobreimponemos sobre nuestro medio ambiente físico y social. Es ampliamente reconocido el papel ansiógeno y tensionante de las situaciones que exigen *innovación* en las respuestas. Una de las funciones más importantes de la cultura es la de proveernos de un repertorio disponible de respuestas, minimizando el efecto tensionante de la interacción social y de la que se da entre el hombre y su medio ambiente físico.

Desde este punto de vista, el desarraigo masivo y forzoso constituye una *agresión total* —en el sentido biológico— sobre el individuo y el cuerpo social. Agresión que genera altísimos niveles de *stress* y somete a una dura prueba las capacidades de adaptación de individuos y colectividades. De allí que Scudder (1977, p. 6) llegue a afirmar que "...es difícil imaginar un insulto peor para una comunidad

que el obligar a sus miembros a mudarse contra su voluntad", y en lo que fundamenta su concepción de *stress multidimensional de relocalización*, con componentes fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Esta situación se ve agravada cuando —como sucede en los casos aquí considerados— la población afectada se recluta entre los sectores más pobres y con menor peso político dentro de una sociedad. Casi por norma los proyectos de desarrollo son envueltos en un ropaje ideológico que postula, como axioma, su naturaleza "progresista", su anclaje en el "interés público" y en los beneficios que acarreará para todos. Muchas de estas consideraciones tienen, por cierto, alguna validez, pero con demasiada frecuencia conducen a minimizar el *costo social* de esos emprendimientos; costo que involucra consecuencias que no se disipan rápidamente ni son totalmente compensadas por los beneficios.

El estudio científico de los procesos de este tipo está necesariamente ligado al problema de la *acción*. No se trata solamente de focalizar en situaciones que ofrecen una oportunidad excepcional para el estudio de procesos sociales en pleno desarrollo y la puesta a prueba de hipótesis acerca del comportamiento adaptativo de los seres humanos. Es necesario que la *comprensión* pueda concurrir al diseño de *políticas* concretas, capaces de atenuar —ya que difícilmente puedan ser eliminados en forma total— los impactos negativos de estos desplazamientos forzados, y potenciar la natural capacidad adaptativa de los seres humanos. Este último objetivo nos remite al complicado problema de la inserción del científico social en proyectos de este tipo; problema que demandaría un análisis y una discusión exhaustivos. Si bien esa discusión trasciende los límites de este volumen, es indudable que lo que le está vedado al científico social es la indiferencia, así como la crítica nihilista o el fácil refugio en la utopía.

⁵ Dentro del enfoque antropológico-social, el concepto de estrategia adaptativa remite a un modelo que intenta recoger el conjunto de procedimientos, mecanismos para la selección y utilización de recursos, así como también las tendencias expresadas en la elección de alternativas, que una determinada unidad social pone de manifiesto a lo largo del proceso de satisfacer sus necesidades básicas y de hacer frente a las presiones del medio ambiente (Bennett, 1971, p. 16).

II. Características de este volumen

Este volumen reúne algunas de las ponencias presentadas al simposio sobre "*Relocalización Compulsiva y Antropología Urbana*", que se llevó a cabo en Vancouver (Canadá) en agosto de 1983, como parte de las actividades del XI Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Si bien el objetivo central del simposio era la discusión y comparación de procesos de desplazamiento compulsivo en contextos urbanos, tal foco no era de ninguna manera restrictivo. Desde esta perspectiva resulta particularmente lamentable no haber podido incluir —debido a razones ajenas a mi voluntad— la ponencia presentada por el antropólogo hindú Vijay S. Upadhyay (de la Universidad de Ranchí), sobre los gigantescos proyectos denominados "de rehabilitación" de poblaciones tribales⁶ que se implementan en la India. La magnitud de este programa encarado por el gobierno de la India hace empalidecer los proyectos anteriormente mencionados, ya que apunta a relocalizar a cerca de tres millones de personas. Los resultados obtenidos hasta el presente, y que Upadhyay califica de sumamente negativos, constituyen un claro ejemplo de la enorme dilapidación de recursos y los sufrimientos humanos que acarrea la planificación *ciega*, en la que los diagnósticos científicos y los datos empíricos son ignorados y reemplazados por los deseos y objetivos políticos de los planificadores. De todas maneras, es de señalar que todos los contribuyentes a este volumen han tenido o tienen experiencia directa en la investigación-acción, ya sea con relación a grandes proyectos y represas (Lins Ribeiro, Partridge, Bartolomé), o con desplazados urbanos en conexión con programas de erradicación (Hermitte, Boivin, Casabona y Guber).

El trabajo del antropólogo brasileño GUSTAVO LINS RIBEIRO —Proyectos de Gran Escala: hacia un marco

⁶ Vijay S. UPADHYAY: *Tribal Rehabilitation Schemes in India; a Case of Forced Resettlement*.

conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria—, apunta precisamente a delinear las características sistémicas especiales que definen a este tipo de emprendimiento. Se trata de un trabajo de exploración conceptual, estimulado por los estudios efectuados por el autor sobre megaproyectos como, por ejemplo, el de la construcción de la nueva capital del Brasil: Brasilia. Conceptos derivados de la moderna teoría de los sistemas son utilizados en forma relativamente "metafórica", ya que una mayor precisión y rigurosidad a este respecto demandarían un grado de conocimientos sobre estos sistemas todavía inexistente⁷. De todas maneras, el análisis de Lins Ribeiro permite destacar las características sistémicas que adquieren estos emprendimientos a partir de su gigantismo, del campo sociopolítico de *excepción* dentro del que operan, y del grado de *cerramiento* y autonomía de las relaciones sociales que generan. Lins Ribeiro se concentra en el análisis de tres dimensiones sistémicas: el gigantismo, el relativo aislamiento y autonomía y, finalmente, la *temporariedad*, es decir, el relativamente rígido acotamiento temporal de estos emprendimientos. Estos atributos de los PGE generan una serie de requerimientos para el proyecto. Así —señala el autor— se torna necesaria la implementación de mecanismos ad hoc para el reclutamiento y mantenimiento de una considerable fuerza de trabajo, lo que a su vez impone la resolución de serios problemas logísticos. En términos generales, tiene lugar la conformación de un *campo* social y productivo especial, regulado por principios y objetivos que son también especiales. Es indudable que para una adecuada comprensión de los factores sociopolíticos intervinientes en los procesos de relocalización asociados con PGEs, resulta imprescindible estudiar las características peculiares de

⁷ A pesar del entusiasmo despertado en muchos antropólogos (Rodin, Michaelson y Britain, 1978), siguen subsistiendo serias dificultades para una aplicación realmente productiva de la teoría general de los sistemas a los fenómenos socioculturales.

estos proyectos, y el trabajo de Lins Ribeiro constituye un aporte significativo en esa dirección⁸.

La contribución del antropólogo norteamericano WILLIAM L. PARTRIDGE —Reasentamiento de comunidades: los roles de los grupos corporativos en las relocalizaciones urbanas— toca otro tema crítico dentro de la problemática de las relocalizaciones planificadas: la *participación* de la o las comunidades afectadas en estos procesos. Partridge señala que aun en las comunidades más deprimidas y aparentemente desorganizadas existen grupos capaces de acción corporativa. Este tipo de acción define *grupos corporativos*, caracterizados por una serie interrelacionada de atributos: perpetuidad (al menos presuntamente), existencia de límites o fronteras grupales, membresía restringida, identidad, autonomía, organización, y procedimientos y objetivos comunes. Estas subunidades sociales desempeñan un papel fundamental en la creación, mantenimiento y transmisión del sistema de regularidades interactivas interindividuales y de comportamientos culturales que, operando dentro de un determinado contexto medioambiental, definen los *denotata* del concepto de *comunidad*. Partridge señala que frente a situaciones dramáticas —como una relocalización compulsiva, por ejemplo—, las comunidades exhiben una tendencia a reforzar el cerramiento de sus grupos corporativos internos y/o a movilizarlos para resistir el proceso. Una de las claves para evitar el desarrollo de confrontaciones y conflictos estériles entre los intereses públicos (supuestamente representados por el proyecto) y los locales (los de los afectados) radica en la temprana promoción de la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Participación significa, en este contexto, un proceso de negociación continua entre los representantes de los grupos corporativos que expresan los intereses de la sociedad global y los de los grupos corpora-

⁸ Es interesante señalar que Lins Ribeiro encara actualmente un estudio sincrónico comparativo de varios proyectos de gran escala en América Latina.

tivos locales. Este objetivo, si bien no es fácil de lograr e implica la intervención de los afectados tanto en la planificación como en la implementación de las relocalizaciones, constituye uno de los mecanismos más efectivos para mitigar los impactos negativos del desplazamiento forzoso, posibilitando un realineamiento ordenado y "legítimo" de las estrategias adaptativas de la comunidad afectada.

Mi contribución a este volumen —Estrategias adaptativas de los pobres urbanos: el efecto "entrópico" de la relocalización compulsiva⁹— muestra, a partir de datos de campo, la existencia de un fenómeno hasta el presente no tenido en cuenta en la conceptualización de los impactos socioeconómicos de los procesos de relocalización: la disminución en la "productividad" de los sistemas de supervivencia de los afectados, aún con anterioridad a la concreción del desplazamiento. Por *sistema de supervivencia* se entiende el sistema constituido por un conjunto específico de recursos, procedimientos para acceder y explotar esos recursos, y las relaciones sociales que resultan instrumentales a tales fines, y que conforma una resultante dinámica de las estrategias adaptativas de un actor o grupo social. El caso aquí analizado es el de la población urbana a ser relocalizada en la ciudad de Posadas (Misiones), como consecuencia de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, población que en su gran mayoría pertenece a los estratos socioeconómicos más deprimidos. La supervivencia de estos "pobres urbanos" depende, entre otros factores, de la maximización de algún grado de certidumbre y estabilidad dentro de un contexto vital básicamente inestable e imprevisible. La perspectiva de la relocalización incorpora al esquema una serie de factores exógenos que amenazan no sólo el funcionamiento, sino la misma validez de los sistemas de supervivencia de los pobres urbanos. Si bien las áreas de impacto

⁹ Una versión reducida de este trabajo ha sido publicada en una revista científica norteamericana (Bartolomé, 1984 b).

pueden variar en función de cada caso específico, el proceso iniciado en Posadas a partir de 1979 pone en evidencia que los efectos perturbadores se concentran en tres áreas: el "mapa" cognoscitivo que refleja la distribución espacial de los recursos utilizables, las redes sociales de reciprocidad y ayuda mutua, y la organización de los grupos domésticos. La perspectiva de ser desarraigados de su medio ambiente físico y social introduce una fuente poderosa de incertidumbre, no controlable mediante los mecanismos tradicionales, y desorganiza los sistemas de supervivencia —de allí que hable de un efecto "entrópico"—, disminuyendo su eficiencia. El resultado es un deterioro en el nivel de vida que hace descender aún más la línea de base que suelen tener en cuenta los planificadores al estimar los costos y beneficios de los programas de relocalización. Además de apuntar a arrojar alguna luz sobre importantes aspectos vinculados a la dinámica social, este estudio aspira a influir para el diseño de políticas de acción que tomen en cuenta estos costos ocultos.

Los dos trabajos que completan este volumen pertenecen a antropólogos sociales argentinos que han venido llevando a cabo investigaciones intensivas en villas miseria del Gran Buenos Aires, muchos de cuyos habitantes fueron "erradicados" de la Capital Federal a través de una política autoritariamente implementada por el gobierno militar hacia fines de la década del setenta. La contribución de ESTHER HERMITTE y MAURICIO BOIVIN —Erradicación de "villas miseria" y las respuestas organizativas de sus pobladores— pone en evidencia la ideología clasista que orientó esa política de erradicación, las formas violentas que asumieron los procedimientos para su implementación y el impacto que tuvo sobre las formas organizativas que habían desarrollado las poblaciones villeras que se vieron afectadas. Hermitte y Boivin focalizan en el análisis de las *imágenes y cursos de acción* elaborados por los diferentes actores intervinientes en este proceso. Sus objetivos son los de penetrar analíticamente y explicitar la lógica y los valores que orientaron los planes de erradica-

ción, para, al mismo tiempo, tornar inteligibles las formas y contenidos de los cursos organizativos generados por la población villera para hacer frente a esa agresión. De esta manera, muestran cómo dicha política se inscribe dentro de una concepción clasista del espacio urbano, que posee entre sus correlatos ideológicos la consideración de la villa miseria como un foco de contaminación, una "anomalía" social que debe ser extirpada, así como la imposición de un *estigma* categórico sobre la identidad social de sus habitantes. La mecánica violenta y autoritaria de las erradicaciones requiere, como complemento justificativo, la previa definición categórica de los afectados como "indeseables" y como una amenaza potencial a la sociedad. Las consecuencias de la erradicación se manifestaron en un marcado deterioro en las condiciones de vida de los afectados, cuyas estrategias adaptativas no pudieron compensar la desorganización o destrucción total de los sistemas de supervivencia que habían logrado estructurar. Mientras que en las relocalizaciones vinculadas con PGEs la ideología "desarrollista" del proyecto encubre muchas de las contradicciones sociales latentes —o las redefine en términos de "beneficios"—, los procesos de este tipo muestran en forma descarnada la naturaleza clasista y las consideraciones de poder que subyacen a estas políticas. Los afectados por el primer tipo de proyecto son desplazados en nombre del progreso y del interés público —lo que les concede algunos "derechos"—, mientras que los erradicados lo son en nombre de un conflicto por la apropiación del espacio urbano, en el que la clase dominante los ha definido previamente como intrusos y como una amenaza para esa concepción.

VICTORIA CASABONA y ROSANA GUBER —Marginalidad e integración: una falsa disyuntiva— apuntan precisamente a esa ideología justificatoria (y condenatoria, al mismo tiempo), cuya influencia detectan inclusive dentro de las ciencias sociales. De allí que rechacen la caracterización de *marginal* aplicada a la población villera, en la medida en que ese término connota una separación o una falta de inserción dentro de la sociedad urbana e industrial.

Como alternativa, proponen un enfoque que no convierte a la adscripción a una misma lógica económica y socio-política en un requisito para la articulación de un segmento social dentro del sistema global. No solamente niegan esa presunta discontinuidad entre villeros y población urbana, sino que postulan la existencia de formas específicas y peculiares de articulación entre los primeros y los demás sectores sociales, así como también con el Estado. Desde esa perspectiva, concentran su análisis en dos dimensiones: la que se plantea a partir de la relación entre villeros y otros sectores dentro del marco jurídico-normativo, y la que se manifiesta dentro del contexto de la ideología dominante. En ambos casos, el interés central de los autores se centra en la forma en que esas relaciones concurren al mantenimiento de una situación de subordinación. La conclusión que extraen es que esa subordinación se constituye y mantiene a través de la interacción y no mediante el marginamiento de los villeros.

Por último, no puedo dejar de subrayar que los trabajos compilados en este volumen no agotan ni mucho menos la problemática de las poblaciones desplazadas. Su propósito fundamental es el de brindar a la comunidad científica y al público en general una idea de lo que se está trabajando en este campo desde la perspectiva de la antropología social, destacando al mismo tiempo la relevancia de la temática en cuestión. Más allá de las evidentes lagunas que exhibe nuestro conocimiento sobre estos procesos, esta problemática exige que la acción acompañe o se articule estrechamente con el análisis científico, ya que —como se señalara en una reciente reunión— "...si bien el antropólogo aplicado debe ser primordialmente un analista y un comunicador, no debe rehuirse al llamado a intervenir"¹⁰.

¹⁰ Estas consideraciones forman parte de las conclusiones de una reunión convocada por la Asociación de Antropología Aplicada de la India (Burman, 1984).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BARABAS, Alicia, y BARTOLOME, Miguel (1973): *Hydraulic Development and Ethnocide: the Mazatec and Chinantec People of Oaxaca, México*. IWGIA Document N° 15, Copenhagen.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1983): "Aspectos sociales de la relocalización de la población afectada por la construcción de grandes represas". Trabajo presentado durante el Seminario Interamericano sobre Efectos Sociales de las Grandes Represas de América Latina, organizado por CIDES e ILPES, Buenos Aires, 4 al 8 de julio de 1983. Incluido en un volumen editado por CIDES y de próxima publicación.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1984a): "Aspectos sociales de la relocalización de la población afectada por la construcción de grandes represas", en F. SUAREZ, R. FRANCO y E. COHEN (eds.): *Efectos sociales de las grandes represas en América Latina*, Fundación Cultura Universitaria (para CIDES/ILPES), Montevideo (pp. 115-144).
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1984b): "Forced Resettlement and the Survival Systems of the Urban Poor", *Ethnology*, vol. XXIII, N° 3, pp. 177-192.
- BENNETT, John W. (1971): *Northern Plainsmen: Adaptive Strategy and Agrarian Life*. Aldine (1ra. edición 1969), Chicago.
- BURMAN, B. K. Roy (1984): "Report of the Commission on Futurology", *IUAES Newsletter*, N° 9, pp. 2-4.
- FAHIM, Hussein M. (1983): *Egyptian Nubians. Resettlement and Years of Coping*. University of Utah Press, Salt Lake City.
- HERMITTE, Esther, et al. (1983): "Análisis sociocultural de dos comunidades del Gran Buenos Aires: impactos externos y autogestión". Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires (mimeo).
- MARRIS, Peter (1975): *Loss and Change*. Anchor Books, Garden City, Nueva York.
- McMAHON, David F. (1973): *Antropología de una presa. Los Mazatecos y el Proyecto Papaloapan*. Instituto Nacional Indigenista, México.
- NEWSWEEK (1983): Special Report: "An Age of Nightmare Cities", edición del 31 de octubre de 1983.
- PARTRIDGE, William L., BROWN, A. B. y NUGENT, J. B. (1982): "The Papaloapan Dam and Resettlement Project: Human Ecology and Health Impacts", en *Involuntary Migration and Resettlement*, compilado por A. Hansen y A. Oliver-Smith, pp. 245-263, Westview Press, Boulder, Colorado.

- RODIN, Miriam, MICHAELSON, Karen y BRITAN, Gerald M. (1978): "Systems Theory in Anthropology", *Current Anthropology*, vol. 19, N° 4, pp. 747-762.
- SCUDDER, Thayer (1977): "Some Policy Implications of Compulsory Relocation in Connection with River Basin Development and other Projects Impacting upon Low Income Populations". California Institute of Technology, Pasadena, California (mimeo).
- SCUDDER, Thayer (1981): "What it Means to be Dammed. The Anthropology of Large-Scale Development Projects in the Tropics and Subtropics, *Engineering and Science*, abril 1981, pp. 9-15.
- SCUDER, Thayer, y COLSON, Elizabeth (1972): "The Kariba Dam Project: Resettlement and Local Initiative", en H. R. BERNARD y P. PELTO (compiladores): *Technology and Social Change*, pp. 40-69. McMillan, New York.
- SCUDER, Thayer, y COLSON, Elizabeth (1982): "From Welfare to Development: a Conceptual Framework for the / Analysis of Dislocated People", en Art HANSEN y A. OLIVER-SMITH (comps.), op. cit., pp. 267-287.
- VIRGOLINI, Mario (1980): "Efectos del trasplante poblacional en relación a grandes obras de infraestructura: Federación y Santa Ana". Informe Final de Investigación, Comisión de Investigación Científica, Universidad Nacional de La Plata, La Plata (mimeo).

PROYECTOS DE GRAN ESCALA:
HACIA UN MARCO CONCEPTUAL
PARA EL ANALISIS DE
UNA FORMA DE PRODUCCION TEMPORARIA

GUSTAVO LINS RIBEIRO*

Agradecimientos: Scott Guggenheim editó y comentó con amabilidad este trabajo. Agradezco a Daniel Gross, Josiah Heyman, Luis Loyola, June Nash, Alessandro Scasselatti y Eric Wolf sus numerosas y útiles observaciones.

* Universidad de Brasilia, Brasil.

I. Introducción

En este trabajo intento desarrollar un enfoque teórico de una forma de producción que designaré proyectos de gran escala. El interés por estos proyectos es cada vez mayor en varios campos académicos; sin embargo, no hay todavía un consenso explícito acerca de su definición ni de la manera en que se insertan en el desarrollo capitalista¹.

En general, la literatura antropológica se refiere a este tema de un modo tangencial. Hay numerosos trabajos sobre los efectos de los proyectos de gran escala (sobre todo hidroeléctricos) en las poblaciones locales². Por otra parte, la preocupación por "las consecuencias sociales de las innovaciones" es tradicional dentro de la antropología (Dalton 1971, p. 11).

SUMARIO

I. Introducción	25
Antecedentes	26
II. Los proyectos de gran escala: una forma de producción temporaria	29
1. El gigantismo	30
2. El aislamiento	35
3. La temporariedad	42
III. Conclusión	45
Bibliografía	46

¹ Según Scudder y Colson, la actual es una "época de planes nacionales de desarrollo que exigen la construcción de presas y otras grandes obras de ingeniería" (1982, p. 268). Kathleen Murphy considera que los años setenta fueron "la década del desarrollo de macroproyectos en el Tercer Mundo", cuando se iniciaron más de 900 proyectos y no menos de otros 600 estaban en las mesas de dibujo. Murphy define cuantitativamente los "macroproyectos" como empresas que exigen más de 100 millones de dólares. No son raros los que se miden en miles de millones; véase la lista de los primeros veinte elegidos por Murphy, que van de 5.000 a 21.000 millones (1983, pp. XVII, 6, 7). Según su muestra, todas las inversiones de ese decenio totalizaron más de un billón de dólares, y cada proyecto empleó a más de 10.000 personas (ídem, p. VII, XV).

² Véanse, por ejemplo, Aspelin (1982); Aspelin y Santos (1981); Duqué (1980); Hansen y Oliver-Smith (1982); Nash (1983); Partridge, Brown y Nugent (1982); Santos (1981); Santos et al. (1980); Scudder y Colson (1982), y Wali (1982 a y 1982 b). En Hoben (1982) hay una descripción de la participación de antropólogos en

Lamentablemente, es escaso el conocimiento sobre el proceso de ejecución de estos proyectos, puesto que casi no hay investigaciones sobre ellos. Los estudios que se han hecho se refieren, grosso modo, a su planificación económica y, de una u otra manera, adoptan el punto de vista de los planificadores. Por consiguiente, los argumentos están bien elaborados, pero sólo muestran una cara de la moneda. Hoy en día seguimos sin saber gran cosa acerca de lo que en verdad ocurre en el terreno de los hechos³.

Antecedentes

Mi interés por los proyectos de gran escala comenzó con el estudio sobre la construcción de Brasilia, la capital federal de Brasil (Ribeiro, 1980). Quise captar la visión de gente que no hubiera participado directamente en los procesos de planificación y decisión, por lo que centré el estudio en la experiencia de los trabajadores. Se demostró que para ejecutar el proyecto de construcción era necesaria una totalidad compleja de relaciones que trascendía cualquier punto de vista particular. Ello sugería la posibilidad de construir una categoría teórica, sui generis, merecedora de un análisis ulterior. Propuse entonces, como hipótesis, la existencia de una forma de producción temporaria que denominé *grandes obras de ingeniería civil*. Mientras elaboraba esta idea, me pareció que la designación

los llamados proyectos de desarrollo. Aparentemente, la cantidad de investigaciones y el interés que despiertan alcanzan para justificar la existencia de un rótulo editorial: la literatura de *evaluación de impactos sociales*. Véase, por ejemplo, el catálogo de la Westview Press de setiembre de 1982-febrero de 1983 (p. 131).

³ La relación entre los distintos intereses y experiencias y las diferentes perspectivas es un tema clásico de las ciencias sociales. El mejor ejemplo del punto de vista de los planificadores aparece, obviamente, en los trabajos sobre los objetivos de los proyectos. También hay obras que pueden considerarse sistematizaciones de ese punto de vista; véanse, especialmente, Hirschman (1967), Davidson y Meador, eds. (1982) y Murphy (1983).

resultaba muy limitada por: (a) la lógica empírica de una sola rama de la producción, y (b) los significados ideológicos provenientes del uso corriente de la expresión. No obstante, es probable que la construcción de ciudades planificadas, obras hidroeléctricas, ferrocarriles y canales siga constituyendo el núcleo básico de la categoría *proyectos de gran escala*. Había otra posibilidad: elegir rótulos preexistentes, como *proyectos de desarrollo*, *macrodesarrollo* o *macroingeniería*. Sin embargo, los dos primeros parecen indicar que los proyectos promueven verdaderamente el desarrollo, lo que es discutible. *Macroingeniería* es más específico que "grandes obras" y sugiere una tradición ajena a las ciencias sociales. Opté, pues, por *proyectos de gran escala*, rótulo que sólo sugiere dimensión y planificación.

Hay dos características, muy vinculadas entre sí, que están en el centro de esta idea de proyectos de gran escala: son *sistemas discretos* y además *recurrentes*. La expresión "sistema discreto" significa que se trata de un conjunto organizado de relaciones con una lógica particular, aunque inserto en un sistema mayor que es la fuente de sus principales características estructurales. "Sistema recurrente" implica que hay cierta similitud entre los distintos proyectos de gran escala, que justifica ubicarlos en una misma categoría. Estos proyectos producen con regularidad acontecimientos previsibles.

La idea de considerar a estos proyectos sistemas discretos y recurrentes ya se encuentra en el trabajo de Albert Hirschman, *Development Projects Observed* (1967). Este libro plantea lo que debe hacerse y evitarse para lograr el éxito de un gran proyecto. Como otorga una importancia excesiva a la perspectiva de los planificadores, Hirschman exagera la capacidad de predicción y control de quienes desarrollan el proyecto. Acepta la existencia de "incertidumbres" que pueden ocurrir debido a una comprensión errónea de los planificadores, pero no las interpreta mediante la dinámica de los grupos y clases que, en el proceso real, se interrelacionan de manera compleja, con distinta

fuerza e intereses. Según Hirschman, el dilema del planificador consiste en encontrar la combinación correcta de *adopción de rasgos* (aceptar las condiciones locales existentes) y *creación de rasgos* (modificarlas). Cuando trata de explicar cómo funcionan la adopción y la creación de rasgos en la maximización de proyectos, Hirschman exhibe el sesgo de un planificador externo. De hecho, le preocupa sobre todo el proceso de decisión, lo cual le conduce a elaborar interpretaciones psicológicas acerca de relaciones económicas objetivas:

Por desgracia, la creación de rasgos no es... fácil. En primer lugar, algunos rasgos necesarios están con frecuencia tan alejados de los logros técnicos, las condiciones sociopolíticas y los valores culturales actuales del país, que su adquisición gradual, aun si fuese posible, sería mucho más costosa que la suma de *adopción* más importación. En segundo lugar, nunca se puede estar totalmente seguro de que las actitudes, las conductas y las capacidades ajenas (es decir, las del proyecto, GLR) se aprendan alguna vez, puesto que su adquisición no tiene lugar en tanta medida a través de *cambios en los valores*, que a menudo son abruptos y están sujetos a grandes oscilaciones. (Hirschman 1967, p. 136, 137; véanse también las pp. 14, 15 y 27).

Una razón de este "sesgo externo" puede radicar en que Hirschman compara una muestra de proyectos de orientación y financiamiento internacionales. En ese medio siempre se considera que los proyectos promueven, de una u otra manera, el desarrollo. Los problemas que pueden surgir siempre se deben al medio subdesarrollado en el que operan. Los proyectos son portadores de características deseables para medios subdesarrollados⁴.

⁴ El siguiente pasaje lo confirma: "Para plantearlo de un modo muy general, postulamos un estado o status quo subdesarrollado con determinados atributos negativos o 'carencias' (de capital, de capacidades, de voluntad o habilidad para mediar en conflictos entre diferentes grupos sociales o étnicos, etcétera), y un estado mejor, deseado, en el que por lo menos uno, y quizá varios de estos atributos, se han vuelto positivos o menos negativos" (Hirschman, 1967, p. 130).

El esfuerzo de este autor por examinar varios proyectos para encontrar "características estructurales" (op. cit., p. 4) fue un primer paso útil. Lamentablemente, su interés radicaba sobre todo en diseñar un modelo con fines de formular políticas, que no ofrece espacio teórico alguno para las múltiples interacciones y puntos de vista inherentes a todo proyecto de gran escala.

II. Los proyectos de gran escala: una forma de producción temporaria

En el resto de este trabajo intentaré construir un instrumento heurístico para enfocar los proyectos de gran escala. Es importante subrayar que estudiaré dimensiones analíticas. No me preocupa aquí formular proposiciones empíricas. Sólo la investigación empírica puede determinar el contenido de estas dimensiones en circunstancias concretas. Mi objetivo consiste en señalar un campo significativo para estudios ulteriores.

En las páginas siguientes analizaré tres dimensiones sistémicas de los proyectos de gran escala: (1) el gigantismo; (2) el aislamiento; (3) el carácter temporario. Estas tres dimensiones están en el centro de nuestra concepción, porque subsumen las principales relaciones y características que hacen de esta forma de producción una entidad identificable y discreta. Aclaremos que el análisis que aparece a continuación es *una* manera de enfocar el tema. Hay otras. No obstante, rotular así estos tres conjuntos de relaciones subraya cualidades relevantes de los proyectos de gran escala. El empleo de esta terminología y de esta perspectiva no significa omitir la consideración de las determinaciones sociales globales. El orden del análisis no refleja ninguna jerarquía entre las dimensiones. Prevalece la idea de sistema y totalidad. A lo largo de este trabajo, las dimensiones se consideran como grupos de determinaciones que se superponen, y que deben estar presentes simultáneamente para considerar que un proyecto es de gran

escala. A veces hay fenómenos sociales que se aproximan a esta categoría porque poseen una o dos de las dimensiones que hemos definido, pero no se los puede clasificar bajo este rótulo porque para ello es necesaria la presencia de las tres dimensiones. Por ejemplo, la construcción de un sistema subterráneo de transporte es un proyecto de construcción gigantesco y temporario, pero no se lleva a cabo en una zona aislada y, por consiguiente, no se le puede aplicar nuestra definición. Debido al carácter condensado de nuestra concepción, algunas características de los proyectos de gran escala podrían pertenecer, desde un punto de vista lógico, a más de una dimensión⁵.

1. El gigantismo

La importancia de la escala de los proyectos se percibe en designaciones tales como "grandes obras", "macrodesarrollo" y "macroingeniería". El "gigantismo" se aprecia con facilidad en las grandes construcciones hidroeléctricas, con sus imponentes represas que a veces se extienden a lo largo de varios kilómetros. En estos casos, el hombre resulta empujado por sus obras. Empero, mi preocupación por la escala no obedece prioritariamente a estas proporciones increíbles. El punto fundamental radica en que el tamaño de la tarea exige a la vez necesariamente, enormes cantidades de capital y de trabajo. Al considerar los proyectos de gran escala, limito mi campo a los que implican grandes movimientos de capital y mano de obra. Además, estos proyectos suelen responder a grandes necesidades económicas preexistentes, definidas de diversos

⁵ Por ejemplo, la ambigüedad jurídica, característica que explico al analizar el "aislamiento", se vincula con las tres dimensiones de los proyectos de gran escala. También tiene que ver con el "gigantismo" porque supone el control de un territorio por parte de una corporación grande y poderosa. La ambigüedad también puede obedecer a que siempre se trata de una situación temporaria. Es difícil explicar y mantener indefinidamente una situación excepcional.

modos, y/o generar ejes económicos completamente nuevos e igualmente grandes.

Los proyectos de gran escala suelen ser muy controvertidos a causa de la enorme demanda de capital y trabajo y porque inducen grandes cambios. Sólo sus dimensiones alcanzan para asegurar que se los tratará como asuntos geopolíticos de alcance regional, nacional o internacional. En consecuencia, es muy amplia la participación oficial, condición a menudo exacerbada por las reglas del financiamiento internacional. Los gobiernos pueden ser (a) promotores únicos del proyecto, o (b) importantes socios políticos y económicos con otros gobiernos y/o con una o varias empresas privadas nacionales o internacionales.

Los proyectos de gran escala son iniciados y promovidos por la planificación. Esta implica la evaluación científica de la viabilidad del proyecto. Pero esta empresa planificada requiere una estructura centralizada que coordine las complejas articulaciones necesarias para transformar planes en realidades. Requiere, en resumen, una poderosa y gran corporación. Es importante la naturaleza política y económica de la corporación —pública, privada, nacional, internacional, o una combinación de ellas— porque puede significar distintas sensibilidades y respuestas ante las presiones públicas. También puede implicar distintas condiciones de la vida diaria en la zona del proyecto.

La mayoría de los proyectos, cuando se los considera como cuestiones geopolíticas, son administrados por corporaciones públicas o tienen conexiones muy estrechas con organismos del Estado. Por lo general, las corporaciones públicas subcontratan con varias empresas privadas la realización de las diversas tareas concretas que supone el proyecto. También están mucho más cerca de las esferas del poder central y, por consiguiente, son susceptibles a las presiones políticamente organizadas. El poder de una corporación parece relacionarse, asimismo, con la escala del proyecto: cuanto mayor es éste, más influyente aquélla.

Los centros de decisión que ocupan los niveles superiores de la corporación deben cumplir diversas funciones.

Están integrados por un grupo central de responsables a quienes, en el futuro, se tenderá a identificar casi exclusivamente con el proyecto. Hay, por ejemplo, una junta de directores con funciones especializadas o múltiples. Puede haber políticos, cuya función consiste en abogar por la corporación ante organismos públicos o privados. Debe haber técnicos y especialistas —abogados, ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos, economistas, agrónomos, etcétera—, cuyo papel no radica sólo en la orientación técnica del proyecto sino en suministrar la necesaria apariencia de racionalidad y legitimación científica. Algunos miembros desempeñan un rol empresarial. Son un puente entre los responsables de jerarquía superior y los operadores de base. Se los puede considerar intermediarios entre los intereses de la administración y los eventuales conflictos laborales que surgen en el proceso de construcción. Son figuras muy importantes. Establecen relaciones populistas con los trabajadores. Tienden a ser respetados y mitologizados porque, a pesar de su elevada posición en la jerarquía de la corporación, se les supone expuestos a las mismas condiciones de vida duras a que está sometido todo el mundo en el territorio de la construcción.

Dada la escala de las transacciones, el personal superior de la corporación tiene acceso a muy altos niveles nacionales, y a veces internacionales, de poder político y económico. Es probable que algunos funcionarios superiores sean designados sobre la base de su capacidad personal para manejar redes políticas y económicas en beneficio del proyecto. Por ejemplo, a menudo se designa entre los directores a dirigentes nacionales políticos y militares. Como consecuencia, la empresa puede gozar de un poder político casi tan grande como su poderío económico. Esta es, también, una de las fuentes del tremendo poder que la compañía ejerce sobre las vidas de los participantes en el proyecto. En el lugar de la construcción, puede incluso llegar a sustituir al Estado. Tiende a generar una situación de facto en la cual los intereses de la corporación gobiernan todas las esferas de la vida de los participantes.

Suele resultar difícil justificar un proyecto de gran escala sólo sobre la base de argumentos puramente económicos. De hecho, algunos proyectos pueden diseñarse para promover cambios de largo plazo en el terreno político, además del económico. Por lo tanto, los factores políticos son por lo menos tan importantes como los económicos para el desarrollo de estos proyectos.

También son corrientes las incertidumbres acerca del futuro de un proyecto. Una vez iniciado, no hay garantías de su terminación. Por consiguiente, los proyectos de gran escala son acompañados por un proceso de legitimación que articula varias construcciones ideológicas. El gigantismo estimula la idea de que la dimensión del proyecto es positiva por sí misma, porque crea numerosas oportunidades para miles de personas. También se lo suele presentar como algo que redimirá a una región o país de su atraso. Es lo que podría llamarse una *ideología de la redención*, cuya matriz principal es la ideología del progreso, que muchas veces toma la forma del desarrollismo, es decir, la suposición de que los proyectos de gran escala son positivos porque desarrollarán una región, suministrando bienestar a todo el mundo. Los elementos condensados en esta actitud ideológica varían según la naturaleza de la obra, su importancia para la región o el país, y las particularidades históricas y culturales del medio en el que se levantará. Una historia regional o nacional es la fuente favorita de acontecimientos que se reordenan de tal manera que la construcción del proyecto resulta natural; lo que debe hacerse parece la mera obediencia a una tendencia histórica. El *regionalismo* o el nacionalismo son, así, un útil componente de esta ideología redentora. Por supuesto, es mucho más fácil utilizar así los hechos históricos cuando los proyectos tienen su propia *pre-historia*, que en este caso implica la existencia de declaraciones y análisis históricos, e incluso anteriores intentos fracasados, previos a la construcción efectiva del proyecto. Es evidente que no todos los proyectos de gran escala requieren un enorme esfuerzo de legitimación. Que ello ocurra, y en qué grado,

también depende de su empleo con fines políticos o de la familiaridad con proyectos similares. Algunos no se legitiman mediante una ideología elaborada sino con campañas publicitarias.

La ideología de la redención aparece con frecuencia bajo la forma de un reto histórico. Ante ese reto se vence, naturalmente, llevando a cabo el proyecto. La excepcionalidad de la obra exige individuos excepcionales para cumplir tareas de excepción. Se los suele presentar como pioneros que, con un tremendo y singular esfuerzo, construirán la "obra del siglo". El "pionerismo" es, pues, otro componente importante de esta forma ideológica. Puede estar acompañado por el *populismo* o, mejor, por una conducta populista de los promotores del proyecto. Esta debe crear la apariencia de una sociedad igualitaria, aunque temporaria, en la cual el objetivo común destruye las divisiones de clase y las diferencias culturales, unificando a todos bajo la bandera del progreso. El sentido de estas características no radica sólo en movilizar una opinión pública favorable al proyecto, sino en fetichizar, después de iniciada la obra, el ritmo extremadamente intenso y las dificultades de la vida diaria; los proyectos de gran escala no sólo requieren el trabajo de miles de personas, sino su presencia constante e infatigable en el lugar de trabajo.

En resumen, el gigantismo implica que: (1) los proyectos requieren grandes movimientos de capital y mano de obra; (2) constituyen intervenciones geopolíticas planificadas; (3) una corporación grande y poderosa maneja todo el proceso; (4) los proyectos se legitiman mediante una ideología de redención. Las variaciones de la escala ocasionan variaciones en estas cuatro características principales. Por ejemplo, la importancia y el poder de la corporación parece vincularse estrechamente con el monto del capital y el trabajo necesarios para el proyecto. El alcance del proyecto—regional o nacional—también varía en consecuencia, convirtiéndolo en un asunto regional o nacional con distintas implicaciones geopolíticas.

2. El aislamiento

En esta sección me centraré en la ubicación de los proyectos de gran escala en zonas aisladas. Para los antropólogos, el aislamiento es un tema recurrente por varias razones. Quizá la que más pese sea el deseo de encontrar una totalidad social que se explique por completo en términos de su propia lógica interna. El holismo metodológico es un soporte básico tradicional de la antropología. La búsqueda de sistemas sociales autocontenidos y cerrados puede conducir a interpretaciones erróneas a causa del excesivo hincapié en las relaciones internas y la subestimación de las externas (Kahn, 1978, p. 110; Wolf, 1982, pp. 13-19).

Si consideramos el carácter planificado de los proyectos de gran escala, así como los grandes movimientos de capital y trabajo que implican, resulta claro que no se los puede considerar autosuficientes o no integrados en sistemas socioeconómicos más amplios. En realidad, casi por definición relacionan zonas aisladas con sistemas económicos más vastos. No obstante, su construcción en zonas relativamente aisladas tiene varias implicaciones. De ellas nos ocuparemos aquí. Por consiguiente, es necesario definir lo que entiendo por aislamiento.

El aislamiento es siempre relativo y se lo debe considerar en términos de gradación. Aquí definiremos el aislamiento desde el punto de vista de las necesidades de los proyectos de gran escala. Tales necesidades están determinadas por la disponibilidad de medios de producción o, más bien, por su ausencia. No hay mercados preexistentes donde se pueda adquirir la fuerza de trabajo, las herramientas y los materiales necesarios. Muchas veces ni siquiera hay acceso a los mercados que podrían satisfacer estas necesidades básicas. De hecho, en estas regiones no hay una organización social preexistente, históricamente desarrollada, que pueda sostener totalmente a un proyecto de gran escala.

De este modo, el aislamiento relativo se refiere más a factores socioeconómicos (el desarrollo de las fuerzas productivas locales) que geográficos (el aislamiento físico

de la región). Estos últimos son los primeros que percibe el investigador, pero están subordinados al desarrollo de las fuerzas productivas.

Aunque se los puede calificar de secundarios, los factores físicos son, sin embargo, importantes. El aislamiento físico facilita la realización de una extensión del poder de la corporación: el establecimiento de un *territorio controlado* que obedezca a la lógica de la producción del proyecto. Como se sabe, el poder de la corporación a menudo llega a un punto en el que virtualmente sustituye al Estado. Esto se aprecia claramente en el campo de la seguridad pública: ésta, y el control coactivo, a menudo son regulados por organismos directa o indirectamente subordinados a la corporación.

El territorio donde se lleva a cabo el proyecto puede considerarse una zona de "enclave". Una característica que suele aparecer en estos puntos alejados es la *ambigüedad jurídica*. Esto significa que el Estado, aunque siempre está presente en los proyectos de gran escala, omite deliberadamente suministrar los servicios institucionales normales. Hay ambigüedad, pero no contradicción. El Estado se ausenta porque su objetivo principal es el éxito del proyecto y, por consiguiente, la "optimización" de la producción. La abdicación de la responsabilidad estatal resulta más fácil a causa de que el trabajo debe ser realizado por empresas privadas contratadas, y por la naturaleza temporal de los proyectos de gran escala. Un buen ejemplo de ello tiene que ver con la aplicación de la legislación laboral, que podría poner en peligro el ritmo de la construcción.

El aislamiento significa también que la primera tarea del proyecto sea conectar el territorio con regiones que puedan suministrar capital y mano de obra. Por consiguiente, las tareas preliminares se destinan a crear las condiciones para (a) tener acceso al lugar del proyecto, y (b) trabajar y vivir en él. El aislamiento plantea *problemas logísticos* que, cabe esperar, están previstos en el plan y pueden clasificarse en (a) el establecimiento de un flujo regular

y estable de capital y mano de obra, y (b) el manejo de estos factores en un territorio con condiciones materiales y sociales precarias.

El flujo regular de capital es problemático pero más fácil de manejar. El capital inicial para comenzar las actividades ya se definió y obtuvo antes de empezar las obras. El problema principal consiste en el transporte de materiales y equipo. Al principio se emplean las formas existentes de comunicación con el lugar porque el volumen de los bienes transportados no llega todavía a un punto que lo haga poco práctico. No obstante, los primeros trabajos en el proyecto consisten en (a) incrementar el sistema de transporte existente o crear uno nuevo que permita mantener un tráfico más intenso y pesado, y (b) construir los primeros depósitos y barracas.

Es más difícil establecer un *flujo regular de trabajadores*, que debe sustituir al ausente mercado de mano de obra. Hay una distinción básica entre flujos *organizados* y *no organizados* hacia el territorio. Es probable que los primeros momentos se caractericen por un flujo no organizado. Los proyectos de gran escala atraen per se a miles de trabajadores. Su presencia implica la oferta de salarios atractivos. Las escalas de salarios se publicitan ampliamente como parte de la estrategia de legitimación del proyecto. Los primeros trabajadores que llegan al territorio se dedican a las obras necesarias para sostener la llegada futura de miles de personas. Los primeros suelen provenir de las regiones vecinas. Por supuesto, la publicidad oficial tiene su influencia, pero esas llegadas también se vinculan con la eficacia de las redes sociales locales que dan a conocer las nuevas oportunidades que se presentan en la región. Al contrario que el flujo organizado, el *no organizado* es un movimiento espontáneo. Debido a la necesidad de una fuerza de trabajo grande y estable, los proyectos de gran escala no pueden depender de un movimiento tan aleatorio y disperso.

Un *flujo organizado* implica que exista una estructura, por lo común suministrada por el Estado, que controle el

acceso al territorio del proyecto. Varios organismos, o uno solo grande, *reclutan, eligen y envían* trabajadores a la región, asumiendo así funciones de intermediación. Mediante el control deliberado del reclutamiento, la selección y el acceso a la zona, estos organismos definen el perfil de la fuerza de trabajo del proyecto: por lo general, *trabajadores jóvenes, de sexo masculino, saludables y no acompañados por familiares*. El flujo organizado impide que se generen presiones demográficas sobre la zona por gente que no tenga una utilidad directa para el proyecto: hombres viejos o enfermos, mujeres y niños. Este último atributo, subsidiario pero importante, del flujo organizado, resulta más claro cuando empieza a surgir un incipiente mercado de mano de obra en el territorio del proyecto. Es probable que esto ocurra si éste cuenta con un suministro regular y adecuado de mano de obra y no requiere de trabajadores adicionales.

Una consecuencia importante del flujo organizado es el desequilibrio demográfico resultante de la ausencia relativa de familias y mujeres solteras. Se crea una situación social temporaria singular, en la cual la cantidad de hombres es muchísimo mayor que la de mujeres. Por lo tanto, la vida familiar no existe para la mayoría de la población. Estos sesgos de sexo y edad son características de la fuerza de trabajo que siempre parecen manifestarse cuando se hacen grandes inversiones en regiones que no tenían un mercado de mano de obra⁶. La población resultante está casi toda dedicada a la producción, prácticamente sin dependientes no productivos (según las definiciones del proyecto). La creación de una fuerza de trabajo con este

⁶ El flujo organizado se acerca a las definiciones de la migración forzosa (Oliver-Smith y Hansen, 1982, pp. 2-5). Tinker (1974), al analizar el flujo de trabajadores indios a las plantaciones de las Antillas Británicas y la isla Mauricio después de abolida la trata de esclavos, suministra abundantes datos sobre la proporción de sexos en la fuerza de trabajo migrante. La participación de las mujeres podía variar, por ejemplo, de 17 a 40 % (cf. pp. 70, 88, 89, 90). En ciertas zonas, Ribeiro (1982, p. 117) señala una cifra de 17 %

sesgo demográfico es, con toda claridad, una estrategia para mantener bajo el costo de la reproducción social de la fuerza de trabajo ocupada en el proyecto. Dado el corto plazo de los proyectos aislados, no hay necesidad de reproducir una fuerza de trabajo estable en el largo plazo.

Esta singular situación social se conecta evidentemente con otros dos importantes problemas logísticos vinculados con el aislamiento: el suministro de *alimento y vivienda* para miles de personas. La solución de un abastecimiento regular es otra característica central de los proyectos de gran escala: la construcción de varios *campamentos planificados*. Su organización interna, con grandes barracas, comedores y otras instalaciones (almacenes, oficinas, etcétera), refleja de varias maneras las necesidades y la lógica de los proyectos. Es necesaria para establecer la disciplina que organiza la vida diaria de la fuerza de trabajo. Los trabajadores se ajustan a pautas espaciales y temporales establecidas. Es preciso formular dos distinciones. La primera obedece a las distintas posiciones jerárquicas dentro de las ramas productivas que intervienen en el proyecto. Habrá, por consiguiente, una diferencia básica entre las instalaciones destinadas a los trabajadores no calificados y las que ocupen los técnicos, capataces, administradores y operarios calificados. Este último grupo puede negociar incluso la posibilidad de traer a sus familias. El poder de negociación de que gocen dependerá de su escasez relativa en la región y de su importancia para el proyecto. La segunda gran diferencia tiene que ver con la ausencia relativa de familias y mujeres. Dentro de los campamentos se distingue entre los que pueden traer a sus familias y los que no, distinción que coincide con la diferenciación jerárquica de todo el proyecto de gran escala. Por consiguiente, lo

durante la construcción de Brasilia. La analogía con el tráfico de esclavos aparece en algunas descripciones del flujo organizado. Es interesante señalar las similitudes entre ambos movimientos; los dos implican para el individuo la pérdida de sus redes sociales anteriores y son seguidos por un enorme desequilibrio de la participación de los sexos en la población.

más probable es que los campamentos se dividan en dos zonas principales, una destinada fundamentalmente a *trabajadores no calificados sin familia* y la otra a *trabajadores calificados y sus familiares*. La calidad de la vivienda (tamaño, materiales, servicios) varía en consecuencia.

A veces, la solución planificada para la organización del territorio incluye una zona para tiendas, hoteles, bares, restaurantes, bancos, etc. Los planificadores pueden aprovechar un pueblo preexistente y convertirlo en un *proveedor de servicios* para el territorio de la construcción. Esta es, sin duda, una zona mucho más abierta y menos controlada, donde se supone que la gente reproducirá una vida social "normal". También constituye la única opción frente a los campamentos, a menos que surjan asentamientos precarios e ilegales en la periferia del territorio del proyecto. Al tratarse de una zona relativamente no controlada, es allí donde tiende a aparecer un mercado incipiente de fuerza de trabajo. Es también donde la gente gasta su dinero y puede disponer sin controles de su tiempo libre.

La necesidad de una enorme cantidad de trabajadores en una región aislada crea un universo social cuya población está compuesta por extraños, a quienes mantiene unidos su participación en una empresa económica totalizadora. Los individuos están temporariamente aislados de sus redes sociales anteriores. Se encuentran en una especie de *tierra de nadie*: provenientes de distintas partes, de diferentes medios económicos, sociales, étnicos y culturales, los mantiene unidos una misma estructura impersonal. En los proyectos internacionales de gran escala, muchas veces hay una división de trabajo por nacionalidades. La población de un proyecto de gran escala tiende a ser homogénea en términos de sexo y edad, pero *heterogénea por sus orígenes*.

Por otra parte, esto hace más fácil la tarea de los responsables del proyecto, puesto que suministran y controlan la única "organización social" disponible. Es evidente que esto se vincula de manera directa con los intereses del pro-

yecto. Como no hay tiempo de construir una "organización social" alternativa a la suministrada por el proyecto, es improbable que los trabajadores puedan organizar una oposición laboral o política eficaz. A la vez, esta segmentación por orígenes es: (1) el primer mecanismo mediante el cual los trabajadores se organizan para establecer redes de cooperación y solidaridad sobre la base de su identidad regional, nacional o étnica; (2) una fuente de conflictos, donde la polarización étnica o nacional puede generar tensiones que reduzcan la eficiencia productiva.

Las fuentes más comunes de conflicto provienen de la excepcionalidad de este universo social creado. Puede haber crisis graves cuyo origen radique en la diversidad étnica, la ausencia relativa de familias y mujeres o la calidad de la alimentación y la vivienda. Los conflictos ocasionados por la diversidad étnica también deben comprenderse a la luz de la distinta participación en (a) el control del proceso productivo; (b) la distribución de los beneficios; (c) la estructura jerárquica de las empresas, y (d) la diferente participación en el proyecto de las distintas ramas de la producción.

La *prostitución* y el *alcoholismo* en gran escala parecen la reacción más evidente ante la deformación demográfica, y pueden conducir a frecuentes reyertas entre trabajadores. Los *disturbios por la alimentación* también pueden ser frecuentes y violentos. La *vivienda* es un tema crucial, sobre todo en los proyectos de gran escala que implican modificaciones de las pautas locales de residencia a causa del reasentamiento de la población. Las presas, por ejemplo, con sus enormes lagos artificiales, siempre obligan a reasentamientos. La construcción de ciudades es especialmente propicia para los conflictos de vivienda porque generan nuevas expectativas.

El control de estos conflictos es a menudo violento (Ribeiro, 1980, pp. 141-185; Hirschman, 1967, p. 47). En todo el territorio, y sobre todo en los campamentos, los guardias pueden transformar el orden público en un "terror" oficial. El aislamiento hace más fácil mantener la

disciplina. Los individuos rara vez tienen acceso a instituciones que puedan intervenir contra el abuso del poder. Como los proyectos de gran escala son territorios "cerrados" donde hay una ambigüedad jurídica, todas las cuestiones deben tratarse internamente hasta el momento de desmovilizar este modo de producción. Esto nos lleva a nuestra tercera dimensión: la temporalidad.

3. La temporalidad

Al decir que los proyectos de gran escala son una forma *temporaria* de producción, quiero significar que se trata de sistemas identificables cerrados en el tiempo; además, comienzan y acaban en un lapso relativamente corto. En tal sentido, es una forma de producción que se activa y desactiva. Aunque en la práctica se trata de movimientos graduales, es común encontrar fechas precisas que señalan el comienzo y el fin del proyecto. La inauguración es la señal de la desmovilización general de la organización productiva anterior.

Un proyecto de gran escala no puede durar para siempre porque es una manera planificada de producir un bien enorme y único, que se empieza a utilizar una vez terminado. La tarea fundamental que subsiste es el mantenimiento. Por consiguiente, la inauguración puede considerarse la ceremonia ritual que separa las esferas de la producción y el consumo.

Manejar movimientos gigantescos de mano de obra y capital en una región aislada convierte a la programación y calendarización en una preocupación fundamental de planificadores y controladores. Los proyectos de gran escala son el resultado final de trabajos parciales que deben coordinarse de forma secuencial. Las metas del proyecto deben alcanzarse por razones económicas y políticas. Uno de los problemas más difíciles que debe afrontar la administración es el cumplimiento del programa. El incumplimiento de las metas temporales previstas aumenta inde-

fectiblemente el costo del proyecto (Murphy, 1983, pp. 18-20). La programación necesaria para cumplirlas implica una mayor planificación y un mayor control de la producción. A medida que se acumulan las metas incumplidas, quienes controlan la producción tienden a acelerar el ritmo de trabajo. Desde el punto de vista de la administración, es necesario reforzar la disciplina de los trabajadores para cumplir plazos que se hacen cada vez más estrictos. Los capataces tienen a su disposición la estructura de los campamentos, que suministra masas de trabajadores en los momentos regulares definidos por las necesidades del proyecto. La intensa actividad productiva demanda todo el tiempo y todas las energías de los participantes. Dada la relativa ausencia de un ámbito doméstico y de tiempo libre, el territorio controlado por la empresa es un lugar perfecto para imponer un medio controlado. Casi no hay tiempo que no se dedique al trabajo; el poco que hay tiene por objeto impedir que el sistema llegue a un punto de tensión incontrolable. La temporalidad refuerza el carácter singular del universo social que se crea en los proyectos de gran escala. Nadie tiene tiempo para (a) emprender actividades no controladas, y (b) establecer redes sociales profundas y amplias. El sistema se cierra en sí mismo. Los trabajadores tienen que trabajar, e incluso su tiempo libre resulta gobernado por la lógica del proyecto.

Además de ajustar todo el universo social a un ritmo acelerado de producción, hay formas económicas explícitas para aumentar la productividad de la mano de obra. Algunas implican alargar la jornada de trabajo, lo cual, aunque es corriente en muchas actividades económicas, se convierte en pan de todos los días para los trabajadores de proyectos de gran escala. "Tanto da" que sea noche o día cuando los turnos abarcan las veinticuatro horas. Las *horas extra* se vuelven cosa de rutina. Hay otros mecanismos más intensos.

El *trabajo a destajo* es una de las maneras preferidas para aumentar el ritmo de la actividad productiva. El trabajador es estimulado por la posibilidad de agregar a su quin-

cena una cantidad significativa de horas extra (que suelen pagarse más que las comunes), o por la de recibir, mediante el pago a destajo, horas aparentemente no trabajadas. El tiempo se convierte en una medida del ingreso monetario; el esfuerzo físico y el gasto de energía pasan a un plano secundario y subordinado. En los proyectos de gran escala, una de las razones por las cuales los trabajadores aceptan el ritmo de producción se vincula con el carácter temporario de esta forma de producción y con la evaluación estratégica que hacen de sus empleos. Un proyecto de gran escala es un lugar donde se trabaja más, pero donde también se gana más. Puede representar la oportunidad de ahorrar dinero y enviarlo a la familia. A causa de este aspecto económico, en estos proyectos no son comunes los conflictos por salarios. El corto plazo y la ausencia de una verdadera planificación del subsiguiente reasentamiento de los miles de trabajadores desmovilizados demuestra, una vez más, que la fuerza de trabajo se usa sólo en la medida de las necesidades del proyecto.

El carácter temporario implica otras particularidades que se reflejan en el proceso productivo. La más evidente es la manipulación de la fecha de inauguración para acelerar la producción. La proximidad del "día D" maximiza el empleo de métodos de aceleración y de aumentos de la jornada laboral. Las expectativas que genera la prevista culminación del proyecto otorgan a esta fecha una pesada carga simbólica. Se establece un umbral en el tiempo: antes y después de entrar en funcionamiento la "gran obra". Los programadores de las ceremonias inaugurales suelen tener conciencia del peso y el significado de la fecha. Un análisis de los rituales y símbolos empleados mostraría su adecuación a la ideología de redención característica de los proyectos de gran escala. Las ceremonias suelen ser enormes demostraciones de poder político bañado en nacionalismo y en el orgullo colectivo por haber creado "la obra del siglo". Se alcanzó la meta. El proyecto de gran escala se ha terminado.

III. Conclusión

En este trabajo he intentado reunir algunas ideas básicas para el análisis de los proyectos de gran escala. En la actualidad, una evaluación profunda de la utilidad de esta categoría depende de ulteriores investigaciones empíricas. Inevitablemente, el concepto evolucionará hacia niveles más abstractos a medida que otros investigadores refinan este marco y lo hagan avanzar. Espero que este artículo estimule una discusión posterior.

Traducido por Rubén Svirsky

BIBLIOGRAFIA

- ASPELIN, Paul (1982): "Too Much Light: Hydroelectrics Development in Brazil", en *Hydroelectrics in Central and South America*, Boletín N° 11 del Anthropology Resource Center, Boston.
- ASPELIN, Paul, y SANTOS, Silvio dos (1981): *Indian Areas Threatened by Hydroelectric Projects in Brasil*, Copenhagen, IWGIA, Documento N° 44.
- DALTON, George (1971): "Introduction", en *Economic Development and Social Change*, G. Dalton (ed.), Nueva York, American Museum Sourcebooks in Anthropology.
- DAVIDSON, Frank, y MEADOR, Lawrence (eds.) (1982): *Macro Engineering and the Future: a Management Perspective*, Boulder, Westview Press.
- DUQUE, Ghislaine (1980): *Casa Nova: Interventions du Pouvoir et Stratégies Paysannes. Un "município" du "sertão" bahiano a l'heure de la modernisation*, tesis de doctorado de tercer ciclo de sociología, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
- HANSEN, Art, y OLIVER-SMITH, Anthony (1982): "Involuntary Migration and Resettlement: Causes and Contexts", en Hansen, A., y Oliver-Smith, A. (eds.), *Involuntary Migration and Resettlement: The Problems and Responses of Dislocated People*, Boulder, Westview Press.
- HIRSCHMAN, Albert O. (1967): *Development Projects Observed*, Washington D.C., The Brookings Institution.
- HOBEN, Alan (1982): "Anthropologists and Development", en *Annual Review of Anthropology*, vol. 1, Palo Alto, California.
- KAHN, J.S. (1978): "Marxist Anthropology and Peasant Economy; a Study of the Social Structure of Underdevelopment", en Clammer, J. (ed.), *The New Economic Anthropology*, Saint Martin's Press y Macmillan.
- MURPHY, Kathleen (1983): *Macroproject Development in the Third World*, Boulder, Westview Press.
- NASH, June (1983): "Implications of Technological Change for Household Level and Rural Development" (inédito).
- PARTRIDGE, William; BROWN, Antoinette, y NUGENT, Jeffrey (1982): "The Papaloapan Dam and Resettlement Project: Human Ecology and Health Impacts", en Hansen, A., y Oliver-Smith, A. (eds.), *Involuntary Migration and Resettlement: The Problems and Responses of Dislocated People*, Boulder, Westview Press.

- RIBEIRO, Gustavo Lins (1980): *O Capital da Esperança: Brasília, Estudo sobre uma Grande Obra da Construção Civil*, disertación de maestría para el Programa de Posgrado en Antropología de la Universidad de Brasília.
- RIBEIRO, Gustavo Lins (1982): "Arqueologia de Uma Cidade", en *Espaço e Debates: Revista de Estudos Regionais e Urbanos*, vol. 2, N° 5, Sao Paulo, Cortez Editora.
- SANTOS, Silvio Coelho dos (1981): "Indigenismo e Expansão Capitalista: Faces da Agonia Kaingang", en *Cadernos de Ciências Sociais*, vol. 2, N° 2, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
- SANTOS, Silvio Coelho dos, et al. (1980): *Projeto Uruguai: Consequência da Construção da Barragem Machadinho para os Índios do Posto Indígena Ligeiro (Rio Grande do Sul)*, Florianópolis, Universidad Federal de Santa Catarina (Silvio Coelho dos Santos, Alcida R. Ramos, Cecília M. V. Helm, Luís Carlos Halfpap y Aneliese Nacke).
- SCUDDER, Thayer, y COLSON, Elizabeth (1982): "From Welfare to Development: a Conceptual Framework for the Analysis of Dislocated People", en Hansen, A., y Oliver-Smith, A. (eds.), *Involuntary Migration and Resettlement: The Problems and Responses of Dislocated People*, Boulder, Westview Press.
- TINKER, Hugh (1974): *A New System of Slavery: The Export of Indian Labour Overseas 1830-1920*, Oxford University Press.
- WALI, Alaka (1982 a): "Mexico's Papaloapan Hydroelectric Project: A Lesson from the Past", en *Hydroelectrics in Central and South America*, Boletín N° 11 del Anthropology Resource Center, Boston.
- WALI, Alaka (1982 b): "Panama's Dams: Consequences for the Indian People", en *Hydroelectrics in Central and South America*, Boletín N° 11 del Anthropology Resource Center, Boston.
- WOLF, Eric (1982): *Europe and the People Without History*, Berkeley, University of California Press.

**REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES:
LOS ROLES DE LOS GRUPOS CORPORATIVOS
EN LAS RELOCALIZACIONES URBANAS**

WILLIAM L. PARTRIDGE*

* Department of Anthropology, Georgia State University, University Plaza, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Dos de los problemas más apremiantes que deben resolverse al diseñar y poner en práctica programas de reasentamiento son: (1) descubrir la organización social endógena de la comunidad amenazada por el desplazamiento, y (2) establecer un programa de participación de la comunidad en el proceso de reasentamiento que se adecue a esa organización social endógena. En este trabajo se sugiere una solución para ambos problemas.

I

Hoy en día sabemos mucho más sobre el proceso de reasentamiento y sobre las respuestas de los desplazados ante el reasentamiento forzoso de lo que sabíamos hace un decenio, gracias a los trabajos precursores de Scudder, Colson, Fahim, Chambers y otros. No obstante, análisis recientes de los conocimientos actuales sobre este tema realizados por Bartolomé (1984) y Partridge (1984) revelan ciertas lagunas y señalan la necesidad de refinamientos conceptuales en nuestra comprensión del proceso de reasentamiento. Esto es especialmente importante cuando se trata de facilitar la participación de una población urbana muy heterogénea amenazada por el desplazamiento y el reasentamiento.

Empecemos por considerar el significado antropológico del término técnico "comunidad". Los antropólogos afirman que la comprensión de las culturas humanas no se encontrará en los diminutos mapas genéticos mediante los cuales se reproducen los organismos individuales de un grupo, que tampoco reside en un *elan vital* de ciertos organismos, ni se ubica en la maleable psicología individual.

Esa comprensión se hallará en las estructuras sistemáticas y recurrentes de la interacción social humana. La más significativa de ellas es la comunidad humana, ese sistema de regularidades y de comportamientos culturales en la interacción entre individuos, que son creados, mantenidos y transmitidos por los grupos sociales en un contexto ambiental. Esta definición generaliza varios puntos que desarrollo a continuación.

El énfasis en la regularidad de la interacción llama la atención sobre la base biológica de la vida social. La prohibición del incesto, que exige a los grupos exogámicos interactuar de determinada manera predecible, es una técnica primordial de supervivencia de la especie. Las implicaciones de la infancia prolongada y la pubertad tardía nos convencen de que la sociedad no está basada en grupos familiares sino en estructuras organizativas que vinculan a muchas de esas unidades en grupos más grandes. Tres generaciones, dos sexos y las organizaciones sociales mediante las cuales se articulan son, por consiguiente, los elementos fundamentales de la comunidad humana.

El acento en el comportamiento cultural proviene directamente de estos requisitos elementales de la vida social. Las estructuras organizativas que vinculan a las unidades sociales varían en el tiempo y el espacio, y provienen de las experiencias de aprendizaje de las generaciones precedentes. Las pautas de elección de pareja, forma de asentamiento, actividad de subsistencia, creencias y otras por el estilo expresan respuestas de las unidades sociales contemporáneas ante condiciones comparables a las enfrentadas por sus antepasados. No creemos que se trate de "reglas" a las que la gente se ajusta sino de restricciones que delimitan el campo mediante la determinación cultural de escalas de valores. La lógica de tales sistemas culturales es endógena; sus postulados son universales.

El hincapié en el contexto ambiental subraya la importancia de las interdependencias sistemáticas entre las unidades sociales en virtud de compartir un vínculo con el mundo natural y artificial. Las comunidades son almace-

nes de respuestas adaptativas con aspectos temporales y espaciales, respuestas que reflejan una configuración heterogénea de elementos conductuales, cuya intensidad y frecuencia varían según los estímulos provenientes del medio. La comunidad es, pues, el sitio de las influencias condicionantes provenientes de la organización de los semejantes con respecto al individuo (véase Kimball y Partridge, 1979).

Quiero subrayar un elemento importante de esta conceptualización de comunidad: su heterogeneidad. Las comunidades son, por cierto, una configuración heterogénea de elementos conductuales cuya intensidad y frecuencia varían según los estímulos provenientes del medio natural y artificial. Si es cierto que todas las sociedades se caracterizan en alguna medida por tener relaciones estructurales sociales tanto simétricas como asimétricas, también es cierto que algunos sistemas sociales son más asimétricos que otros. A pesar de Durkheim, no hay sociedad en la cual todos los individuos desempeñen idénticos roles sociales o donde las relaciones sociales se integren de manera totalmente mecánica; pero la gran mayoría de las comunidades humanas están orgánicamente integradas por una cantidad de posiciones sociales asimétricas y heterogéneas que entrañan diferencias de poder, riqueza e influencia entre los actores sociales.

Los distintos teóricos sociales han caracterizado a las subunidades o subdivisiones de las comunidades humanas enfatizando algunas de sus funciones dentro del contexto comunitario más amplio. Por ejemplo, Sir Henry Maine (1960) subrayó las perpetuas relaciones asimétricas del status basadas en el control de un bien o una propiedad común por parte de un patriarca (y sus descendientes), y el dominio sobre bienes raíces mediante contratos, pactos, rituales u otras convenciones por parte de unidades corporativas. En las comunidades agrícolas, cazadoras o pastorales, donde las unidades de la estructura social coinciden con las unidades productivas, el control de un territorio es una manera útil de distinguir las subunidades de

las comunidades. Empero, como señala Bartolomé (1984), en las sociedades urbanas occidentales las unidades de la estructura social no siempre coinciden con unidades de producción. Max Weber subrayaba (Bendix, 1962) la característica del liderazgo y control de las autoridades sobre grupos de personas, que según él implicaba la realización, por parte de los líderes, de acciones individuales psicológicas y políticas basadas en el poder coactivo. No obstante, el interés de Weber se limita a sociedades de nivel estatal, con élites alfabetizadas, burocracias formales, ejércitos en acción con facultades policiales, etc. Su análisis es inadecuado para sociedades sin Estado, bandas y formas comunitarias aldeanas, e incluso para estructuras sociales complejas en las que la coerción no alcanza para explicar todas las actividades colectivas y corporativas. Según Durkheim (1960), las subunidades de la sociedad eran identificables en términos de su solidaridad, que a su vez era producto de la conciencia o cultura colectivas (pero "cultura" según la definición más restringida de la tradición idealista alemana, como el "espíritu objetivo" hegeliano, o de la francesa, como la "voluntad general" de Rousseau). En esta formulación resulta problemático definir los límites entre las subunidades culturales y con la comunidad, porque exigiría definir quién cree en qué, o con cuánta convicción.

Como ha señalado Smith (1974), las subunidades de la sociedad no pueden caracterizarse de modo universal como apoyadas en el derecho a un territorio, una estructura de autoridad o la voluntad colectiva. En verdad, todas estas características, "más o menos claramente, implican unas a las otras" (Smith, 1974, p. 96). Un modo más útil de conceptualizar estas subunidades, cuando tienen importancia estructural dentro de la comunidad, es el empleo de su capacidad de llevar a cabo distintas clases de *actividades corporativas*. Smith sostiene que todas las sociedades humanas están estructuradas por el grupo corporativo, que se caracteriza por una presunta perpetuidad, circunscripción, afiliación restringida, identidad, autonomía, organización, procedimientos y asuntos comunes. La interdependencia

de estos elementos implica que ninguno de ellos, por sí solo, puede constituir o mantener un grupo corporativo (Smith, 1974, p. 96). Pero todos entrañan la acción corporativa.

La actividad corporativa puede ser de diversas clases. Puede ser ostensiblemente productiva (Partridge, 1979) y no obstante tener todas las características de perpetuidad, circunscripción, afiliación, identidad y demás mediante las cuales se organizan el status y el poder corporativos en la comunidad. Las actividades corporativas productivas también pueden suministrar vínculos con órdenes sociales más amplios, como el estado-nación, un grupo étnico o un partido político, como lo ha descrito Bartolomé (1975). Asimismo, pueden ser fundamentalmente relaciones de parentesco, como la descendencia, o de parentesco ficticio, como el compadrazgo (Foster y Pitt-Rivers, 1960; Kemper, 1974), y aun así significar derechos sobre intereses comunes, formas organizativas, unidades productivas, etcétera. También pueden corporizarse en intereses comunes, una identidad étnica común, y la común afirmación y reafirmación ritual de esa identidad (Doughty, 1970; Mangin, 1960; Simic, 1974). Del mismo modo, ciertas unidades políticas pueden tener las características de la corporatividad, derivando totalmente sus derechos sobre recursos humanos y no humanos, el control sobre las personas, la identidad, los límites, la forma organizativa, la autonomía, los procedimientos y los negocios comunes, de su rol en superestructuras políticas de una sociedad compleja, como ocurre en los ejidos colectivizados de la agricultura industrial mexicana (Carlos, 1971). En otras palabras, las características ostensibles u obvias de la corporatividad y de los grupos corporativos, varían de una cultura a otra. No obstante, en todos los casos, se trate de una hermandad religiosa, una familia ampliada, una hacienda ganadera, una cooperativa de consumo, una asociación vecinal, un club social o una empresa, estas subunidades de comunidades humanas comparten las características formales e informales de los grupos corporativos y llevan a cabo algún tipo de actividad corporativa,

Empleo el término técnico "grupo corporativo" para subrayar que las comunidades humanas relativamente pobres, incluso las localizadas en zonas urbanas, se caracterizan por estructuras organizativas, jerarquías de liderazgo y patrones regulares, rutinarios y repetitivos de comportamiento social. Esto es contrario a la imagen popular de los pobres urbanos y rurales. En particular Lewis Wirth (1975; original de 1938) pero también Oscar Lewis (1966) popularizaron la idea de que los pobres, y sobre todos los urbanos, carecen de vida social organizada y de estructura social o jerarquías de liderazgo persistentes. Wirth (1975, p. 35) escribió:

En la ciudad, los contactos podrán ser cara a cara, pero de todas maneras son impersonales, superficiales, transitorios y fragmentarios. La reserva, la indiferencia, el aspecto hastiado que muestran en sus relaciones los habitantes de la ciudad, pueden considerarse mecanismos para inmunizarse a sí mismos contra los reclamos y expectativas personales de los demás.

Lewis (1966) afirma que la desorganización social es una de las características de la llamada "cultura de la pobreza". Y Kunz (citado en Hansen y Oliver-Smith, 1982, p. 2), al aplicar esta imagen popular a los migrantes, se refiere a sus movimientos como cinéticos, similares a los de "una bola de billar: desprovistos de una dirección interior, su rumbo está gobernado por factores cinéticos".

Esta imagen de desorganización no está apoyada por la moderna investigación antropológica intercultural. Doughty (1970) ha demostrado la forma muy estructurada y las funciones organizativas de los clubes sociales de Lima, Perú, que actúan, como lo describen Little (1965) y Kerri (1976) en el caso de Africa, para gobernar y controlar la conducta de sus miembros y para suministrar importantes servicios de apoyo como distribución de alimentos, cuidado de niños, información sobre empleos, préstamos de corto plazo y otros recursos vitales. Mintz y Wolf (1950) analizan el carácter de las redes de compadrazgo, que desempeñan funciones similares en México y América Central,

incluidos la asistencia en el parto, el consejo médico, el empleo, el obsequio de alimentos y otros servicios. Bryce-Laporte (1968) y Safa (1974) han documentado la estructura de las redes de parentesco y familiares en los barrios bajos de Puerto Rico, y Leeds (1969) y Pearse (1961) en las favelas de Río de Janeiro, estructuras organizativas que, de la misma manera, suministran servicios esenciales de apoyo a sus miembros. Gans (1962) mostró las cruciales funciones de apoyo que desempeñan tanto los grupos familiares como los de uso del suelo en una ciudad de Estados Unidos, suministrando a los individuos recursos sociales y económicos sin los cuales se empobrecerían. Tanto Suttles (1968) en su estudio de los pobres de Chicago, como Gans (1962) en el suyo sobre los italianos pobres de Pittsburgh, y Peattie (1970) en sus trabajos sobre los barrios pobres de Venezuela, han demostrado la importancia de los clubes, asociaciones vecinales y otras unidades sociales basadas en el control y uso de territorios urbanos. En resumen, el desorden y el aislamiento no son el estado natural de los pobres urbanos ni una característica de la pobreza per se.

Un ejemplo que viene al caso es el estudio de Pearlman (1974) sobre los efectos del reasentamiento de la población de favelas en Brasil. Los residentes de las favelas son pobres, y se los percibe como carentes de toda estructura social endógena significativa o de organización grupal con características corporativas. Sin embargo, después del reasentamiento resultó claro que la estructura de apoyo económico y social de la favela trascendía con mucho la unidad hogareña. Consiste en una red (destruida por el reasentamiento) de parientes y vecinos cooperadores e interdependientes, que no viven necesariamente uno al lado del otro, pero que integran una unidad social que suministra crédito de corto plazo, asistencia médica, asistencia de parto, préstamos y obsequios de alimentos, y muchos otros servicios de gran importancia. Quizá la razón de que no podamos nombrar muchos más de estos grupos sea que pocos investigadores los han tomado en serio.

Otro ejemplo es la *tanda* o *cundina*, la asociación informal de crédito rotativo que Vélez (1982) estudió en México y Estados Unidos. Es cierto que no todas estas asociaciones tienen características corporativas, pero tanto entre las opulentas clases superiores como entre las más pobres, muchas de ellas asumen la función de unidades corporativas de la comunidad. De hecho, a menudo desempeñan una notable función de "porteros" para otras unidades sociales, más aceptables, como zonas residenciales, cargos políticos, categorías ocupacionales y otras. Por esta vía los miembros son reclutados, iniciados, controlados y en general sujetos a las actividades corporativas del grupo.

En resumen, donde dirijamos la mirada encontraremos ejemplos de grupos y actividades corporativas en la comunidad urbana, incluso en las que contienen un gran porcentaje de pobres. Al enfrentar el problema del reasentamiento de estas comunidades, es esencial no sólo preservar su estructura de apoyo económico y social sino, además, incluirla como parte integral de la planificación y ejecución del programa de reasentamiento.

II

La participación comunitaria es un redescubrimiento reciente. Hace treinta años, los antropólogos dedicados al desarrollo comunitario sostenían que esa participación era absolutamente esencial para el éxito de los proyectos de desarrollo (Kimball, 1946; Spicer, 1952; Opler, 1954). En los últimos tiempos hemos presenciado el redescubrimiento de este principio elemental (Development Alternatives, 1975; Korten, 1980). Debemos acoger este hecho con beneplácito, puesto que un mayor hincapié en la participación comunitaria es vitalmente necesario. Sin embargo, como señala Cernea (1983), se requiere mucho más que esta mera conciencia; para lograr la meta de la participación comunitaria, es necesario un método claro y coherente que la facilite, así como involucrar a todos los afectados

por un programa en su elaboración y ejecución. En otras palabras, el problema más difícil no radica en resolver si se invita a la comunidad a participar en un proyecto de reasentamiento, sino en cómo lograr que participe.

En la primera parte de este trabajo he subrayado la universalidad de los grupos corporativos y de la actividad corporativa en la comunidad humana, e hice hincapié en que tal afirmación también es válida para las comunidades urbanas. Estas formas sociales endógenas tienen, por una parte, modos de acción social bien establecidos y tradicionales. Por otra, son también mecanismos mediante los cuales la comunidad trata con el mundo exterior y con las instituciones de la sociedad mayor. En resumen, existen mecanismos tradicionales para tratar con otros grupos corporativos competitivos tanto dentro como fuera de la comunidad.

La mayoría de los proyectos de desarrollo, pero sobre todo los de reasentamiento, provienen de la sociedad mayor y de sus poderosas instituciones. Representan intrusiones en la comunidad y, en un sentido real, compiten con los grupos corporativos endógenos por el control de los recursos humanos y no humanos.

Esa competencia, si no se la organiza y diseña adecuadamente, puede convertirse en un foco de conflicto, resistencia y rebelión permanentes. Coser (1956) observó que, de hecho, ese conflicto puede llegar a ser el punto focal para el surgimiento de nuevos grupos corporativos o para el refuerzo y la vigorización de los existentes. La necesidad de resistir las incursiones de otros grupos corporativos bien podría hacer surgir formas corporativas cohesivas y resistentes donde antes quizá no existían.

Por otro lado, Bartolomé (1975) demostró cómo los "sistemas de actividades" endógenos pueden ser reemplazados por otros provenientes de la sociedad mayor. Las nuevas clases de actividad corporativa pueden ser el mecanismo mediante el cual las unidades sociales endógenas existentes pueden ser reorientadas (o reorientarse a sí mismas) de manera de constituir vínculos con recursos,

personal y poder social de distintos tipos con los cuales normalmente habrían competido.

La participación, pues, puede ser la clave para mitigar la propensión natural de los grupos sociales humanos, cuando se enfrentan a crisis tan dramáticas como un desplazamiento, a reforzar los grupos corporativos endógenos o a transformarlos para resistir el desplazamiento. En cierto sentido, la participación es necesaria en tales programas para minimizar la resistencia.

Dado que las comunidades humanas no son homogéneas, ninguna actividad podrá abarcar a todos los integrantes de la misma manera o con la misma intensidad, ni sus beneficios y costos se distribuirán por igual entre viejos y jóvenes, hombres y mujeres, ocupados y desocupados, conservadores y progresistas, enfermos y sanos. Hay quienes sostienen que hacer participar en los proyectos de desarrollo sólo a algunos miembros de la comunidad implica crear grupos favorecidos o élites. Ese argumento es ilógico. Como señalamos más arriba, todas las comunidades están integradas por grupos corporativos ya existentes. Ante situaciones de cambio, esos grupos se moverán con rapidez para monopolizar los nuevos beneficios que pudieran provenir del proyecto de desarrollo. Como descubrimos en el proyecto del Papaloapan, incluso cuando las autoridades del desarrollo desalientan específicamente la participación, los grupos corporativos endógenos se movilizan rápidamente para lograr toda la participación posible, con el fin de monopolizar las nuevas fuentes de poder, riqueza e influencia (Partridge, Brown y Nugent, 1982).

Es innegable que algunos miembros de una comunidad se beneficiarán más que otros de determinado proyecto de desarrollo; por eso es importante diseñar específicamente programas como los de reasentamiento de modo de maximizar la cantidad de miembros de la comunidad que participen en él. Esto resulta posible cuando se respeta la organización endógena de la comunidad y, específicamente, el complejo sistema de interrelaciones entre los grupos sociales corporativos. De esa manera, en lugar de competir con

las unidades sociales existentes por el control de sus miembros (y correr el riesgo de enajenar a las unidades que no se pueda vencer), el programa de desarrollo y reasentamiento puede trabajar mediante esas unidades de manera de llegar al mayor número de participantes potenciales.

El término "potenciales" es importante. Como señaló Cernea (1983), la participación, para tener éxito, debe ser una actividad permanente que no sea un fin en sí misma sino un medio para alcanzar una meta. Los individuos, y los grupos corporativos que ellos representan, participarán en la medida en que prevean obtener beneficios (es decir, que sus opiniones se respeten, que resulte demostrable su influencia en el diseño del proyecto, etcétera). Por tanto, la participación entraña actividades colectivas en las que intervienen actores de grupos corporativos que representan a la sociedad mayor y a la comunidad; unos y otros se encuentran en la arena para negociar, comerciar, regatear y manipular el programa de desarrollo y reasentamiento. El proyecto resultante será, entonces, un compromiso alcanzado por los grupos corporativos participantes. Ese proyecto es la meta; el medio es la participación comunitaria.

Una vez alcanzada la meta con este tipo de medios, de hecho se habrá logrado un nuevo nivel de actividad corporativa. La actividad emprendida por las unidades corporativas interactuantes constituye en sí misma una base para la incorporación, y los grupos que participaron verdaderamente en ella han resultado transformados por la experiencia. La permanente negociación, el estudio, el reestudio y, lo que es más importante, las continuas reuniones sirven para crear un nuevo orden de actividad corporativa superior vinculada con el programa de desarrollo y reasentamiento y confinante con él. Quizá el ejemplo reciente más instructivo acerca del funcionamiento de este proceso sea el proyecto del PIDER, en México. En éste resulta claro que la participación implica crear actividades colectivas en las que grupos corporativos de la comunidad, de niveles locales y regionales, y del ámbito estatal, se reúnan para interactuar en nuevos campos (Cernea, 1983).

III

En conclusión, afirmo la importancia de la participación de los grupos corporativos endógenos en la planificación y ejecución del reasentamiento. Los científicos sociales deben reconocer la profunda importancia de distinguir entre los grupos corporativos y los otros tipos de categorías y agregados según los cuales están acostumbrados a pensar. Los grupos corporativos son distintos de categorías tales como las clases sociales, las cohortes de edades, los tramos impositivos, los agregados raciales y los niveles de ingreso. Estas amplias categorías analíticas no son unidades de comportamiento; no tienen coherencia interna, integridad ni unidad. Las categorías y agregados no llevan a cabo acciones como grupos, no ejercen control sobre sus miembros, nunca se reúnen para realizar una actividad común o colectiva, no tienen dirigentes ni representantes. Son abstracciones científicas.

Los grupos corporativos no son abstracciones. Son unidades de comportamiento que surgen de manera natural en todas las comunidades humanas, marcadas por una identidad, una estructura autoritaria asimétrica, una afiliación definida y ciertos límites; exhiben una estructura organizativa, actúan con procedimientos consuetudinarios, tienen un claro conjunto de asuntos comunes y, con respecto a éstos, manifiestan determinado grado de autonomía.

Para que sea viable, un programa de reasentamiento debería basarse en la participación de estos grupos, comenzando en la fase del diseño y culminando en la etapa de desarrollo económico y social. Esa participación requiere que los representantes de los grupos corporativos del nivel comunitario se encuentren en una arena común con grupos corporativos ajenos a la comunidad, como los planificadores del desarrollo y el reasentamiento. Las negociaciones que ocurran entre ellos constituyen el proceso participativo de planificación del proyecto propuesto. Si tienen éxito, los grupos corporativos participantes emergerán con

un diseño final y, a la vez, con los recursos sociales necesarios para ponerlo efectivamente en práctica. Al determinar el diseño del proyecto, el grupo negociador integrado por representantes comunitarios, locales o regionales y estatales se habrá constituido a sí mismo como una nueva unidad social corporativa, con responsabilidad sobre el éxito de su propio diseño. Por el contrario, si el diseño no les pertenece no aceptarán tal responsabilidad.

El proceso participativo de planificación está muy desarrollado en la teoría y en la práctica antropológicas. Conrad Arensberg (1978) lo llama el "proceso de acomodación recíproca" en el contexto de la antropología urbana y del desarrollo. Empero, esa acomodación sólo puede tener lugar entre representantes genuinos de grupos corporativos legítimos de la sociedad. Los aspirantes al liderazgo nunca necesitan acomodarse, y no tienen poder para otorgar reciprocidad mediante la cooperación de sus seguidores. Por esta razón los grupos ad hoc no sirven para nuestros fines. Los responsables de los proyectos de desarrollo y reasentamiento deben buscar y trabajar con las subunidades endógenas de las comunidades humanas amenazadas por el desplazamiento y el reasentamiento.

Traducido por Rubén Svirsky

BIBLIOGRAFIA CITADA

- ARENSBERG, Conrad M. (1978): "Theoretical Contributions of Industrial and Development Studies", en E. M. Eddy y W. L. Partridge (eds.), *Applied Anthropology in America*, Columbia University Press, Nueva York (pp. 49-78).
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1975): "Sistemas de actividad y estrategias adaptativas en la articulación regional y nacional de colonias agrícolas étnicas: el caso de Apóstoles (Misiones)", en E. HERMITTE y L. BARTOLOME (eds.), *Procesos de articulación social en América Latina*, Amorrortu, Buenos Aires (pp. 257-281).
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1984): "Aspectos sociales de la relocalización de la población afectada por la construcción de grandes represas", en F. SUAREZ, R. FRANCO y E. COHEN (eds.), *Efectos sociales de las grandes represas en América Latina*, Fundación Cultura Universitaria (para CIDES/ILPES), Montevideo (pp. 115-144).
- BENDIX, Reinhart (1962): *Max Weber: An Intellectual Portrait*, Doubleday, Garden City, Nueva York.
- BRYCE-LAPORTE, Roy S. (1968): "Family Adaptation of Relocated Slum Dwellers in Puerto Rico", en *Journal of Developing Areas*, N° 2 (pp. 533-540).
- CARLOS, Manuel L. (1971): *Politics and Development in Rural Mexico: The Fuerte Valley's Ejidos*, tesis de doctorado, Universidad de California, Santa Bárbara.
- CERNEA, Michael M. (1983): "A Social Methodology for Community Participation in Local Investments: The Experience of México's PIDER Program", Documentos de Trabajo del Banco Mundial N° 598, Washington, D.C.
- COSER, Lewis (1956): *The Functions of Social Conflict*, The Free Press, Nueva York.
- DEVELOPMENT ALTERNATIVES, INC. (1975): *Strategies for Small Farmer Development: An Empirical Study of Rural Development Projects*, informe final para la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), de Estados Unidos, dos tomos; Development Alternatives, Inc., Washington.
- DOUGHTY, Paul (1970): "Behind the Back of the City: Provincial Life in Lima, Perú", en W. Mangin (ed.), *Peasants in Cities*, Houghton Mifflin, Boston (pp. 30-54).
- DURKHEIM, Emile (1960): *The Division of Labor in Society*, The Free Press, Glencoe, Illinois (original de 1893).
- FOSTER, George M., y PITT-RIVERS, Julian (1960): "Interpersonal Relations in a Peasant Society", en *Human Organization*, N° 19 (pp. 174-184).

- GANS, Herbert (1962): *The Urban Villagers*, The Free Press, Nueva York.
- HANSEN, Art, y OLIVER-SMITH, Anthony (eds.) (1982): *Involuntary Migration and Resettlement: The Problems and Responses of Dislocated People*, Westview Press, Boulder, Colorado.
- KEMPER, Robert V. (1974): "Tzintzuntzenos in Mexico City: The Anthropologist Among Peasant Migrants", en G. M. Foster y R. V. Kemper (eds.), *Anthropologists in Cities*, Little Brown, Boston (pp. 63-91).
- KERRI, James Nwannukwu (1976): "Studying Voluntary Associations as Adaptive Mechanisms", en *Current Anthropology*, vol. 17, N° 1 (pp. 23-47).
- KIMBALL, Solon T. (1946): "The Crisis in Colonial Administration", en *Applied Anthropology*, N° 5 (pp. 8-16).
- KIMBALL, Solon T., y PARTRIDGE, William L. (1979): *The Craft of Community Study: Fieldwork Dialogues*, University Presses of Florida, Gainesville, Florida.
- KORTEN, David C. (1980): "Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach", en *Public Administration Review*, setiembre (pp. 480-511).
- LEEDS, Anthony (1969): "Significant Variables Determining the Character of Squatter Settlement", en *América Latina*, vol. 12, N° 3 (pp. 44-84).
- LEWIS, Oscar (1966): "The Culture of Poverty", en *Scientific American*, octubre (pp. 19-25).
- LITTLE, Kenneth (1965): *West African Urbanization: A Study of Voluntary Associations in Social Change*, Cambridge University Press, Londres.
- MAINE, Sir Henry S. (1960): *Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*, Dutton, Nueva York (original de 1861).
- MANGIN, William (1960): "Mental Health and Migration to Cities", en *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 84, N° 17 (pp. 911-917).
- MINTZ, Sidney, y WOLF, Eric (1950): "An Analysis of Ritual Co-Parenthood (Compadrazgo)", en *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 6 (invierno).
- OPLER, Morris E. (1954): *Social Aspects of Technical Assistance*, UNESCO, Amsterdam.
- PARTRIDGE, William L. (1979): "Banana County in the Wake of United Fruit: Social and Economic Linkages", en *American Ethnologist*, vol. 6, N° 3 (pp. 491-509).
- PARTRIDGE, William L. (1984): "Relocalización en las distintas etapas de desarrollo de los emprendimientos hidroeléctricos", en

- F. SUAREZ, R. FRANCO y E. COHEN (eds.): *Efectos sociales de las grandes represas en América Latina*, Fundación Cultural Universitaria (para CIDES/ILPES), Montevideo (pp. 151-182).
- PARTRIDGE, William L., BROWN, A. B., y NUGENT, J. B. (1982): "The Papaloapan Dam and Resettlement Project: Human Ecology and Health Impacts", en A. Hansen y A. Oliver-Smith (eds.), *Involuntary Migration and Resettlement*, Westview Press, Boulder, Colorado (pp. 245-263).
- PEARLMAN, Janice E. (1982): "Favela Removal: The Eradication of a Lifestyle", en A. Hansen y A. Oliver-Smith (eds.), *Involuntary Migration and Resettlement*, Westview Press, Boulder, Colorado (pp. 225-243).
- PEATTIE, Lisa Redfield (1970): *The View from the Barrio*, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.
- PEARSE, Andrew (1961): "Some Characteristics of Urbanization in the City of Rio de Janeiro", en Phillip Hanner (ed.), *Urbanization in Latin America*, International Documents Service, Nueva York (pp. 191-206).
- SAFA, Helen Icken (1974): *The Urban Poor in Puerto Rico*, Holt, Reinhart and Winston, Nueva York.
- SIMIC, Andre (1974): "The Best of Two Worlds: Serbian Peasants in the City", en G. M. Foster y R. V. Kemper (eds.), *Anthropologists in Cities*, Little Brown, Boston (pp. 179-200).
- SMITH, M. G. (1974): *Corporations and Society*, Duckworth, Londres.
- SPICER, Edward (ed.) (1952): *Human Problems and Technological Change*, Russell Sage Foundation, Beverly Hills.
- SUTTLES, Gerald D. (1968): *The Social Order of the Slum: Ethnicity and Territory in the Inner City*, University of Chicago Press, Chicago.
- VELEZ, Carlos G. (1982): "Social Diversity, Commercialization, and Organizational Complexity of Urban Mexican/Chicano Rotating Credit Associations: Theoretical and Empirical Issues of Adaptation", en *Human Organization*, vol. 41, N° 2 (pp. 107-120).
- WIRTH, Louis (1969): "Urbanism as a Way of Life", en Richard Sennett (ed.), *Classic Essays on the Culture of Cities*, Appleton-Century-Crofts, Nueva York.

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS
DE LOS POBRES URBANOS:
EL EFECTO "ENTROPICO"
DE LA RELOCALIZACION COMPULSIVA

LEOPOLDO J. BARTOLOME*

* Entidad Binacional Yacyretá y Departamento de Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Misiones, Argentina.

SUMARIO

1. Introducción	69
2. El contexto urbano como recurso y como restricción: la ecología del marginado	71
Las estrategias de supervivencia	80
Algunos tipos de estrategias adaptativas	96
3. El impacto inicial de las relocalizaciones por Yacyretá	102
4. Conclusiones	108
Referencias bibliográficas	113

1. Introducción

Este trabajo analiza algunas de las consecuencias que la próxima relocalización forzada de más de 20.000 personas de la ciudad de Posadas (NE de Argentina) —como consecuencia de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá—, ha tenido sobre los sistemas de subsistencia y estrategias adaptativas de los sectores urbanos marginados. Estos componen la gran mayoría de los afectados, y subsisten en condiciones precarias gracias a una variedad de estrategias que apuntan fundamentalmente a lograr constancia en el flujo de recursos que obtienen de diversas fuentes, y a controlar las fuentes de variación (incertidumbre) que amenazan la viabilidad de sus sistemas de subsistencia. Del examen de esos sistemas y de las estrategias adaptativas seguidas por esta población, a lo largo de los casi diez años transcurridos desde que fue por primera vez anunciada la relocalización (1974), surge una disminución en la eficiencia y productividad de esas estrategias. Este fenómeno es atribuible en gran parte a la misma posibilidad de la relocalización, que introduce un poderoso factor de desorganización e incertidumbre, no controlable mediante el recurso a los mecanismos tradicionales, y que da lugar a un descenso en el nivel de vida de los involucrados, con antelación a la concreción de las relocalizaciones. Estas consecuencias —a las que he denominado “efecto entrópico” por razones que se explicitan más adelante— sugieren que toda política que pretenda compensar el costo social de las relocalizaciones compulsivas, debería tener en cuenta estos perjuicios y considerarlos al evaluar la magnitud del impacto social de una gran obra.

Toda relocalización compulsiva se constituye en una

situación "dramática" y genera lo que Thayer Scudder (1973) y otros autores han denominado "*stress* multidimensional de relocalización", cuya intensidad, modalidad y consecuencias dependen de una serie de variables, algunas genéricas y otras específicas a cada contexto socioeconómico y cultural, así como del tipo de emprendimiento que da lugar al proceso. Los estudios llevados a cabo en las últimas décadas han permitido delinear las características generales de las relocalizaciones como procesos sociales. Empero, la gran mayoría de las relocalizaciones causadas por represas han afectado primordialmente a población rural, hasta el punto que Scudder (1981) asimila estas relocalizaciones a procesos tales como los de desarrollo agrícola, expansión de fronteras agrarias, colonización, etcétera. Siguiendo esta perspectiva, podrían asimilarse las relocalizaciones urbanas causadas por represas (como la de Yacyretá) a los procesos de "renovación urbana", erradicación de asentamientos ilegales, etcétera. Sin embargo, considero que la compulsividad y la exclusión del mantenimiento del *statu quo* de entre las alternativas, otorgan a las relocalizaciones motivadas por represas características sólo comparables a las originadas por desastres naturales o políticos (e.g., expulsiones de poblaciones, emigración forzosa, etcétera). En otro trabajo (Bartolomé, 1983) he tratado de fundamentar por qué los procesos urbanos presentan especificidades que impiden aplicarles apriorísticamente las conclusiones derivadas del estudio de los procesos rurales. Confío en que el caso de Posadas contribuya a iluminar esas diferencias.

La represa de Yacyretá se localiza en el curso superior del río Paraná, a la altura de las localidades de Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay). Su objetivo fundamental es la producción de energía, y dará origen a un lago artificial de 1.700 km² de extensión. Además de inundar considerables áreas rurales tanto en Paraguay como en la Argentina, las aguas de este lago afectarán significativamente a dos importantes centros urbanos: Posadas (140.000 habitantes), en la Argentina, y Encarnación (30.000 habitantes),

en Paraguay. El caso aquí considerado es el de la primera de estas ciudades, situada a cerca de 90 km río arriba del emprendimiento, y capital de la provincia de Misiones.

Las relocalizaciones que será necesario efectuar en Posadas involucran a más de 20.000 personas, en muchos casos con bastante antelación al llenado del embalse debido a la realización de obras complementarias (e.g., vías férreas, nuevo puerto, etcétera). Más del 70 % de los afectados residen en asentamientos ilegales localizados en las zonas ribereñas, y en su gran mayoría se encuadran dentro de lo que ha dado en llamarse "población marginada" o simplemente "marginados" (Frank, 1970; Perlman, 1976; Lomnitz, 1975; Marshall, 1978). Estos "pobres urbanos" son, por lo tanto, el principal objetivo del programa de relocalizaciones urbanas elaborado por la Entidad Binacional Yacyretá, la empresa *ad hoc* creada por los gobiernos de la Argentina y el Paraguay para la construcción de la represa y de las llamadas obras complementarias. El presente trabajo recoge los resultados de los estudios y de las experiencias que he venido realizando y obteniendo desde 1978, primero como responsable de los equipos del Centro de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, que tuvieron a su cargo la realización de varios estudios sobre la población afectada, por encargo de la Entidad Binacional Yacyretá, y luego (1979) como jefe del Programa de Relocalización y Acción Social del la EBY.

2. El contexto urbano como recurso y como restricción: la ecología del marginado

A pesar de contar con escasas actividades industriales de alguna importancia, la ciudad de Posadas ofrece una amplia gama de recursos potencialmente utilizables por quienes se ven obligados a vivir relativamente al margen del sistema económico formal. Desde principios del presente siglo su crecimiento fue motorizado por sus funcio-

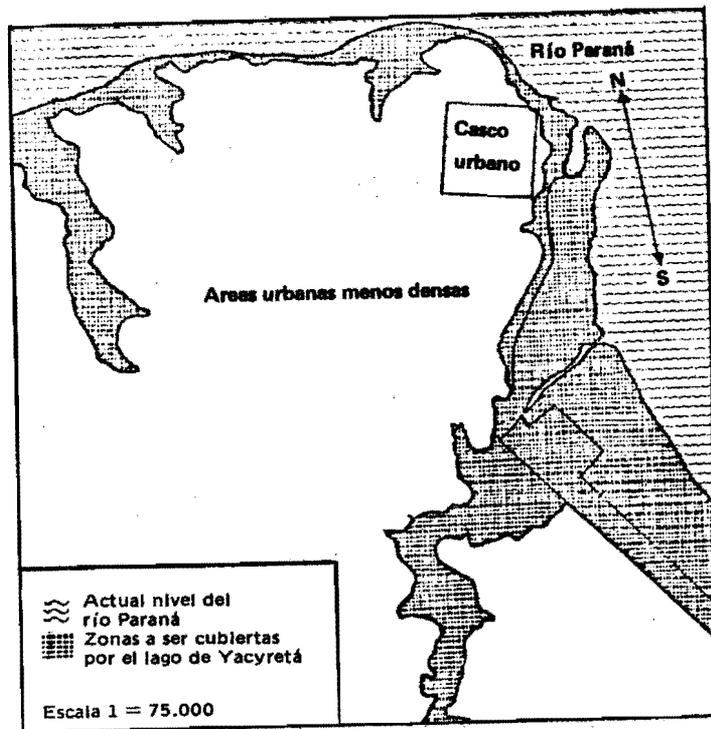
nes como centro administrativo (capital provincial), como nudo de transportes y como centro comercial y de servicios con un área de influencia que abarca no sólo el interior de Misiones, sino el norte de la provincia argentina de Corrientes, para extenderse inclusive sobre las zonas fronterizas del Paraguay. Fue y aún lo es en cierta medida, una ciudad poblada por funcionarios públicos, colonos enriquecidos y comerciantes, a los que se fueron sumando profesionales provenientes de otras provincias y del Paraguay y, en tiempos más recientes, profesionales de origen local. Las peculiares circunstancias del poblamiento de la provincia (Bartolomé, 1982 b), otorgaron a Posadas características multiétnicas y cosmopolitas, a pesar de su relativo aislamiento. Sin una "aristocracia" local, sin grandes terratenientes —no porque no existan, sino porque son propietarios ausentistas o corporaciones— o industriales residentes, los estratos medios y altos comparten el mismo sesgo ideológico y político de "clase media", que ha convertido en un mito integrador de su cultura pública al reciente pasado "pionero" y colonizador (Ackerman, 1977).

En esta burguesía local, así como en los estratos medio-bajos (empleados públicos, docentes, pequeños comerciantes, artesanos, etcétera), predominan los inmigrantes europeos y sus descendientes (fundamentalmente centro-europeos y germanos). A pesar de que los sectores más pobres no dejan de reflejar esta composición multiétnica, son percibidos como los "negros" o los "paraguayos", cualquiera sea su fenotipo o su origen étnico. Esta adscripción étnica a un grupo socioeconómico constituye un fenómeno reiteradamente constatado y cuyas razones escapan al objetivo de este trabajo, pero lo importante es destacar que la población marginada local debe hacer frente no sólo a las penurias de su situación social y económica, sino a los estereotipos étnicos y prejuicios sociales de los demás residentes. Esto se aplica igualmente a las relaciones entre los marginados y las estructuras supralocales —según las define Leeds (1973, p. 27)— y locales, las que se vinculan

con los primeros dentro de un similar contexto actitudinal. En otras palabras, los marginados son no sólo los "pobres", sino también los "negros" o los "paraguayos", agregando de esta manera una dimensión adicional de distancia social.

MAPA 1

Ciudad de Posadas. Áreas a ser inundadas por el futuro lago de Yacyretá



Posadas se ubica en una especie de península formada por un amplio recodo del río Paraná (ver mapa 1), de manera que las costas del río no están demasiado alejadas desde cualquier punto del ejido urbano. El casco urbano se recuesta sobre barrancas altas, las que van dejando lugar a terrenos bajos y anegadizos tanto hacia el oeste como hacia el este. Los barrios residenciales se ubican preferentemente sobre esos terrenos altos, aunque el crecimiento de la ciudad durante las últimas décadas ha dado lugar al surgimiento de nuevas zonas residenciales. Encapsulado por el casco urbano se encuentra el actual puerto, así como la terminal ferroviaria. Este núcleo de actividad y el eje conformado por la avenida Uruguay y la ruta nacional N° 12 se constituyen en polos de atracción para el asentamiento de la población que trabaja en ocupaciones conexas y de la que vive de los "subproductos" que éstas generan. De esta manera, la ciudad se ha rodeado de un cinturón costero de población de muy bajos recursos, que ocupa precisamente las escarpadas barrancas del casco urbano y los terrenos bajos que se extienden a ambos lados. Estos terrenos, cuya ubicación y el hecho de padecer inundaciones con cada creciente del río, les quita todo valor salvo el especulativo, son propiedad en su mayoría de familias tradicionales de Posadas, quienes los mantenían fundamentalmente como un reaseguro patrimonial. Allí se asentaron la gran mayoría de los inmigrantes rurales que comenzaron a radicarse en Posadas a partir de los comienzos de la década del sesenta, así como los inmigrantes paraguayos. Cabe señalar que si bien en la actualidad solo un 11 % de la población ribereña figura como extranjera, muchos de ellos son descendientes de paraguayos y mantienen frecuentes contactos con la otra orilla.

Entre 1960 y 1980 la población de Posadas se incrementó en un 98 %, es decir, prácticamente dobló su población en esos veinte años, mientras que en las dos décadas precedentes ese incremento apenas alcanzó al 50 %. Este crecimiento del principal centro urbano de la provincia tuvo lugar dentro de un contexto global de urbanización.

Así, durante la última década la población total de la provincia creció en un 33 %, pero el incremento de la población residente en ciudades y pueblos de 2.000 y más habitantes fue del 80 % (Argentina, 1982, pp. XVI y ss.). Es por lo tanto durante este período que Posadas adquirió el cinturón de asentamientos espontáneos del que carecía hasta ese entonces, con excepción de algunos tradicionales barrios obreros, como el conocido por el nombre de El Chaquito. La gran mayoría de estos inmigrantes vinieron del interior de la provincia, empujados por una aguda crisis del sector agrícola, que impulsó a muchos pequeños productores y trabajadores rurales a refugiarse en la ciudad capital de la provincia. No es casual que haya sido ésta la década que vio el surgimiento de un masivo y combativo movimiento agrarista (Bartolomé, 1977 y 1982 a), cuyo desarrollo fue abruptamente cortado en 1976 por el gobierno militar.

Una muestra de la población de asentamientos espontáneos indica que más de la mitad de los jefes de familia se habían radicado en la zona con posterioridad a 1970, cayendo el promedio en el año 1968 (UNaM, 1982). De hecho, más de la mitad de esos grupos familiares tenía menos de doce años de residencia, concurriendo a subrayar la relativamente escasa profundidad temporal de fenómeno de surgimiento de "villas marginales" en Posadas. El cuadro 1 indica que sólo un 17 % de los jefes de familia habían nacido en Posadas, porcentaje que se eleva a casi un 23 % cuando se tiene en cuenta a aquellos que habiendo nacido en Posadas, la habían dejado para regresar posteriormente a ella. El hecho de que más de un 77 % de los jefes de familia procedan del segmento "rural" del sistema regional, en conjunción con la relativa novedad de su radicación en Posadas, podría inducir a encuadrar el proceso dentro del marco tradicional de la inmigración rural-urbana, con sus concomitancias "culturales" de contradicción entre pautas rurales y urbanas en lo que respecta a la adaptación de los migrantes a su nuevo medio. Sin embargo, y sin negar totalmente la importancia de esta

CUADRO I

Lugar de origen y de procedencia inmediata de jefes de familia en asentamientos espontáneos

(En por cientos)

Muestra N = 131	Lugar de procedencia inmediata			Total
	Posadas	Ciudades y pueblos del interior	Zonas rurales	
Lugar de origen				
Posadas	17,0	4,2	1,7	22,9
Ciudades y pueblos del interior	—	25,4	6,8	32,2
Zonas rurales	—	16,1	28,8	44,9
Total	17,0	45,7	37,3	100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos inéditos del estudio UNaM, 1982.

ruralidad en el proceso adaptativo de los inmigrantes, existen numerosos elementos de juicio que relativizan ese componente.

En primer lugar —y sin entrar en la polémica acerca de qué es “urbano” y qué es “rural”—, cabe señalar que más del 71 % de los jefes de familia proceden o han residido en Posadas o en centros urbanos del interior antes de radicarse en las villas. En segundo lugar, el interior de la provincia no puede ser considerado en bloque un polo rural en relación a Posadas. La alta densidad de centros urbanos pequeños y medianos que registra la provincia, la escasa distancia entre ellos, así como un patrón de asentamiento que concentra a la mano de obra rural en torno de esos centros, definen un sistema global que si bien tiene a los lugares urbanos como centros nodales, diluye la significación del contraste rural urbano¹. En otras palabras, resulta

¹ Cfr. el concepto de “urbanización social”, tal como éste es definido por, e.g., Margolies (1979, pp. 215).

más fructífero considerar que las formas que asumen los procesos adaptativos de esta población, responden más a las características específicas de los medios ambientes en que se insertan, antes que a patrones diferenciales determinados por modelos teóricos de lo rural y de lo urbano. Por otra parte, no pocos de los migrantes radicados en Posadas siguen vinculados al mercado laboral rural, tanto por la influencia que tiene éste sobre el mercado laboral urbano, como por el hecho de que el trabajo rural en los periodos de zafra sigue constituyendo una alternativa siempre presente para los marginados urbanos².

A pesar de que Posadas carece de actividades industriales de alguna significación, que operen con relativa independencia de la producción agrícola, dos factores incidieron para que la crisis agraria de los años setenta no afectase la expansión de la economía urbana. En primer lugar, se incrementó su rol de centro de transporte y de comercialización de la producción agrícola. En segundo lugar, muchas de esas actividades, así como las industriales (e.g., serraderos y laminadoras), están vinculados con la producción forestal, la que no se vio afectada por la crisis agraria. Esta situación, en conjunción con un incremento poblacional notable y no alimentado exclusivamente por la inmigración rural-urbana, generó una demanda laboral importante tanto en las actividades relacionadas con la construcción como con la provisión de servicios varios a la población urbana. Esta demanda laboral, empero, se caracteriza no sólo por la inestabilidad, sino por funcionar en gran medida dentro de lo que algunos autores denominan “sector informal” de la economía, dando lugar a ingresos salariales fluctuantes e inseguros, que deben ser complementados mediante otros mecanismos. Una de las consecuen-

² El mantenimiento de esta vinculación aparece constatada en muchos estudios, entre los que pueden mencionarse los de Hoops y Whiteford (1981, p. 3) para Querétaro (México) y Salta (Argentina), así como el más extenso análisis de Whiteford (1981) para el caso de los inmigrantes bolivianos en el noroeste de la Argentina.

cias más inmediatas de esta informalidad es el desarrollo de un importante sector autónomo que opera no sólo en los espacios que deja el sector capitalista en el área de actividades de rentabilidad comparativamente baja, sino que abarca aquellas actividades que, por ser poco estandarizables, no justifican una organización capitalista. Es así que el crecimiento del empleo en el sector autónomo posee características de un crecimiento residual y constituye un indicador de la existencia de fuerza de trabajo excedente, no directamente absorbible por el sistema económico formal (Marshall, 1978, pp. 65 y ss.).

En 1979 casi un 20 % de los varones ocupados residentes en las zonas ribereñas se desempeñaban en tareas vinculadas con la construcción, mientras que los trabajadores ocasionales ("changarines") y otros no calificados representaban más del 13 %. En general, más del 79 % de los varones ocupados se desempeñaban como obreros, empleados de bajo rango o "changarines". Por su parte, casi un 80 % de las mujeres ocupadas eran absorbidas por el servicio doméstico. Peso aún más importante para definir la inserción de esta población en el mercado laboral es el hecho de que mientras los asalariados permanentes alcanzaban a un 52 % de la población ocupada, los asalariados transitorios representaban un 24 % y el sector autónomo daba cuenta del 24 % restante, es decir, de casi un cuarto de la fuerza de trabajo total³. La composición de este sector autónomo y su papel marginal quedan evidenciados en que la mediana de ingresos mensuales para los ocupados de este sector era prácticamente idéntica a la de los asalariados permanentes, y sólo una vez y media la de los transitorios.

La inserción ocupacional de los marginados dentro del

³ Estos datos provienen del censo efectuado por la Entidad Binacional Yaciretá en 1979 (EBY, 1981), y que abarcó las áreas a ser afectadas por la represa dentro del ejido municipal de Posadas. Estas zonas afectadas se superponen en gran medida con el cinturón de marginalidad, aunque incluyen algunas áreas de mayor nivel socioeconómico.

sistema urbano se torna aún más clara cuando se focaliza en los sectores más deprimidos. Si bien el porcentaje de obreros de la construcción es prácticamente igual (21 %), encontramos un 7 % de "oleros" (trabajadores de las fábricas artesanales de ladrillos), mientras que el resto se distribuye entre una serie de ocupaciones, como ser "changarines", pintores, vendedores ambulantes, carpinteros, diarieros, etcétera (UNaM, 1982, p. 48). Estos datos concurren a definir la presencia de una población cuya articulación con el sistema económico urbano se establece fundamentalmente a través de: a) las ocupaciones vinculadas a la construcción y el transporte, y b) la provisión de servicios varios a los estratos socioeconómicos de mayores recursos que ocupan el casco urbano. Estas ocupaciones generan ingresos monetarios sumamente escasos, hasta el punto en que el promedio de ingresos mensuales *por grupo familiar* se ha mantenido desde 1979 por debajo del salario mínimo reconocido por las autoridades. Aun teniendo en cuenta una probable subestimación en los ingresos monetarios, resulta llamativo que las cifras de ingresos que arrojan los censos sean a todas luces insuficientes aun para satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia. La misma supervivencia de esta población, aunque sea bajo estándares sumamente bajos de vida, está indicando la existencia de una economía paralela, economía que si bien puede ser considerada "marginal" con respecto al sistema económico urbano global, opera de manera tal que viabiliza la articulación económica de los marginados al sistema formal⁴.

⁴ Esta economía paralela resulta generalmente invisible en los datos estadísticos porque, entre otras razones, los censos ocupacionales no reflejan todas las actividades económicas de un grupo doméstico; actividades que a menudo definen el umbral de posibilidades de subsistencia (Lomnitz, 1978, p. 325).

Las estrategias de supervivencia

El plantear la supervivencia de los marginados en términos de "estrategias" no implica necesariamente el asumir una perspectiva teórica afín al denominado "análisis transaccional" de F. Barth y otros autores, que parten de un individualismo metodológico que postula a las formas sociales como emergentes casi exclusivos de las decisiones de los actores⁵. Antes bien, conlleva un reconocimiento de la útil distinción que Firth (1951) estableció entre "estructura social" y "organización social". Desde el momento en que el interrogante que nos preocupa remite a comportamientos concretos de determinados actores frente a los recursos, restricciones y oportunidades ofrecidas por el medio en que se desenvuelven, las respuestas inmediatas se ubican en el plano de la organización social. Al hablar de estrategias adaptativas en términos de pautas conductuales evidenciadas por una unidad, a lo largo del proceso de satisfacer sus necesidades básicas y responder a las presiones del medio (Bennett, 1971, p. 16), no se desconoce la existencia de determinaciones estructurales tales como la estructura de clases sociales o la de dominación. Se trata fundamentalmente de un recurso analítico que posibilita ajustar el nivel de los instrumentos conceptuales al de los fenómenos que se pretende estudiar.

Los marginados de Posadas no son "jugadores", buenos o malos, que persiguen estrategias ganadoras o perdedoras. Son seres humanos que hacen lo que pueden para sobrevivir. Las fuerzas sociales —léase estructura socioeconómica— que los han colocado en esa situación conforman un marco de restricciones y condicionantes que interactúa constante y retroalimentativamente con sus sistemas de supervivencia; sistemas que a su vez están constituidos por la conjunción de recursos, procedimientos para el acceso y explo-

⁵ Las limitaciones de este enfoque han sido señaladas por múltiples autores, inclusive por aquellos que comparten el interés por los procesos de interacción (Kapferer, 1976).

tación de éstos, y las relaciones interpersonales que resultan instrumentales para el funcionamiento del sistema. Desde esta perspectiva, una estrategia adaptativa puede ser considerada como el patrón interactivo evidenciado en el tiempo por las relaciones entre el sistema englobante (determinado por la estructura social) y el subsistema adaptativo generado por una determinada unidad. Esas estrategias adaptativas se inscriben dentro de los "nichos" específicos provistos por el ecosistema urbano y, como lo han demostrado numerosas investigaciones, apuntan a minimizar la inseguridad, reducir la incertidumbre y maximizar la utilización de los escasos recursos disponibles (Lomnitz, 1975; Hoops y Whiteford, 1981; Leeds, 1973; Campbell, 1981; etcétera).

La economía paralela en que sobreviven los marginados es uno de los resultantes de estas estrategias adaptativas, y se sitúa frecuentemente en los finales de las cadenas tróficas del ecosistema urbano central, explotando recursos descartados por éste, o convirtiendo en recursos elementos insospechados. Desperdicios, desechos industriales, actividades demasiado irregulares o estigmatizadas como para formar parte del sistema formal, etcétera, son transformados en recursos. Se multiplican las ocupaciones, se amplían las redes de intercambio y se multiplican las redes minoristas de comercialización, se generan nuevas formas de agrupamiento y de relaciones interpersonales, etcétera. Todo ello sustentado sobre la base de un complejo y extendido sistema interno de reciprocidades —redes de ayuda mutua, según la terminología de Lomnitz (1975)—, que integra y consolida un sistema que, en otros aspectos, está caracterizado por la competencia por recursos y por estrategias de énfasis individual (Boulding, 1973).

Las estrategias de los marginados de Posadas puede ser analizada a través de un modelo que tome en cuenta:

- (a) Los recursos y restricciones emergentes de los componentes categoriales del sistema que engloba a marginados y no marginados. Estos remiten a las relaciones

que se establecen con los grupos y estratos sociales supraordinados, y a la posible utilización de la acción colectiva como recurso.

- (b) Los recursos y restricciones emergentes de las características específicas del sistema urbano como generador de productos utilizables y de ocupaciones capaces de producir ingresos.
- (c) Las principales variables de ajuste con que cuentan los marginados para hacer frente a las situaciones determinadas por (a) y (b). En el caso de Posadas —como en otros similares— esas variables de ajuste se agrupan en tres categorías fundamentales: (1) la forma organizativa que se da al grupo doméstico; (2) los procedimientos para la identificación y transformación de recursos marginales; y (3) la utilización de las relaciones interpersonales para la construcción de redes capaces de captar y canalizar recursos estratégicos, incluyendo información.

Las estrategias adaptativas resultantes son en gran medida determinadas por la forma en que son manipuladas estas variables de ajuste, dentro de las restricciones y oportunidades impuestas por (a) y (b).

En el caso de Posadas, las relaciones con los grupos y estratos supraordinados tienden a ser establecidas en términos de relaciones diádicas, predominantemente de índole patrón-cliente, buscando establecer “contactos” que puedan convertirse eventualmente en fuentes de recursos. La práctica más común remite al establecimiento de relaciones de “amistad”, algunas veces consolidadas mediante el compadrazgo, con personas visualizadas como potenciales fuentes de recursos, o intermediarios para el acceso a esas fuentes. La acción colectiva encuentra un fuerte obstáculo en este patrón de relaciones personalizadas. Salvo en el caso de los asentamientos más antiguos y menos deprimidos económicamente —como el del barrio El Chaquito—, no existen organizaciones vecinales que tengan continuidad en su accionar. Durante la primera mitad de la

década del setenta surgieron varias comisiones vecinales promovidas en la mayoría de los casos por sacerdotes y activistas políticos del peronismo de izquierda. Pero su accionar se vio interrumpido por la asunción del gobierno militar en 1976 y, si bien es difícil especular acerca de lo que podría haber sucedido de no haberse dado estas circunstancias políticas desfavorables, no parece que hubiesen llegado a un punto de autosustentación o que hubiesen trascendido el marco “clientelístico” que hacía de esos promotores y activistas una potencial fuente de recursos.

Aún en la actualidad, frente al descongelamiento del accionar político, estos sectores manifiestan una actitud desconfiada y especulativa frente a la política partidista. Las experiencias de algunos de los pobladores más activos y de mayor conciencia colectiva, subrayan las dificultades que éstos encuentran para organizar a la población. Sólo las situaciones de crisis masiva, como las grandes inundaciones de 1982 y 1983, parecen crear condiciones para una mayor participación, aunque esa participación se focaliza en ayuda y solidaridad con los otros damnificados antes que en un sostenido impulso para la acción colectiva. De hecho, la creación de una Comisión de Afectados por las Inundaciones en 1983 constituye hasta el presente más un intento por parte de ciertos sectores políticos de capitalizar en su beneficio la afligente situación de los inundados que un intento organizativo autogenerado.

Una posible explicación, al menos parcial, para esta renuencia a la acción colectiva puede encontrarse tanto en la misma situación de marginación social como en la naturaleza de las estrategias adaptativas predominantes. El primer factor concurre a que los marginados perciban al resto de la sociedad urbana local como un “otro” indiscriminado, ajeno a su sistema de reciprocidades generalizadas y, por lo tanto, parte del medio ambiente que los margina y oprime. De allí que los planteos de accionar político y organizativo motorizados desde ese entorno sean inmediatamente traducidos en términos instrumentales y “económicos”, por más que esta actitud exaspere a los

bienintencionados promotores y organizadores externos. Por otra parte, la naturaleza individualizada y competitiva de las estrategias de adaptación desalienta la extensión horizontal de las relaciones de cooperación a otros planos que los involucrados en el sistema de reciprocidades, ya que la información acerca de y el acceso a los recursos del sistema adaptativo de cada unidad constituyen en sí mismos recursos estratégicos y escasos. De allí que sólo aquellas situaciones que sean percibidas como amenazando la totalidad de la estructura de supervivencia sean potencialmente movilizadoras y planteen objetivos percibidos como comunes. De hecho, tan sólo las inundaciones de 1982-83 y, al menos como indicios, la inminencia del comienzo del proceso de relocalización por parte de Yacyretá, parecen llenar estos requisitos.

El segundo componente de este modelo lo conforman aquellos aspectos del medio ambiente físico y social percibidos y utilizados como recursos. Estos recursos pueden ser agrupados en tres grandes categorías: (1) fuentes de trabajo remunerado, ya sea temporario o permanente; (2) fuentes de productos o desechos reciclables a través de mecanismos de transformación físicos y sociales; y (3) fuentes de potenciales "donaciones" en efectivo y especie. Cabe señalar que la obtención de información resulta clave para la detección y acceso a estas fuentes de recursos, y gran parte del tiempo disponible de los marginados es dedicado a la captación de información estratégica. Esta puede consistir en un rumor acerca de lugares donde piensan tomar personal, noticias acerca de la existencia de predios aptos para la construcción de viviendas, etcétera. La base del sistema de adaptación consiste precisamente en el levantamiento de una especie de "mapa" de recursos y de las formas para acceder a ellos. La información se obtiene fundamentalmente a través de contactos personales con patrones, compañeros de trabajo, vecinos, miembros del mismo culto religioso, etcétera, y es valorizada en forma muy superior a la obtenida a través de los medios impersonales, como la radio, la televisión o los diarios. En otras

palabras, la información es evaluada prioritariamente en términos de su origen antes que por su contenido específico⁶.

Los asentamientos de los marginados, bajo el condicionamiento general de la disponibilidad del mínimo espacio físico, responden a dicho mapa de recursos. Así, son las vecindades de las instalaciones portuarias y ferroviarias lugares de suma importancia, tanto por la posibilidad de obtener empleo permanente o temporario, como por los desechos que generan: cajas vacías, hierros viejos, frutas y verduras de descarte, etcétera. Algo similar sucede con las industrias procesadoras de maderas (aserraderos y laminadoras), que proveen gran parte del material utilizado para la construcción de viviendas, o los frigoríficos, cuyos desechos pueden ser utilizados para la alimentación humana o de animales, cuando ello resulta posible. Otra importante fuente de productos reciclables es el basurero municipal. Las zonas comerciales y residenciales del casco urbano son también una importante fuente de recursos potencialmente utilizables, desde ropa usada y "basura" recuperable, hasta alimentos. El río es una omnipresente fuente de recursos, tanto en términos de alimentos (agua para beber, pescados), como de sitio de trabajo para las lavanderas, o, cuando se encuentran zonas residenciales en las orillas, un lugar que posibilita un rápido acceso a éstas. Resulta difícil efectuar una estimación de la magnitud de los recursos de este tipo que son procesados y transformados en efectivo y subsistencia por parte de los marginados, pero el simple relevamiento visual de los asentamientos permite asegurar que representan un monto muy considerable.

De hecho, el mapa de los asentamientos de marginados prácticamente se superpone al de localización de esas fuentes de recursos. El acceso a ellas constituye una prioridad

⁶ Esta actitud hacia la información se extiende a la proveniente de organismos oficiales, generando a veces serios malentendidos. Las comunicaciones de la Entidad Binacional Yacyretá concernientes al proceso de relocalización pasan por este filtro, otorgándose mayor credibilidad a las recibidas a través de contactos personales.

estratégica que se sobrepone al valor de la vivienda per se. La localización de éstas es una función de la particular constelación de recursos que una unidad doméstica está explotando en un momento dado. Como los cazadores y recolectores, los marginados deben seguir a la "caza" a donde ésta sea más abundante. Este patrón se manifiesta, entre otros aspectos, en un alto grado de movilidad espacial. Un estudio efectuado en 1981-82 (UNaM, 1982) detectó un promedio de 2,6 desplazamientos intrazonales entre los jefes de las familias incluidas en la muestra, mientras que casi un 44 % de éstos habían realizado tres o más cambios de ubicación antes de asentarse en el lugar en que fueron localizados. Esto genera una continua circulación de la población marginada dentro de la franja costera que constituye su nicho ecológico (Cabrera, 1983). Por otra parte —y como ocurre en otros centros urbanos que operan estrechamente vinculados a su *hinterland* agrícola (Whiteford, 1981)— muchos siguen manteniendo el trabajo rural durante los picos de demanda como una alternativa de subsistencia, lo que origina un flujo de ida y retorno con el medio rural, en donde el migrante no siempre retorna a su antiguo emplazamiento en la ciudad.

Las zonas residenciales de la ciudad tienden a ubicarse a lo largo de las barrancas altas de la costa del río, posibilitando a los residentes en las áreas marginales un fácil acceso a los puntos de "anclaje" de sus redes para la canalización de donaciones. Es frecuente que mientras las mujeres encuentran ocupación en el servicio doméstico, los hombres provean pequeños servicios de jardinería, reparación, etcétera, y los niños pidan limosna o realicen tareas como lavado de coches, etcétera. Un importante beneficio "marginal" del establecimiento de relaciones laborales como empleadas domésticas, o el establecimiento de relaciones consuetudinarias para la realización de esas pequeñas tareas de mantenimiento y reparación, son las donaciones que se generan a partir de ellas. Así se obtienen ropas en desuso, medicamentos, alimentos y, eventualmente, préstamos o regalos en dinero. Si bien no existen datos precisos a este

respecto, es posible estimar que entre un 15 y un 20 % de las necesidades básicas de un grupo doméstico son cubiertas mediante estas donaciones (UNaM, 1982, p. 51). Pero aun más importante que su simple monto, es el hecho de que concurren a salvar los frecuentes "baches" que se producen cotidianamente entre necesidades y disponibilidad de recursos. Una tasa prestada por una vecina o un kilo de pan regalado por una patrona pueden "solucionar" la comida de un día en tiempos de extrema escasez.

Las estrategias de adaptación se estructuran fundamentalmente en términos de la o las formas en que el capital social con que cuenta una unidad doméstica, puede ser instrumentado con el propósito de asegurar un adecuado flujo de recursos. Como señala Leeds (1973, p. 33), la misma organización social de estos asentamientos puede ser considerada como un complejo y efectivo sistema de comunicaciones, que apunta a maximizar las ventajas y beneficios que resulte posible extraer del medio ambiente. La organización del mismo grupo doméstico adquiere un valor instrumental a tal propósito. Se utiliza trabajo intensivo y no remunerado (familiar) y se depende de las redes sociales para canalizar recursos. Esta estrategia —que genera lo que Lomnitz (1978, p. 317) denomina un "sistema de seguridad social informal"— confiere un valor adaptativo a la familia numerosa, ya que ésta no sólo permite la utilización intensiva de mano de obra gratuita, sino que posibilita la expansión de las redes sociales de reciprocidad que sustentan ese sistema (Lomnitz, 1978, p. 318). El objetivo general es el de reducir la incertidumbre acerca del futuro, introducir estabilidad en una situación inestable, y minimizar la fragilidad del grupo frente a las continuas agresiones del medio, siguiendo una estrategia que ha sido calificada como de reducción de las fuentes de variación (Campbell, 1980, p. 3) o de "mínima vulnerabilidad" (Hoops y Whiteford, 1981, p. 12)⁷.

⁷ Campbell (1980, p. 3) especifica que "El esfuerzo por hacer frente a las fuentes de variación que los afectan —e.g., ingresos

Los grupos domésticos más “resistentes” son los que consiguen una composición en la que se maximiza el número de hijos u otros parientes en condiciones de trabajar (Hoops y Whiteford, 1981, p. 14). Ya sea mediante el incremento de la fertilidad o por la incorporación de parientes productivos al grupo doméstico, la presión adaptativa empuja en dirección de la familia extensa o ampliada (Ashton, 1972, pp. 178 y ss.), la que opera como una coalición, a veces temporaria, con vistas al logro de determinados objetivos (Banck, 1980). Los estudios sobre los cambios demográficos y organizacionales de los inmigrantes rurales en las ciudades indican que la estructura familiar tiende a modificarse en el sentido de un incremento en las uniones seriales, hacia la familia matrifocal y hacia un estrechamiento del rango generacional, mientras se expanden horizontalmente (Leeds, 1973, p. 32). En términos generales, puede afirmarse que, al menos a nivel de presión adaptativa, la tendencia es hacia el logro de un balance favorable en la relación entre consumidores y trabajadores en el grupo doméstico (índice c/t). En otras palabras, en vez de la familia multigeneracional rural, se hace más frecuente la familia extendida horizontalmente, a menudo mediante la coalición de fragmentos familiares, o a través de la incorporación de parientes y no parientes en edad productiva; estrategia esta última que es seguida consistentemente por las familias matrifocales (Bartolomé, en prensa).

Los datos de Posadas confirman ese patrón. Así, mientras el tamaño promedio por grupo doméstico en la ciudad de Posadas es de 3,5 personas —valor que se ubica más cerca del promedio correspondiente a países industrializados (3,0) que del de los más subdesarrollados (4,9)—,

irregulares, fluctuaciones en el flujo de recursos, calamidades naturales y, prioritariamente para los “intrusos”, las amenazas de acciones oficiales contra sus asentamientos ilegales— es común a todos los grupos domésticos. En general, éstos apuntan a reducir las fuentes de variación o a incrementar su capacidad de hacerles frente, tornando progresivamente más predecible la vida” (mi traducción).

entre la población urbana ribereña sube a 4,3 (EBY, 1981) y entre los sectores más marginados trepa a 5,4 (UNAM, 1982). Entre este último grupo se encuentran familias de doce y más miembros, y un 44 % de los grupos domésticos tienen seis o más miembros. Otro dato sugerente es que mientras en el total de la población urbana afectada por la represa de Yacyretá los menores de diez años representan un 28 %, ese porcentaje trepa a casi un 40 % en los grupos más marginados. Si bien no puede descartarse que esta mayor fertilidad y tamaño familiar respondan a una mayor vigencia de patrones rurales —interpretación que encontraría sustento en el origen migratorio reciente de este sector—, es también indudable que poseen un valor adaptativo específico en el contexto urbano. En todo caso, puede suponerse que no es la “ruralidad” o “urbanidad” per se el determinante de este patrón, sino su carácter de respuesta adaptativa frente a determinadas condiciones del medio; condiciones que pueden actuar como presiones tanto en el campo como en la ciudad.

Los tipos de grupos domésticos predominantes reflejan ese achatamiento de la profundidad generacional en beneficio de la expansión horizontal del grupo doméstico. Mientras la familia plurigeneracional resulta frecuentemente en un balance desfavorable en la relación entre consumidores y trabajadores —por el peso de los miembros de mayor edad y productividad reducida—, el incremento en el número de hijos y la incorporación de parientes y agregados en edad productiva opera en forma inmediata o mediata en favor de un balance más favorable. A los fines de este trabajo he clasificado los tipos de estructura familiar en: (a) familia nuclear pequeña, (b) familia nuclear grande, (c) familia compuesta, (d) familia matrifocal, y (e) personas solas. La primera remite a la estructura familiar representada por la pareja y hasta dos hijos —usualmente asumida como arquetipo de familia urbana—. La segunda corresponde a lo que suele denominarse “familia numerosa”, con más de dos hijos, y la tercera agrupa todos los casos de coaliciones familiares, que en este caso son de

CUADRO 2

Distribución porcentual de grupos domésticos según tipos de estructura familiar

Tipo de estructura familiar	Población marginada N = 116	Población urbana afectada por Yacyretá N = 5.101	Población de Misiones N = 129.028
Familia nuclear pequeña	23,1	29,8	28,3
Familia nuclear grande	36,1	23,0	22,9
Familia compuesta	17,5	19,8	30,8 (a)
Familia matrifocal	19,4	16,8	8,5
Personas solas	3,9	10,6	9,5
Total	100,0	100,0	100,0

(a) Incluye familias plurigeracionales, lo que limita su comparabilidad con los valores correspondientes a la población marginada.

Fuentes: Para población marginada, datos inéditos de UNaM, 1982. Para la población afectada por Yacyretá, datos inéditos del Censo de 1979. Para la población de la provincia, datos del Censo Nacional de 1980.

extensión predominantemente horizontal, i.e., dentro de la generación parental. Por familia matrifocal se entiende aquellos grupos domésticos que no sólo están encabezados por mujeres, sino para los cuales esa situación constituye un patrón independiente de la eventual presencia de un "acompañante" masculino (Bartolomé, en prensa).

En el cuadro 2 se compara la distribución de la población en tipos familiares, en los sectores más marginados, en el total de la población urbana afectada por Yacyretá, y en la provincia. Puede apreciarse que mientras el porcentaje de familias "grandes" (tipos b y c) es idéntico entre la población urbana marginada y la de la provincia como totalidad —distribución esta última en la que influye el alto porcentaje de población rural que tiene Misiones—, el porcentaje de familias matrifocales es 2,3 veces superior

en el primer caso. A su vez, el porcentaje de personas capaces de subsistir solas (hogares unipersonales) es 2,4 veces inferior a su similar en el total provincial y 2,7 veces menor al de la población urbana afectada por Yacyretá. Más allá de las limitaciones de estas estadísticas desde el punto de vista comparativo, éstas concurren a indicar la presencia de características de organización familiar específicas de los marginados urbanos, en donde la formación de "coaliciones" constituye una respuesta adaptativa frente a las presiones del medio, y en donde el foco familiar tiende a desplazarse hacia la mujer.

La estructura del grupo doméstico constituye, como ya se ha dicho, no sólo un objetivo de la estrategia adaptativa, sino un componente instrumental de dicha estrategia. En primer lugar, determinando la fuerza de trabajo que el grupo doméstico está en condiciones de movilizar productivamente, es decir, obteniendo ingresos en efectivo. Aun ancianos y niños concurren a este objetivo, complementando esas actividades con una multitud de otros emprendimientos de pequeña escala (transporte de agua, cuidado de niños, reventa callejera, establecimiento de relaciones amistosas, pedido de limosna, atención de comercios y actividades productivas domiciliarias, etcétera), pero que generan ingresos en efectivo o especie, o "ahorran" la inversión de los escasos recursos del grupo doméstico. Cada grupo doméstico debe, por lo tanto, "jugar" su fuerza de trabajo bajo condiciones que están dictadas por un difícil mercado laboral, en donde la oferta siempre excede a la demanda. De hecho, cada persona económicamente activa de las zonas ribereñas debe mantener a un número mayor de no activos que en el resto de la ciudad y en el país en general (EBY, 1981, p. 135). Entre los sectores más deprimidos el promedio de ocupados por grupo doméstico es de 2,1, aunque más del 40 % de los hogares dependía del trabajo de uno solo de sus miembros (UNaM, 1982).

Por otra parte, bajo condiciones de inestabilidad laboral y bajas remuneraciones, la adición de ocupados no genera

CUADRO 3

Relación entre ingresos familiares mensuales
y número de ocupados por grupo doméstico

Número de ocupados por grupo doméstico	Ingresos familiares mensuales (base 1 ocupado = 100)	Diferencia en IFM generada por la incorporación de un trabajador (%)
1	100	—
2	121	+ 21
3	149	+ 23
4	242	+ 63
5 y más	195	- 20

Fuente: Elaboración propia de datos inéditos de un estudio efectuado sobre una muestra de población marginada (UNaM, 1982).

ingresos en forma proporcional a la inversión. En el cuadro 3 se comparan los ingresos familiares mensuales correspondientes a una muestra de familias marginadas, de acuerdo con el número de ocupados por grupo doméstico. Obsérvese que el ingreso familiar recién se dobla con más de tres ocupados y que la incorporación de cada trabajador incrementa el ingreso familiar en menos de un 50 %⁸. Para hacer más claro este patrón, cabe señalar que entre los grupos domésticos con dos y tres ocupados predominan las mujeres y adolescentes como trabajadores adicionales, mientras que en aquellas con cuatro ocupados son más frecuentes los adultos de sexo masculino. Más allá de ese "óptimo" —pocas veces logrado— los grupos familiares que se ven obligados a incorporar más miembros al mercado ocupacional son los menos "exitosos", y la fuerza laboral extra

⁸ Estimado a partir de la ecuación de regresión simple ($y = 39,5 + 45,4x$). A este fin no se consideraron los valores correspondientes a 5 y más ocupados. El ingreso familiar se dobla a un valor de 3,5 ocupados por grupo doméstico.

que incorporan al mercado es fundamentalmente femenina e infantil. Este descenso de la productividad marginal por trabajador torna frecuentemente más "rentable" la asignación de esos recursos a la esfera informal de la economía de subsistencia. Así, por ejemplo, sucede que los ingresos que podrían obtenerse enviando a una hija adolescente a trabajar como doméstica por hora, no compensan los gastos de transporte ni las tareas que la muchacha dejaría de realizar dentro del hogar. A lo sumo, se lo acepta como solución de emergencia y no como una alternativa permanente⁹.

La que he denominado familia compuesta registra un promedio de ocupados de 2,6, mientras que la productividad por ocupado es en más de un 26 % inferior a la de la familia nuclear pequeña (ver cuadro 4). Las familias matrifocales que han logrado un balance positivo en su composición laboral (tipo "a" en el cuadro 4), registran el máximo promedio de ocupados (2,9), pero su productividad es tan sólo tres quintos de la de la familia nuclear pequeña. Estos datos parecerían contradecir el postulado valor adaptativo del grupo familiar grande, pero para evaluarlos correctamente debe tenerse en cuenta que, (a) al nivel de subsistencia en que se ubican esas familias lo determinante son los valores absolutos y no los marginales —un pedazo de pan que satisface el hambre vale por sí mismo y no por la "eficiencia" evidenciada en su obtención—, y (b) los grupos familiares grandes están en condiciones de asignar parte de su fuerza laboral al desarrollo de otras actividades de subsistencia, como veremos a continuación.

Más del 70 % de los hogares marginados suplementan sus ingresos monetarios con algún tipo de actividad productiva domiciliaria, ya sea mediante el cultivo de huertas diminutas, la cría de aves de corral, o la confección de ropa

⁹ Este hecho concurre a explicar la persistente queja de las amas de casa de clase media acerca de la dificultad para conseguir servicio doméstico estable, a pesar del desempleo y los problemas económicos de las familias de menores recursos.

CUADRO 4

Relación entre tipos de grupo doméstico, número de ocupados e ingresos familiares mensuales

Tipo de grupo doméstico	Porcentaje en muestra N = 108	Promedio de ocupados	IFM promedio (en miles de pesos de 1982)	Productividad por ocupado (en miles de pesos de 1982)
Flia. nuclear peq.	23,1	1,6	1.754	1.096
Flia. nuclear grande	36,1	2,2	2.421	1.100
Flia. compuesta	17,5	2,6	2.098	807
Flia. matrifocal (*)				
- Tipo "a"	7,4	2,9	1.925	664
- Tipo "b"	12,0	1,6	726	454
Personas solas	3,9	1,0	695	695
Totales	100,0	2,1	1.935	921

(*) Se las divide entre aquellas que han logrado un balance relativamente favorable en la relación entre consumidores y trabajadores (tipo "a") y aquellas con relación desfavorable (tipo "b").

Fuente: Elaboración propia de datos inéditos de un estudio realizado en 1982 (UNaM, 1982).

para la venta y otras tareas de reparación. La cercanía del río posibilita la pesca para el consumo y, eventualmente, para la venta. El cuadro 5 muestra que la mayoría de las familias "grandes" realizan actividades de ese tipo, obteniendo ingresos mensuales que son en un 34 % superiores a los de sus similares que no las realizan. Esta relación se invierte para el resto de las categorías, en las que los grupos domésticos que realizan actividades productivas domiciliarias perciben ingresos promedio inferiores a quienes no las realizan. En estos casos, son precisamente quienes no logran satisfacer las necesidades mínimas mediante el empleo remunerado las que se ven obligadas a recargar su capacidad laboral con actividades suplementarias. En otras palabras, los grupos domésticos grandes están en condiciones de

CUADRO 5

Actividades productivas domiciliarias según tipos de grupos domésticos

Tipo de grupo familiar	Realizan actividades		No realizan actividades		Totales	
	%	Ingresos (miles de pesos de 1982) \bar{X}	%	Ingresos (miles de pesos de 1982) \bar{X}	%	Ingresos \bar{X}
Flia. nuclear peq.	48,0	1.410	52,0	2.072	100,0	1.754
Flia. nuc. grande	62,0	2.691	38,0	1.989	100,0	2.421
Flia. compuesta	63,0	2.308	37,0	1.738	100,0	2.098
Flia. matrifocal						
- Tipo "a"	37,0	1.645	63,0	2.200	100,0	1.925
- Tipo "b"	23,0	542	77,0	781	100,0	726
Personas solas	25,0(*)	600	75,0	727	100,0	695
Sobre el total	50,9	2.320	49,1	1.719	100,0	1.935

(*) Casi exclusivamente pesca.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos inéditos para una muestra de 116 grupos domésticos (UNaM, 1982).

asignar productivamente su fuerza laboral entre distintas alternativas, entre las que se encuentran el cultivo de huertas, la cría de animales, etcétera, precisamente porque son relativamente más "exitosas" en la obtención de ingresos en efectivo. Las familias más pequeñas, con una relación consumidores/trabajadores desfavorable, y que fallan en la obtención de suficientes ingresos en efectivo, deben realizar actividades suplementarias para alcanzar el mínimo de subsistencia.

La mayor parte de los ingresos monetarios se destinan a satisfacer las necesidades de alimentos y combustible, reduciendo al mínimo las erogaciones en vestimenta, artícu-

los de limpieza, útiles escolares, salud y recreación¹⁰. El mantenimiento de las viviendas, incluyendo el uso de combustible para calefacción y cocinar y, eventualmente, el pago de energía eléctrica, insume entre un 7 y 11 % del presupuesto familiar (UNaM, 1978). En general, la estructura de gastos se adecua al flujo de ingresos, no sólo en términos de montos sino en lo que concierne a los lugares donde se efectúan las compras. Cuando existen disponibilidades en efectivo, se prefiere efectuar compras grandes en los supermercados y comercios del centro, mientras que durante los períodos de escasez se recurre a las compras en pequeñas cantidades o a crédito en los pequeños comercios del barrio. Estos pequeños comercios subsisten mediante el otorgamiento de crédito —anotando los gastos y saldando la cuenta mensualmente— y por la venta al menudeo fuera de las horas comerciales, cobrando precios sustancialmente superiores a los comercios del centro y fraccionando la mercancía hasta el límite de lo posible. Salvo algunas excepciones, operan con un margen de rentabilidad muy reducido, y su proliferación se debe no sólo a esas eventuales ganancias, sino a su integración dentro del sistema de seguridad de los marginados. A los compradores les posibilita la adquisición de mercaderías en pequeñas cantidades y a crédito, mientras que para sus dueños constituyen un “seguro” para los inevitables períodos de desempleo, atendido fundamentalmente por mano de obra familiar (Hoops y Whiteford, 1981, p. 15).

Algunos tipos de estrategias adaptativas

Las unidades más exitosas son aquellas que consiguen concretar una adecuada expansión de su capital social (incremento del grupo doméstico, conformación de redes

¹⁰ A pesar de ello, algunas familias invierten grandes sumas en gastos ceremoniales (e.g., casamientos, funerales), especialmente en alimentos y fotografías, para lo cual se endeudan y recurren a la ayuda de parientes y vecinos.

de ayuda mutua, establecimiento de relaciones diádicas instrumentales, etcétera) y diversificar sus fuentes de recursos, de manera tal de regularizar su flujo a lo largo del ciclo anual, es decir, minimizando su vulnerabilidad frente a las “agresiones” de un medio ambiente físico y social relativamente impredecible. Por supuesto, los fracasos en lograr estos objetivos son frecuentes, y los éxitos transitorios, pero la resultante es una especie de “estado constante” (*steady state*) en sus sistemas de supervivencia, que viabiliza la permanencia del grupo aun bajo condiciones de indigencia. Algunas unidades enfatizan la diversificación de sus fuentes de recursos, mientras otras descansan más en la ampliación de su capital social, pero casi siempre se recurre a una combinación de ambas estrategias, como ilustran los casos que se describen a continuación.

La familia que llamaré Azul está compuesta por una pareja de edad mediana, que convive con seis de sus nueve hijos, los que tienen entre dos y veintidós años¹¹. Adyacente a su vivienda de madera de tres ambientes, se encuentra otra en la que reside un hijo de ambos, de 24 años de edad, junto con su mujer y dos hijos de una unión anterior de ésta. Si bien ambas familias funcionan como unidades independientes, se asisten mutuamente y pueden ser consideradas como integrando una coalición. José y Eva Azul son de origen paraguayo, aunque se conocieron y unieron en Posadas, cuando José tenía 22 años y Eva 15. En ese entonces José trabajaba para un patrón con quien ya lo había hecho en Paraguay, y siguiendo al cual se trasladó a la Argentina. Cuando éste falleció, no se “entendió” con su hijo, y se fue a trabajar a un establecimiento rural de la vecina provincia de Corrientes. Cuando el dueño de ese establecimiento adquirió una “olería”¹² en las afueras

¹¹ Los datos sobre la familia Azul (seudónimo) provienen de las notas de campo de Lidia Schiavone —estudiante de antropología social (UNaM)—, que trabajó con esta familia por un período de más de un año y medio.

¹² Se denomina “olería” a las fábricas artesanales de ladrillo que son muy comunes en la región. Utilizan la arcilla de la costa del

de Posadas, José y su familia se trasladaron allí, y éste aprendió el oficio de "olero" mientras se desempeñaba como peón. Cuando su patrón vende la "olería", José nuevamente no "se entendió" con el nuevo patrón y dejó el establecimiento, percibiendo una indemnización con la que pudo adquirir el lote donde actualmente se alzan su vivienda y la de su hijo mayor.

Con el resto del dinero José alquiló una "olería" en la costa del río, y llevó a su familia a vivir allí debido a las malas relaciones que se habían establecido con los vecinos en el lugar donde adquirió el lote. Esta situación se prolongó por tres años, hasta que en 1980 deciden abandonar la olería y volver a residir en su lote. Esta decisión fue en parte motivada por haber José conseguido un trabajo asalariado permanente en una empresa de construcciones y, en parte, por haberse él y su esposa (esta última más fervientemente) convertido al pentecostalismo. Luego de dos años de trabajar en esa empresa, José volvió a quedar sin trabajo. Con la indemnización compra una olería, aunque no la trabajó personalmente por haber conseguido un puesto de sereno en la misma empresa que lo había despedido. Puso a su padre como cuidador en la olería, y a uno de sus hijos a cargo de su explotación. Posteriormente, José volvió a quedar sin empleo y desde fines de 1982 la olería se encuentra inoperable debido a la crecida del río. Ante esta situación, decidió alquilar¹³ una olería no afectada, para lo cual estableció un contrato "de palabra" con un conocido suyo. Sin embargo, deshizo el trato cuando consiguió cobrar el subsidio oficial por desempleo, ya que el permanecer desempleado le aseguraba mayores ingresos.

río y un equipamiento muy sencillo, del cual el componente más importante es el malacate movido por un caballo, y que produce la pasta para la fabricación, mediante molde y hornos al aire libre, de los ladrillos.

¹³ El alquiler se paga en mercadería, en este caso el acuerdo establecía la entrega de un 20 % de la producción (2.000 ladrillos cada 10.000 unidades).

En la actualidad, José realiza tareas varias, como las de olero, changarín, pintor, pocero, mientras que Eva se desempeña como lavandera para afuera, y realiza las tareas domésticas. El mayor de los hijos que vive con ellos trabaja como peón de albañil y changarín, una hija quinceañera trabaja en casas de familia como lavandera y niñera, y otro de los hijos (13 años) realiza pequeñas changas por dinero. El trabajo que se consigue y los ingresos que se obtienen varían de semana en semana. Así, mientras que en la primera semana del mes de mayo, trabajando José y el hijo y la hija antes mencionados, la familia obtuvo un ingreso equivalente a \$a 700,00 (circa u\$s 78), durante la última semana de abril José no pudo conseguir trabajos remunerados, y sus hijos lograron tan sólo \$a 310,00 (circa u\$s 34), así como algunas mercaderías a cambio de trabajos efectuados.

La irregularidad de estos ingresos monetarios se compensa mediante el desarrollo de una economía doméstica paralela. Así, y mediante las relaciones con "hermanos" de su culto evangélico, consiguieron autorización para utilizar parte de las tierras de una quinta vecina, de la cual la "hermana" que los autorizó es cuidadora. A cambio de esta autorización, la familia de José Azul provee a esa persona (una mujer sola) de diversos servicios y atenciones, tales como prepararle comida, lavarle la ropa, cuidarla cuando está enferma, etcétera. Es Eva la que se encarga de sembrar, cuidar y cosechar, con la eventual ayuda de su marido y del hijo menor. Por ejemplo, en octubre de 1982 plantaron mandioca, porotos manteca, maní, maíz, etcétera, y desde diciembre de ese año están consumiendo los productos. Los espacios disponibles en torno de su vivienda son también utilizados para plantar diversas verduras. Otros bienes son obtenidos a través del extenso sistema de reciprocidades establecido con parientes, vecinos y, fundamentalmente, otros miembros de la iglesia. Son muy conscientes de las obligaciones implícitas en las prestaciones en que intervienen, aun cuando éstas asuman la forma de una "donación" o regalo, y de su importancia para lograr "ayu-

da" en los momentos de necesidad. José, por su parte, cultiva cuidadosamente sus relaciones con ex patrones y compañeros de trabajo, ya que a través de ellas obtiene la información que resulta estratégica para su búsqueda de trabajo. Fue a través de esos canales que se enteró de la posibilidad de cobrar el subsidio de desempleo, y esos mismos contactos lo ayudaron a realizar los trámites para obtenerlo.

La familia Azul es relativamente próspera para los estándares de su medio, y ha conseguido tener vivienda propia y estructurar una red efectiva de recursos diversificados. En toda la trayectoria de José Azul y su familia se advierte un consistente esfuerzo por anclar su red de subsistencia tanto en los sectores socialmente supraordinados (patrones), como en un sistema de reciprocidades y ayuda mutua inter pares. La pertenencia al culto evangélico les permitió cumplir este segundo objetivo, mientras que la diversificación de fuentes de recursos concurre a paliar la incertidumbre económica derivada del fracaso de José en conseguir un empleo permanente.

La familia López constituye otro ejemplo de adaptación relativamente exitosa, basada en las coaliciones familiares y la diversificación de recursos¹⁴. Florencio López (paraguayo, 45 años) es el jefe de la familia, compuesta por su esposa Irma (argentina, 34 años) y siete hijos —dos varones y cinco mujeres— de entre 18 y 6 años de edad. Florencio se estableció en su actual barrio en 1965, en donde conoció a su actual mujer, de ascendencia italiana y nacida en el lugar. Viven en estrecha relación con un grupo de familias emparentadas entre sí y que residen en la zona. Esta verdadera coalición familiar está encabezada por S. Vega, casado con una hermana de Florencio —designado por el padre de Florencio como "cacique" y responsable de la familia— y está integrada por casi doscientas

¹⁴ Los datos sobre la familia López (seudónimo) provienen de las notas de campo de María G. Hedman —estudiante de antropología social (UNaM)—, quien ha trabajado con esta familia durante un período de un año y medio.

personas, entre las que se incluyen las familias de dos hermanos y una hermana de Florencio y las de dos sobrinos. Fue Vega quien primero se asentó en el barrio y trajo posteriormente a toda la "familia", ya que, según sus palabras, "donde va el cacique van todos". Vega ha comprado un terreno en Villa Jardín (en las afueras de Posadas), al cual piensa trasladar a toda la familia. De hecho, las inundaciones de 1982-83 han apresurado ese traslado, pero la "familia" ha dejado a algunos de sus miembros en el barrio para mantener los derechos a la relocalización por Yacyretá.

Los López han concentrado sus actividades en la esfera comercial, estableciendo asimismo una división de tareas entre Florencio y su mujer. Florencio atiende una despensa en su domicilio, cuida la huerta familiar y atiende las tareas domésticas, asistido por una hija y un hijo. Compra y revende gallinas y pollos, distribuyéndolos mediante dos carros, cuyos conductores cobran un porcentaje sobre la venta diaria. Estos realizan también tareas de jardinería utilizando una cortadora de césped y otras herramientas que son propiedad de Florencio. La mujer, Irma, atiende un puesto de verduras y frutas en el mercado municipal. Ella administra exclusivamente ese negocio y se encarga de los gastos del hogar, manteniendo sus economías por separado salvo en casos de emergencia. Los comestibles los consiguen a precio de costo, están "enganchados" a la línea eléctrica de un vecino, a quien pagan por el uso de ese servicio. En 1982 la familia López tenía un ingreso mensual que era dos veces y media superior al del promedio, mandando sus hijos a la escuela y satisfaciendo adecuadamente sus necesidades básicas.

Tanto la familia Azul como la López representan casos de adaptación relativamente exitosa, y no pueden ser considerados como marginados. Pero el interés de sus ejemplos radica en el hecho de que han conseguido escapar y mantenerse fuera del nivel de la marginación, recurriendo a mecanismos potencialmente abiertos a todos los marginados. Su éxito debe mucho al esfuerzo y también al azar, junta-

mente con la capacidad para aprovechar las oportunidades —por pocas que éstas sean— disponibles. En ambos casos encontramos que las unidades están inscriptas en una densa textura social de grupos y relaciones: la familia y la comunidad de culto en el caso de los Azul, y la gran coalición familiarista de los López. Este marco organizacional parece haber sido muy efectivo, no sólo en lo que respecta a la conformación de sus sistemas de subsistencia, sino en brindar la apoyatura normativa y afectiva necesaria para evitar las consecuencias deletéreas que suele tener la marginalidad de pobreza (Lomnitz, 1975) en el plano psicológico individual. Muchos otros no son tan afortunados.

3. El impacto inicial de las relocalizaciones por Yacyretá

Si bien el proceso de relocalización urbana a causa de la construcción de la represa de Yacyretá no ha completado el estadio de “transición” (Scudder, 1975; Scudder y Colson, 1982), y aún no han tenido lugar relocalizaciones masivas¹⁵, sus efectos se vienen produciendo desde 1974, cuando fue promulgada una ley que disponía “no innovar” en las zonas afectadas por el futuro lago, que imponía una serie de restricciones sobre la disponibilidad de los bienes inmuebles allí localizados. Si bien estos hechos intranquilizaron a los residentes, muchos de ellos prefirieron creer que las erradicaciones no se concretarían, dudando de la realización de un proyecto del que se venía hablando desde 1905 sin que nada sucediese. El que no se mencionasen plazos concretos para el inicio de las obras contribuyó a colocar a sus consecuencias en un futuro tan distante que lo tornaba irreal. Esto resultaba particular-

¹⁵ Entre octubre de 1982 y mayo de 1983 fueron mudadas cerca de 160 familias que habitan en la zona afectada para la construcción del Puente Internacional Posadas-Encarnación. Empero, estas relocalizaciones se ubican en cierta manera al margen del programa central y recién en febrero de 1984 se inician los traslados masivos.

mente válido para la población más pobre, asentada como intrusos en tierras públicas o privadas¹⁶, y carente de bienes inmuebles cuya disponibilidad resultase afectada.

Empero, hacia 1978 se tornó evidente que el desplazamiento constituía una amenaza concreta, por lo menos para los habitantes de los barrios conocidos como Heller y El Chaquito, en donde se asentarían el obrador y las obras de acceso al Puente Internacional Posadas-Encarnación (actualmente en construcción). Estas noticias, sumadas al desconocimiento acerca de qué se haría con los habitantes de la zona, generó angustia y dio lugar a que se celebrasen misas en la capilla del barrio imprecando por la “no realización de Yacyretá, esa obra de Satanás”, según palabras pronunciadas en ese entonces por el cura católico celebrante. Otros prefirieron seguir negando que fuesen a ser desplazados o a sostener, contra toda evidencia, que sus viviendas no serían afectadas, aunque lo fuesen las de sus vecinos. La realización en 1979 de un censo exhaustivo por parte de la Entidad Binacional Yacyretá, juntamente con el lanzamiento de un plan de comunicaciones a través de los medios masivos, informando acerca de las características que tendrían las relocalizaciones (traslado a viviendas unifamiliares en varios asentamientos a quienes así optasen, adecuada compensación por los bienes afectados, etcétera), creó muchas expectativas y aun un cierto clima de optimismo entre los residentes, algunos de los cuales comenzaron a considerar la posibilidad de que la obra les acarrearase beneficios y no sólo perjuicios.

El programa de relocalizaciones anunciado en ese momento incluía como beneficiarios a todas las personas que hubiesen sido censadas como residentes en la zonas afectadas en 1979, fecha de corte para esos beneficios. Todos podrían optar entre la indemnización por sus bienes o por el reasentamiento en alguno de los cuatro conjuntos habitacionales a ser construidos por la Entidad Binacional

¹⁶ Estos constituyen el 70 % de los afectados urbanos (EBY, 1981).

Yacyretá. En este último caso, los propietarios recibirían una vivienda en canje, sin ningún pago adicional, mientras que los no poseedores de terrenos podrían acceder a la propiedad de una vivienda en condiciones muy favorables y excepcionales de amortización. Por otra parte, los conjuntos habitacionales serían provistos de todos los servicios básicos, incluyendo el equipamiento educacional y comunitario correspondiente. En esas comunicaciones y en la información brindada por el numeroso personal de campo (trabajadores sociales y censistas) que la Entidad puso a trabajar en las zonas afectadas, se anunciaba el inicio de las relocalizaciones dentro de un plazo de poco más de un año. Las expectativas creadas por estos anuncios quedan evidenciadas en el hecho de que en el censo de 1979 el 86 % de los respondientes se manifestaba dispuesto a aceptar el reasentamiento antes que la indemnización.

Desgraciadamente, la concreción de la obra siguió postergándose y esas expectativas se vieron frustradas. Se interrumpió el plan de comunicaciones, y aunque se continuaron las acciones de apoyo social en algunas áreas restringidas, las dudas y la incertidumbre volvieron a ganar a la población. Cuando en 1981 debieron efectuarse algunas relocalizaciones transitorias para dar comienzo a las obras del puente internacional —tarea que asumió Yacyretá por superponerse esa área con las zonas afectadas—, la actitud de la población era nuevamente de desconfianza y suspicacia, generándose numerosos rumores que hablaban de que los “pobres serán simplemente echados con topadoras”¹⁷. La falta de definición por parte de la Entidad acerca de la política de relocalizaciones a implementar en definitiva, dio lugar a que esa suspicacia se viese reforzada. Poco más del 40 % de las familias incluidas en ese primer grupo de relocalizados aceptó ser reasentada transitoria-

¹⁷ La difusión de estos rumores creó gran agitación entre los vecinos del barrio, y una delegación de éstos, encabezada por el cura párraco, entrevistó a las autoridades provinciales y efectuó declaraciones a los periódicos. La EBY se vio obligada a emitir un comunicado tranquilizando a la población.

mente en espera de que la Entidad decidiese acerca de la solución definitiva. El resto prefirió aceptar las indemnizaciones y relocalizarse por su cuenta.

Los resultados de un sondeo realizado en 1982 (UNaM, 1982) pusieron en evidencia una actitud general de descreimiento no sólo hacia la concreción de las promesas de relocalización, sino de que se realizase la obra (juicio que encontraba sustento en las noticias periodísticas del momento). Para la mayoría de los entrevistados de menores recursos, la relocalización no era percibida como una alternativa concreta que pudiese afectar sus vidas en un plazo inmediato. De allí que el 61 % evidenciase una actitud neutra hacia el tema de las relocalizaciones, mientras que un 26 % mantuviese expectativas favorables, y un 13 % las percibiese en forma fuertemente negativa (UNaM, 1982, p. 135). De todas maneras, un 64 % se manifestaba de acuerdo en que la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada justificaba cualquier sacrificio, aunque se declaraban mayoritariamente conformes con las características del barrio en que habitaban (87 %), y poco más de un tercio admitían tener o haber tenido intenciones propias de cambiar de barrio. Un porcentaje importante de respondientes (62 %) consideraba que la vivienda no constituía su problema prioritario, y poco más de la mitad adjudicaba al tipo de vecinos un papel determinante en la calificación de un “buen lugar para vivir”. Curiosamente, más del 90 % manifestaba la certeza de que, de construir efectivamente Yacyretá viviendas de reasentamiento, éstas serían mucho mejores que sus viviendas actuales, y más del 65 % se declaraba dispuesto a esforzarse más aún para aumentar sus ingresos si ello les posibilitase acceder a la propiedad de una vivienda. El porcentaje de aquellos dispuestos a optar por la indemnización trepaba al 28 %, en comparación al 14 % del Censo de 1979¹⁸.

¹⁸ En realidad estos datos no son estrictamente comparables, ya que la muestra del estudio realizado por la Universidad incluyó

Cuando en octubre de 1982 —aún sin haberse adjudicado la obra principal de la represa— la Entidad debió proceder a la relocalización de más de 160 familias residentes en zonas requeridas para las obras del puente internacional, tan sólo el 30 % optó por el reasentamiento. Cabe señalar, empero, que la gran mayoría de esas opciones se produjeron en el último tramo del proceso —el que se extendió hasta mayo de 1983—, particularmente después de que en marzo se anunciase la licitación de las primeras 76 viviendas y se dio difusión a las características de éstas. En la actualidad, las expectativas de la población parecen haberse trasladado a la posibilidad de acceder cuanto antes a esas viviendas, no sólo por ser éstas apreciadas como “muy lindas y adecuadas a nuestras necesidades”, sino porque la catastrófica y excepcionalmente prolongada crecida del río Paraná —iniciada en noviembre de 1982 y que se mantiene a la fecha de este trabajo— ha creado una situación penosa e insostenible para los residentes en las zonas ribereñas.

Muchos de los afectados se quejan de la falta de información precisa acerca de plazos y de las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las relocalizaciones. Los más pobres tienen miedo de que se los ignore y dan crédito a las versiones que circulan en el sentido de que ellos no serían incluidos en el programa de viviendas. Cualquier fragmento de información es ávidamente captado, procesado y, frecuentemente, transformado en términos negativos. Esta información es más valorada cuando su supuesta fuente es “alguien de Yacyretá” o “del gobierno”, obtenida por alguien “que conoce a tal persona o funcionario”, aun cuando resulte contradictoria con los comunicados oficiales. A pesar de que el primer grupo de familias indemnizadas cobró montos superiores al valor de mercado de sus viviendas o mejoras y, en general, solucionó adecuadamente su problema habitacional, entre los residentes en las zonas

exclusivamente a intrusos. La significación del porcentaje deriva de que es precisamente a ese sector hacia el que apunta el programa de relocalización.

afectadas se corrió el rumor de que habían cobrado “una miseria” y que se habían reasentado en condiciones peores a las originales. Algunos intentaron resistir legalmente la erradicación, negándose a aceptar el monto indemnizatorio que se les ofrecía, y llevando su caso ante las autoridades (infructuosamente). Fue evidente la inquietud causada por el proceso, e inclusive algunas personas declararon haberse “enfermado de los nervios” y “tener mal el corazón” por verse obligados a abandonar sus viviendas y el barrio. Si bien la mayoría de los que aceptaron la indemnización manifiestan estar conformes con el dinero recibido y con la solución habitacional que encontraron, se quejan de que “ahora todo les queda muy lejos”.

Pero son quizás más importantes otras consecuencias, menos evidentes pero de impacto más notable. Así, muchos afectados, asumiendo la inminencia de las relocalizaciones, abandonaron sus pequeñas huertas y la cría de aves de corral. Muchos comerciantes comenzaron a restringir el crédito a los residentes en zonas afectadas, ante la posibilidad de una pronta dispersión del barrio por los traslados. Dado que para ser beneficiario del programa de relocalizaciones se exige la permanencia en los lugares donde fueron censados, otros afectados han visto severamente restringidos sus movimientos, limitando las posibilidades de seguir a los recursos adonde éstos se encuentren. Para no perder esos eventuales beneficios las familias se dividen, dejando algunos para que “mantengan el lugar”, o se resisten a abandonar sus viviendas aun frente al peligro cierto de la creciente del río. Algunos propietarios de viviendas expulsaron a sus inquilinos, creyendo así acceder al beneficio del reasentamiento, y se desarrolló un “mercado” de comprobantes de censo, sobre la errónea suposición de que éstos eran transferibles. En otros casos, los grupos domésticos se reorganizaron con vistas a asegurar los derechos de sus integrantes nucleares. Esta situación se da en las familias matrifocales, en las que las jefas femeninas tratan de evitar que sus “acompañantes” ocasionales puedan reclamar el derecho a ser relocalizados como parte

de la unidad familiar¹⁹. Otros se enfrentaron al problema de regularizar jurídicamente la posesión de bienes inmuebles, con los consiguientes gastos extraordinarios. Muchos jóvenes postergaron la formación de nuevas familias por temor a perder algún posible beneficio, o trajeron su pareja a vivir con la unidad parental.

4. Conclusiones

Si bien el proceso de relocalizaciones causado por la construcción de la represa de Yacyretá se encuentra en su estadio inicial y aún no se han iniciado los traslados físicos masivos, se pueden señalar una serie de consecuencias que afectan las estrategias adaptativas de los pobres urbanos. La misma posibilidad de su concreción, así como la incertidumbre acerca de sus implicaciones para la vida de los afectados, no sólo incrementaron los niveles de *stress*²⁰ en todas sus dimensiones (Scudder y Colson, 1982), sino que puede afirmarse que han impactado seriamente sobre sus sistemas de subsistencia. Las sucesivas postergaciones que sufrió el inicio de la obra, extendiendo notablemente el período entre su anuncio (1974) y la realización de los primeros traslados (1983), ha contribuido asimismo a que muchas respuestas adaptativas basadas en la efectivización relativamente inmediata de la obra y de las relocalizaciones se viesen frustradas, retroalimentando positivamente los factores *stressantes* endógenos (Lumsden, 1975), y elevando los umbrales de respuesta²¹.

¹⁹ Cabe destacar que en más de un 30 % de los hogares censados por Yacyretá en 1979, fueron las mujeres las que se declararon "jefas de la familia", a pesar de la presencia de "cónyuges" (EBY, 1981).

²⁰ Cfr. la discusión y análisis que efectúa Lumsden (1981) del concepto de *stress* y su ambigua utilización.

²¹ Tal es el caso de los numerosos inscriptos en los cursos de adiestramiento y capacitación laboral organizados por Yacyretá desde 1979 como parte de sus planes de acción social, y que apuntaban a que los egresados pudiesen encontrar trabajos bien remun-

Las estrategias adaptativas que hemos considerado están fundamentalmente dirigidas a minimizar la incertidumbre y controlar las fuentes de variación en un medio ambiente físico y social inestable y en gran medida impredecible. El asegurarse la disponibilidad de una variada gama de fuentes de potenciales recursos —aunque el aporte de cada una de estas fuentes sea mínimo—, permite introducir cierta regularidad en el flujo de estos recursos y garantizar la existencia de una "reserva" movilizable en situaciones de emergencia, disminuyendo la vulnerabilidad de la unidad en cuestión frente a las "agresiones" del medio. El sistema resultante no es de equilibrio, sino un sistema abierto de "estado constante" (*steady state*), es decir, esencialmente inestable y capaz de variar sus formas si ello resulta necesario para el mantenimiento de la constancia (Buckley, 1973, p. 32). Las estrategias se constituyen a partir de las regularidades que un sistema evidencia en sus reacciones frente a los estímulos del medio con el cual interactúa — *coping responses* (Lumsden, 1975, p. 195)—. Cualquier situación global que manifiesta cierta perdurabilidad opera selectivamente sobre esas respuestas, premiando algunas y castigando otras, de tal manera que algunas se revisten del prestigio y la autoridad de lo "probado", adquieren ejemplaridad, son transmitidas mediante la herencia social. En otras palabras, se presentan como pautas culturales, independizándose inclusive de las circunstancias inmediatas.

Los pobres urbanos —como cualquier grupo humano— evidencian en su comportamiento concreto una combinación de respuestas tradicionales (pautas culturales) y respuestas específicas o innovativas, aunque los "grados de libertad" de estas últimas estén acotados por el marco que conforman las primeras ("cultura" o "subcultura", según el caso). Así, José Azul busca establecer con sus sucesivos patrones relaciones personalizadas, cuyas espec-

rados en las obras de "inminente" iniciación. Otras personas realizaron inversiones o instalaron negocios previendo la activación económica que generarían las obras.

tativas de reciprocidad le aseguren (subjetivamente) un grado de control y estabilidad que no percibe en las relaciones contractuales formales. Se busca ávidamente información "personalizada" —fundamental en un contexto en que toda información es estratégica—, y se desconfía de toda acción originada desde afuera del sistema. Los pobladores de estos barrios marginales son plenamente conscientes de que sus sistemas de subsistencia son altamente vulnerables, y tienen muy pocas o ninguna experiencias positivas que les permitan esperar algo bueno de las acciones del gobierno o de otros sectores de la sociedad local.

La relocalización compulsiva introduce un factor exógeno que pone en cuestión el funcionamiento de aspectos básicos de sus sistemas de subsistencia. En el caso de Posadas, esos aspectos pueden ser identificados en, (a) el mapa cognitivo de recursos, (b) el sistema de reciprocidades, y (c) la organización del grupo doméstico. En lo que concierne al primero de estos aspectos, la posibilidad de relocalización invalida la utilidad futura de ese "mapa", anclado en una determinada distribución espacial de recursos, sin proveer indicios ciertos acerca de oportunidades futuras. A su vez, el sistema de reciprocidades está basado en relaciones de vecindad, parentesco, amistad, patrón-cliente, etcétera, que presuponen cierta continuidad en el tiempo y en el espacio. Este presupuesto fundamenta y subyace a las prestaciones del sistema de reciprocidades, e.g., el "crédito" que los comerciantes otorgan a sus vecinos. La discontinuidad que introduce la perspectiva de la relocalización pone en cuestión esos presupuestos y, por lo tanto, afecta el funcionamiento del sistema de reciprocidades. Por último, la posibilidad de un traslado a otro sitio y los requisitos que el programa de relocalizaciones impone para poder acceder a sus beneficios —e.g., permanencia en el lugar, mantenimiento de la unidad doméstica original, etcétera—, traba la movilidad espacial estratégica y restringe la posibilidad de introducir cambios en la composición y estructura del grupo doméstico.

Aun cuando resulta imposible al presente medir y cuantificar la magnitud del impacto que la perspectiva de una relocalización tiene sobre los sistemas de subsistencia —al menos en el caso de Posadas—, es posible afirmar que ese impacto resulta en una disminución en la eficiencia y productividad de esos sistemas. En otras palabras —y creo que esto puede tener una validez que excede al caso considerado aquí—, es de esperar una disminución en el nivel de vida de los sectores más marginados, durante el período que va desde el anuncio de las relocalizaciones hasta su efectivización, independientemente de las medidas que prevean los programas de relocalización.

Desde el punto de vista de los futuros relocalizados, el mero anuncio de la relocalización compulsiva introduce un cuántum adicional de incertidumbre dentro de un sistema que ya tiene más que suficiente de ello. Pero, lo que es más importante, ese poderoso emisor de incertidumbre no resulta abordable mediante los mecanismos adaptativos tradicionales, tanto por situarse fuera de los límites del conjunto de relaciones a través de las cuales los pobres urbanos se articulan con el resto de la sociedad local, como por la inminencia de los eventos que genera. Este hecho, por sí mismo, puede ser considerado como uno de los principales causantes de lo que Scudder llama "*stress* multidimensional de relocalización". En la medida en que se prolongue el período de pre-relocalización más allá de lo normal —como ha sucedido en el caso de Yaciretá—, y que no se establezca un sistema de comunicación eficiente entre la agencia relocalizadora y la población afectada, este factor *stressante* puede superar la capacidad de respuesta de los sectores más deprimidos, entre otras razones, por "castigar" precisamente las respuestas potencialmente adaptativas y que trata de tomar en cuenta las nuevas circunstancias.

Es indudable que el efecto *stressante* de esta incertidumbre, así como sus consecuencias inmediatas sobre la efectividad de los sistemas de subsistencia, influirá no sólo sobre las circunstancias bajo las cuales se realizarán en

definitiva las relocalizaciones, sino sobre la actitud de la población hacia el programa y la agencia encargada de implementarlo. La existencia de este *efecto entrópico*²² —de confirmarse su ocurrencia, como espero en otros contextos similares—, está señalando la necesidad de tener en cuenta un “costo social”, rara si alguna vez incorporado a los análisis de impacto social (SIA), salvo en su dimensión psicológica y cualitativa. Sugiere, asimismo, la conveniencia de focalizar más en el estudio de los factores que condicionan las posibilidades de que una población involucrada en una relocalización compulsiva, se mueva en uno u otro sentido a lo largo de la secuencia de estadios que identifican Scudder y Colson (1982). Los datos aquí presentados no permiten avanzar más por el momento, pero plantean líneas potencialmente fructíferas para la investigación.

²² Aunque no me entusiasma acuñar jerga pseudotécnica, no encuentro otro término tan breve y descriptivo para denotar la causación de incertidumbre y desorden en un sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ACKERMANN, Kenneth J. (1977): “Convertirse en criollo: poder y aculturación recíproca en un pueblo argentino de frontera”, en E. HERMITTE y L. J. BARTOLOME, comps.: *Procesos de articulación social*, pp. 136-170. Amorrortu (para CLACSO), Buenos Aires.
- ARGENTINA (1982): *Censo Nacional de Población y Vivienda 1980: Misiones*. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Buenos Aires.
- ASHTON, Guy T. (1972): “The Differential Adaptation of Two Slum Subcultures to a Colombian Housing Project”, en *Urban Anthropology*, vol. 1, N° 2, pp. 176-194.
- BANCK, Geert A. (1980): “Estrategias de sobrevivencia de familias de baixa renda no Brasil. Un estudo de caso”, en G. VELHO, comp.: *O desafio da cidade. Novas perspectivas da antropologia brasileira*, pp. 59-74. Editora Campus, Rio de Janeiro.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1977): “Populismo y diferenciación social agraria: las Ligas Agrarias en Misiones (Argentina)”, en *Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brasílien* (Caravelle), N° 28, pp. 141-165, Toulouse, Francia.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1982 a): “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975. Emergencia de un populismo agrario”, en *Desarrollo Económico*, vol. 22, N° 85, pp. 25-56, Buenos Aires.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1982 b): “Colonias y colonizadores en Misiones”. Centro de Investigación Social, FHCS, UNaM, Posadas (mimeografiado).
- BARTOLOME, Leopoldo J. (en prensa): “La familia matrifocal en los sectores marginados: desarrollo y estrategias adaptativas”. A aparecer en *RUNA*, revista del Instituto de Antropología de la Universidad de Buenos Aires.
- BARTOLOME, Leopoldo J. (1983): “Aspectos sociales de la relocalización de la población afectada por la construcción de grandes represas”. Trabajo presentado al Seminario Interamericano sobre Efectos Sociales de las Grandes Represas de América Latina, organizado por el CIDES (OEA) e ILPES (ONU), Buenos Aires, 4-8 de junio de 1983.
- BENNETT, John W. (1971): *Northern Plainsmen. Adaptive Strategy and Agrarian Life*. Aldine, Chicago.
- BOULDING, Kenneth (1976): *La economía del amor y del temor*. Alianza Editorial, Madrid.

- BUCKLEY, Walter (1973): *La sociología y la teoría moderna de los sistemas*. Amorrortu Ed. (2a. edición), Buenos Aires.
- CABRERA, Mario (1983): "Movilidad de hogares en las zonas afectadas por el Proyecto Yacyretá en la ciudad de Posadas". Programa de Relocalización y Acción Social Urbano, Entidad Binacional Yacyretá, Posadas (mimeo).
- CAMPBELL, Tim E. J. (1980): "Resource Transformation in Squatter Households. Testing a System Model of Urbanism". Disertación doctoral, Massachusetts Institute of Technology (mimeo).
- ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA (1981): *Informe analítico del Censo 1979 de población y viviendas urbanas comprendidas en el Proyecto Yacyretá, en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina*. Programa de Relocalización y Acción Social Urbano, Departamento de Coordinación, Posadas.
- FIRTH, Raymond (1951): *Elements of Social Organization*. Watts & Co., Londres.
- FRANK, Andrew G. (1970): "Urban Poverty in Latin America", en I. L. HOROWITZ, comp.: *Masses in Latin America*, pp. 215-234. Oxford University Press, New York.
- HOOPS, Terry, y SCOTT, Whiteford (Jr.) (1981): "Transcending Urban Boundaries: A Comparative View of a Labor Reserve and Family Strategies". Department of Anthropology, Michigan State University, East Lansing, Michigan (mimeo).
- KAPFERER, Bruce (1976): "Introduction: Transactional Models Reconsidered", en B. KAPFERER, comp.: *Transaction and Meaning, Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behavior*, pp. 1-22. Institute for the Study of Human Issues (ASA Essays in Social Anthropology, N° 1), Philadelphia.
- LEEDS, Anthony (1973): "Locality Power in Relation to Supralocal Power Institutions", en Aidan SOUTHALL, comp.: *Urban Anthropology*, pp. 15-41. Oxford University Press, Nueva York.
- LOMNITZ, Larissa (1975): *Cómo sobreviven los marginados*. Siglo XXI, 3ra. edición, México, 1978.
- LOMNITZ, Larissa (1978): "La marginalidad como factor de crecimiento demográfico", en J. E. HARDOY, R. M. MORSE y R. P. SCHAEDEL, comps.: *Ensayos histórico-sociales sobre la urbanización en América Latina*, pp. 315-329. SIAP, Buenos Aires.
- LUMSDEN, David Paul (1975): "Towards a Systems Model of Stress: Feedback from an Anthropological Study of the Impact of Ghana's Volta River Project", en SPIELBERGER y SARASON, comps.: *Stress and Anxiety*, vol. 2, pp. 191-228. Hemisphere-Wiley, Washington.

- LUMSDEN, David Paul (1981): "Is the Concept of 'Stress' of any Use, Anymore?", en D. RANDALL, comp.: *Contributions to Primary Prevention in Mental Health*. Canadian Mental Health Association - National Office, Toronto.
- MARGOLIES, Louise (1979): "Introducción: the Process of Social Urbanization in Latin America", *Urban Anthropology*, vol. 8, N° 3-4, pp. 213-225.
- MARSHALL, Adriana (1978): *El mercado de trabajo en el capitalismo periférico. El caso de Argentina*. FLACSO, Santiago de Chile.
- PERLMAN, Janice (1976): *The Myth of Marginality*. University of California Press, Berkeley.
- SCUDDER, Thayer (1973): "The Human Ecology of Big Projects: River Basin Development and Resettlement". *Annual Review of Anthropology*, vol. 2, pp. 45-61.
- SCUDDER, Thayer (1975): "Resettlement", en F. F. STANLEY y M. P. ALPERS, comps.: *Man-Made Lakes and Human Health*, pp. 453-471. Academic Press, Londres.
- SCUDDER, Thayer (1981): "What it Means to be Dammed. The Anthropology of Large-Scale Development Projects in the Tropics and Subtropics", *Engineering and Science*, abril 1981, pp. 9-15.
- SCUDDER, Thayer, y Elizabeth COLSON (1982): "From Welfare to Development: A Conceptual Framework for the Analysis of Dislocated People", en Art HANSEN y A. OLIVER-SMITH, comps.: *Involuntary Migration and Resettlement. The Problems and Responses of Dislocated People*, pp. 267-287. Westview Press, Boulder, Colorado.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES (1978): "Caracterización y diagnóstico socio-económico de la población a ser relocalizada para la construcción del obrador y de la cabecera del Puesto Internacional Posadas-Encarnación". Centro de Investigación Social (FCS-UNaM) para la Entidad Binacional Yacyretá, Posadas (mimeo).
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES (1982): "Estudio sobre los medios de subsistencia y la capacidad de pago de la población no propietaria de la Etapa I". Centro de Investigación Social (FHCS) para la Entidad Binacional Yacyretá, Posadas (mimeo).
- WHITEFORD, Scott (Jr.) (1981): *Workers from the North. Plantations, Bolivian Labor, and de City in Northwest Argentina*. University of Texas Press, Austin.

**ERRADICACION DE "VILLAS MISERIA"
Y LAS RESPUESTAS ORGANIZATIVAS
DE SUS POBLADORES**

**ESTHER HERMITTE*
y MAURICIO BOIVIN****

Nota: Este trabajo forma parte de una investigación mayor sobre el tema "Análisis sociocultural de dos comunidades del Gran Buenos Aires: impactos externos y mecanismos de autogestión", auspiciada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Buenos Aires) con el apoyo de la Fundación Interamericana. Esta investigación es realizada por un equipo integrado por Mauricio Boivin, Victoria Casabona, Rosana Guber y Sofía Tiscornia, con la dirección de Esther Hermitte.

* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.

** Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y FLACSO.

SUMARIO

Introducción	119
Las villas miseria en Buenos Aires	121
El plan de erradicación	123
El operativo de erradicación	127
Las respuestas organizativas	131
Impacto de la erradicación	137
Conclusiones	142
Bibliografía consultada	144

Introducción

El objetivo de este trabajo es la descripción de lo que se ha denominado el "drama social" de las relocalizaciones forzosas. Nos referimos específicamente al proceso de erradicaciones masivas que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que las erradicaciones datan de fecha anterior, nos abocaremos a la época 1976/82, cuando éstas alcanzan un grado de aceleración notable, tanto por el número de erradicados como por el nivel de violencia desproporcionado con la situación de indefensión de los villeros frente a los organismos oficiales encargados de llevarlas a cabo¹.

La política de erradicación, asociada a una concepción de la *villa miseria*² como lugar de anomia y a la caracterización de sus habitantes como seres apáticos, indolentes, carentes de iniciativa, meros receptores de las políticas oficiales, restándoles toda capacidad político-organizativa, constituyó un momento crítico para la supervivencia de estos núcleos urbanos.

Consideramos que la erradicación, por sus características "violentas", se constituye en un analizador propicio

¹ Entre 1976 y 1980 el total de erradicados de la ciudad de Buenos Aires alcanzó la cifra de 184.352 personas, lo que representaba el 82 % de la población villera.

² Nos referimos a este tipo de comunidades como villas miseria o villas de emergencia, como se las denomina en la Argentina. Como es sabido, el fenómeno de asentamientos espontáneos es conocido en varios países de América Latina con denominaciones tales como "callampas" en Chile, "favelas" en Brasil, "barriadas" o "pueblos jóvenes" en Perú, "cantegriles" en Uruguay, etcétera. Estos asentamientos pueden tener lugar en áreas periurbanas de las grandes ciudades o en enclaves dentro del sector urbano.

donde se ponen de manifiesto las concepciones, los móviles, los intereses y los cursos de acción elaborados por los distintos actores implicados en dicha situación social.

El proceso erradicatorio en Buenos Aires acusa características singulares que lo distinguen de sucesos aparentemente similares que se han llevado a cabo en otros países latinoamericanos³. Quizá la diferencia más notoria es que de los dos polos a considerar, *erradicación* y *relocalización*, éste último es inexistente ya que faltaban los planes oficiales para asegurar un nuevo destino a los erradicados. En los casos que existieron, anteriores a 1976, no se cumplió con los objetivos propuestos, ya que los destinatarios finales de las viviendas construidas no fueron los villeros sino personas de otros sectores sociales. Esto ha de resultar en que el llamado "*stress* de las relocalizaciones" (Scudder-Colson, 1982) se agudice frente a la situación real de atomización y dispersión de las bases organizativas previamente logradas y a la imperiosa necesidad de generar nuevas estrategias adaptativas, individuales o grupales, para sobrevivir en los nuevos lugares de residencia. Ello conlleva a la reconstrucción de redes sociales, grupos de interacción basados en parentesco o en amistad, entre cuyos miembros tienen lugar una serie de prestaciones mutuas de bienes y servicios, tales como el cuidado de los niños para que los padres puedan salir a trabajar, acompañamiento para la realización de algunos trámites, cuidado de enfermos, intercambio de comidas, utensilios, mantenimiento de pasillos y zanjias, etcétera.

El proceso de erradicación de villas miseria de Buenos Aires responde primordialmente a intereses sobre el espacio urbano que adquiere valor y a una política estatal que considera a esos núcleos habitacionales como insalubres y generadores de situaciones "anómalas" que en buena medida *contaminan* a la ciudad toda.

³ Es oportuno mencionar aquí que también a diferencia de experiencias similares en otros países o aun en la Argentina, caso Yacuyretá, están ausentes los antropólogos en cualquiera de las etapas del proceso.

Las villas miseria en Buenos Aires

Un rasgo determinante del crecimiento económico en los países del Tercer Mundo, basado en la industrialización, ha sido el movimiento masivo de habitantes desde el interior del país hacia las áreas metropolitanas. La Argentina no ha sido una excepción a esas grandes migraciones internas, las que se manifestaron con gran ímpetu ya a partir de la década del 40, llegando a su auge en los años 60.

Mangin nota que "la formación de villas de emergencia es una respuesta popular a una acelerada urbanización en aquellos países que no pueden o no quieren proveer servicios para el creciente número de población urbana" (1967, p. 67).

Varios son los factores de este crecimiento que atentaron contra las esperanzas de los migrantes de encontrar un porvenir mejor en la urbe: el régimen de propiedad privada de la tierra y el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario, unidos a un proceso de industrialización intensivo en capital y de alta tecnología que demandaba menos mano de obra que la disponible, se combinaron de manera tal que determinaron una peculiar inserción de gran parte de los migrantes. Si bien en un primer momento los inmigrantes se alojaron en algunos edificios viejos situados en el centro de la ciudad, conocidos con el nombre de conventillos o inquilinatos, el continuado flujo migratorio agudizó el problema habitacional, lo que resultó que para mediados de la década del 40 muchos se desplazaran hacia zonas "periféricas" de la ciudad⁴.

Imposibilitados de acceder a una vivienda o a un trabajo bien remunerado y estable y ante la ausencia de planes oficiales de vivienda para personas de escasos recursos, ese sector social se vio impelido a dar una solución a su

⁴ Conventillos o inquilinatos: casas colectivas donde cada individuo o familia alquila una habitación y comparte con otros el baño y la cocina.

problema habitacional. Esta consistió en la ocupación ilegal de terrenos fiscales en la mayoría de los casos o privados, donde construyeron sus "casillas", dando origen así a las denominadas *villas miseria*, a las que paulatinamente se incorporarían inmigrantes llegados de países limítrofes, especialmente Bolivia, Paraguay y Chile. Si bien estos núcleos poblacionales se instalaron en las cercanías de las fuentes laborales, la infraestructura de servicios urbanos básicos, de transporte, educación y salud era inexistente en ellas. La ocupación paulatina, creciente y no violenta, como sucederá en otros países de América Latina, por ejemplo en Perú y Brasil, vería multiplicarse las viviendas precarias de madera y chapa⁵.

Estimaciones oficiales en cuanto a su número ilustran sobre la marcha de este peculiar proceso de urbanización villera, el cual comienza a adquirir importancia en la década del 60 hasta alcanzar su máxima expansión durante los años 1973-76.

Población villera en Capital Federal

Año	Habitantes
1960	40.000
1977	280.000

La cifra correspondiente al año 1977 —31 villas que abarcaban 253 hectáreas— representaba aproximadamente el 7 % de la población capitalina.

⁵ El único fenómeno de "ocupación organizada y masiva" en nuestro país ocurrió a fines de 1981 en tierras de los distritos de Almirante Brown y Quilmes a 40 km al sur de la Capital Federal. Sobre la superficie de 200 hectáreas se asentaron aproximadamente unas 20.000 personas, en su mayoría desocupados provenientes de villas miserias erradicadas o desalojados de inquilinatos por no poder pagar los alquileres en constante aumento.

La política del Estado argentino hasta el año 1976 respecto de las villas de emergencia puede ser caracterizada de ambivalente, encontrándose ligada a las oscilaciones de carácter político que sufriera la Nación en su conjunto. En ciertos momentos, ésta se orientaba hacia la "erradicación compulsiva", relocalizando a estos grupos sociales mediante planes oficiales de vivienda, en zonas ubicadas a mayor distancia del centro urbano. En otros, ciertas acciones del gobierno tendían a mejorar la instalación de centros de salud y de apoyo escolar e incluso la provisión de los servicios urbanos básicos, como ser la provisión de agua y electricidad.

El plan de erradicación

La política autoritaria hacia los sectores populares, emprendida por el "Proceso de Reorganización Nacional" (gobierno de facto llegado al poder mediante un golpe militar el 24 de marzo de 1976), trajo aparejados cambios drásticos en la forma en que el Estado se propuso resolver "la cuestión villera". En un año, aproximadamente, el gobierno elaboró su plan con el fin de dar una "solución integral al problema de las llamadas villas de emergencia en el menor plazo posible".

En ese mismo período se inicia una amplia campaña de estigmatización de la población villera, registrándose además acciones erradicatorias aisladas. Se hace aparecer, ante la opinión pública, a las villas como refugio de maleantes, vagos dependientes de la beneficencia, prostitutas, alcohólicos y clientela política fácil para demagogos, todo ello con el fin de justificar acciones posteriores.

Las declaraciones del funcionario público a cuyo cargo estuvo todo el operativo de erradicación, publicadas en el número 191 de la revista *Competencia*, en marzo de 1980, constituyen un valioso aporte para esclarecer, por una parte, el criterio erradicatorio oficial, pero más aún nos informan sobre la conceptualización que se tiene de

los villeros, esos *otros* que son diferentes al habitante de la ciudad metropolitana, que son inmodificables y a los que quizá la única forma de controlarlos, más allá de la erradicación, es ubicar cada familia entre otras dos que sean distintas a esa especie extraña, *el villero*.

Ante la pregunta del periodista sobre cómo se define una política poblacional y cómo se implementa, dicho funcionario formuló las siguientes declaraciones:

Hay que partir de un modelo al que se quiere llegar. Tampoco es cuestión de traer gente indiscriminadamente. Hay que definir una política de *calidad de los habitantes* que tiene que estar implícita en la política poblacional. Nosotros solamente pretendemos que vivan en nuestra ciudad quienes estén *preparados culturalmente* para vivir en ella. Concretamente vivir en Buenos Aires *no es para cualquiera sino para quien lo merezca*, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Como ejemplo, donde yo saco una fábrica todo el entorno social cambia. Donde antes tenía un oficial semiespecializado, puede *instalarse un coya a vender limones* y *eso me disminuye la calidad de los habitantes*. Nuestra política respecto a la reubicación de los villeros es de reintegrarlos a la sociedad, es decir, no hacer un barrio especialmente para ellos como se hacía antes, *sino ubicarlos en una fracción de terreno en el Gran Buenos Aires entre dos familias que nada tengan que ver con el problema*. Se trató el problema en *forma quirúrgica* y *en tiempo récord* produjimos la explosión de las villas de emergencia. Atacamos problemas como el del entorno folklórico e histórico de algunas de esas villas. En tres años erradicamos 100.000 villeros y sólo nos resta ubicar a 7.500 familias, lo cual quedará completado este año (el subrayado es nuestro).

Estas declaraciones nos permiten apreciar la concepción que los funcionarios públicos de dicho período tienen sobre las villas miseria, esto es, un cáncer social cuya única solución es la extirpación quirúrgica.

La ordenanza Nº 33.652 del 13 de julio de 1977 otorgó el instrumento legal necesario a la filosofía del gobierno. Por ella se facultó a la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV en adelante), organismo dependiente de la Muni-

alidad de Buenos Aires, para llevar a cabo "la erradicación de las villas de emergencia y también de todo otro asentamiento poblacional precario existente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para la remodelación física del área urbana, recuperación de tierras y realización de obras públicas".

La CMV, en un documento hecho público a mediados de 1980, reseña su gestión. Dicho documento es de sumo interés, ya que refleja claramente, a nuestro entender, los supuestos básicos que guiaron su accionar, además de las constantes declaraciones a los medios periodísticos, como también la campaña de difamación emprendida con anterioridad al operativo de erradicación.

La CMV define a las villas de emergencia como:

Asentamientos ilegales de familias en tierras fiscales y en algunos terrenos de terceros particulares, con construcciones que no cumplen normas edilicias mínimas de habitabilidad, sin infraestructura de servicios, ni salubridad e higiene compatible con la vida urbana, configurando un alto grado de hacinamiento poblacional y familiar (1980).

A su vez, se caracteriza a los pobladores como "familias provenientes, en su mayoría, del interior del país y de países limítrofes, con escasos recursos económicos y baja calificación de mano de obra, que se encuentran en estado de marginalidad".

Una de las primeras medidas oficiales adoptadas prohibió la construcción de nuevas viviendas en las villas, "por estar reñidas con las elementales necesidades materiales y espirituales de la vida humana, contrarias a la salud de la población". La medida se fundamentaba asimismo en consideraciones de orden estético, ya que el tipo de conglomerados de construcción precaria perjudicaba el "ornato de la ciudad". Esto se reforzaba con consideraciones de índole sanitaria, como ser la falta de infraestructura de servicios, las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene, lo que constituía a las villas miseria, según las autoridades

oficiales, en graves focos de infección que podían contaminar la salud de la población de la gran urbe.

La CMV condenó las políticas implementadas aun por gobiernos de facto anteriores, afirmando que, "hasta el año 1976, la política seguida fue el realojamiento de esta población en viviendas de interés social; los barrios construidos conservaron las pautas de la villa y no favorecieron la integración con el resto de la comunidad, ni el sentido de la propiedad. Como consecuencia, los villeros no asumieron el pago de las cuotas y el cuidado de sus viviendas" (CMV, Informe 1980).

El plan de erradicación fue tomando forma basado en esas consideraciones y en el supuesto enunciado por el intendente de la ciudad de Buenos Aires, de que el 70 % de la población villera contaba con los medios económicos necesarios para resolver su problema habitacional, juicio que se contradice con la caracterización de los pobladores hecha por la CMV citada más arriba.

El examen de la ordenanza mencionada más arriba nos permite constatar la inexistencia de cualquier disposición tendiente a prestar asistencia a la población villera. Así, la formulación de planes que contemplaran la construcción de viviendas de tipo económico no fue considerado en ningún momento por el Estado, si bien contemplaba que dicho organismo debía crear "condiciones para que los grupos familiares asentados en las villas puedan acceder a viviendas decorosas".

La CMV procedió entonces a la instrumentación de la erradicación de villas capitalinas, la que habría de comprender tres etapas:

1. *Congelamiento*: el objetivo de esta etapa era determinar la dimensión "del área afectada por la población villera", la densidad de viviendas y población efectiva a erradicar e impedir su crecimiento.

2. *Desaliento*: su objetivo era desanimar a los villeros a permanecer en la villa y convencerlos para que las abandonaran por sus propios medios.

3. *Erradicación*: como su nombre lo indica, se dirigía a la eliminación de ese tipo de asentamientos precarios dentro del ámbito de la Capital Federal. Esta etapa culminaba con la demolición de viviendas.

El operativo de erradicación

El operativo de erradicación comenzó a implementarse a principios del año 1978 en un todo de acuerdo con lo planificado. Para ello se procedió a la apertura de oficinas dependientes de la CMV en las villas, desde donde se iniciaron los cursos de acción adecuados para la puesta en práctica del plan. El personal reclutado entre miembros en actividad o en condición de retiro de la Policía y de las Fuerzas Armadas estuvo comandado por un ex comisario de la Policía Federal. Simultáneamente se montó una amplia campaña de intimidación difundida por distintos canales de comunicación, con el objeto de que las familias abandonaran sus hogares en forma voluntaria. En caso contrario su vivienda sería demolida.

La etapa de *congelamiento* significó la realización de distintas tareas. En primer lugar, mediante la aerofotografía se obtuvo un plano de las distintas villas capitalinas; luego se procedió al relevamiento físico de las viviendas y a su numeración. En último término se censó a la población villera con el fin de conocer el número de habitantes, sus ingresos, ocupación, nivel educacional y su intención o no de regresar al lugar de origen. A cada familia censada se le hizo entrega de un Certificado de Asentamiento Provisorio (CAP), el que debía ser presentado ante el requerimiento municipal o policial como documento imprescindible para entrar o salir de la villa. Los datos del censo sirvieron para la confección de un legajo familiar, en el que luego se volcaba toda la información respecto de los trámites realizados por cada familia hasta su erradicación definitiva.

Los cursos de acción instrumentados en la etapa de

desaliento fueron varios y tendieron a suprimir las fuentes laborales y de aprovisionamiento internas a la villa. Para ello se controló el comercio, pequeñas industrias, talleres y depósitos, y se prohibió la circulación de vehículos distribuidores de productos alimenticios.

La infraestructura urbanística existente en cada villa fue desmantelada, en muchos casos se levantó la red de provisión de agua y de luz. Asimismo se cerraron los centros asistenciales de salud y de educación.

La creación de un cuerpo de vigilancia interna tuvo como única misión amedrentar a la población villera mediante frecuentes *razzias* con perros y caballos, en las cuales se cometían todo tipo de atropellos. Más aún, todo grupo familiar que fuera calificado como pudiente debía abandonar la villa por sus propios medios en el plazo de 15 días a partir de la notificación; en caso contrario se procedería al desalojo y demolición de la casilla.

El proceso de *erradicación* propiamente dicho contemplaba las siguientes opciones para los villeros:

- 1) Traslado a "terreno propio".
- 2) Retorno al país o provincia de origen, para lo cual la CMV se haría cargo del costo del pasaje de la familia y del transporte de sus pertenencias.
- 3) Las familias de escasos recursos que estuvieran construyendo sus viviendas en terrenos de su propiedad podrían solicitar apoyo crediticio.

Las familias eran citadas a las delegaciones de la CMV a los efectos de fijárseles un plazo para la desocupación de sus viviendas. Los plazos de desalojo eran perentorios, a veces se les otorgaban plazos mínimos de 72 horas y arbitrarios, ya que ante la ausencia de criterios formales y uniformes, éstas dependían de la buena voluntad de los funcionarios a cargo. Este hecho le permitió a una minoría de villeros un cierto espacio de maniobra para negociar una extensión del plazo de desalojo por medio de pagos ("coimas" al personal a cargo del operativo).

Los procedimientos de desalojo se realizaban con un alto grado de violencia; el personal encargado portaba armas de fuego. Vencido los plazos, se presentaban en horas tempranas con camiones ante la vivienda a erradicar, procediendo a cargar en ellos las personas que se hallaban en la casa y todas sus pertenencias.

Por considerarlas de extrema relevancia, insertamos aquí las versiones ofrecidas por informantes erradicados. De ellas rescatamos los elementos que caracterizaron el proceso: 1) la violencia; 2) la intimidación; 3) el incumplimiento de promesas hechas; 4) el intento sistemático de dispersión, con la consecuente atomización. Nos abstemos de agregar comentarios a lo expresado por los informantes, ya que ellos transmiten con total nitidez los rasgos del operativo.

Se nos ha golpeado; se nos ha amenazado con armas de fuego; se nos ha obligado a firmar que nos íbamos "voluntariamente" de la villa; se nos ha trasladado de una villa a otra en camiones municipales de basura, dejándonos tirados muchas veces a la intemperie o metiendo dos familias en una misma casilla. (*P. L., 32 años*).

A nosotros nos mudaron por la fuerza. No teníamos donde ir, no podíamos pagar un adelanto. Entonces la Municipalidad nos trajo para aquí. Inclusive los chicos estaban durmiendo, nos voltearon la casa que era de material y nos trajeron. (*F.J., 41 años*).

Fue una guerra contra nosotros. Un día llegaban las topadoras a demoler las casas, ni preguntaban si había gente adentro. También nos cortaron los caños de agua para que nos fuéramos. (*Z.G., 43 años*).

Una mañana de 1978 varios individuos llegaron a mi casa, me amenazaron con tirarla abajo y matar a los chicos. Mi marido tenía miedo y firmó un papel diciendo que nos íbamos por nuestra propia voluntad. Trajeron un camión, cargamos lo que pudimos y vimos cómo demolían nuestra casa de ladrillos. No nos dieron un peso, perdimos la heladera y algunos muebles. Nos dejaron en el campo como a 40 km de la capital. En ese lugar no había un alma. Armamos una carpa con frazadas y así

vivimos hasta levantar una casita de chapa. Después empezó a llegar más gente, todos erradicados como nosotros. No había agua ni luz, pero mi marido con otra gente logró instalar una bomba. Tampoco había trabajo cerca. Mi esposo venía a Buenos Aires a buscar changas; a veces conseguía pero gastaba todo en comida y en pasaje. El es un muchacho muy bueno. Hasta estudió y todo, pero estaba muy mal y empezó a tomar. Nos separamos por culpa de la miseria. (A.F.).

Cuando empezaron los desalojos en 1977, la Municipalidad dejó de reconocernos. La CMV se instaló en la villa, en un centro de salud que nosotros habíamos construido y donde dos médicos atendían gratis. Desde ese día no tenemos atención sanitaria. El colegio que teníamos también lo sacaron y la guardería, que casi estaba terminada, la demolieron. (*Dirigente de la Comisión de Vecinos de la Villa 21*).

Siempre hice trámites para que me den una vivienda del FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) pero nunca pasó nada. No teníamos donde ir, por eso nos vinimos acá. Esto era inhabitable. La Municipalidad quemaba basura y los terrenos eran puros pozos y lagunas. Nosotros rellenamos, nivelamos, mejoramos todo y construimos la casa. Nadie nos dio nada, la hicimos solos. Después, en el año 1977, comenzaron a echar a la gente. Decían que había una ley y qué sé yo. Nos llevaban a la oficina de la CMV, acá en la villa, y nos decían que éramos bolivianos y que teníamos que irnos. Claro que somos bolivianos, todos obreros de la construcción y no vagos como dicen ellos. (*P.V., 42 años, casado, 7 hijos*).

Primero venían los de la CMV y diciendo que nos iban a dar un crédito para la casa nos anotaban. Pero resulta que luego no pasó nada. Una vez que pasó eso vinieron unos camiones de la Municipalidad y una topadora que rompió todo... los de la Municipalidad nos decían que buscáramos dónde ubicarnos. Primero fue el engaño y después nos sacaron y empezaron a tumbar todo..., que salgamos y listo y entonces decidí venir acá. El camión paraba donde uno le decía y ahí nos dejaban. (*M.C., 37 años*).

La acción erradicadora de la CMV comenzó a principios del año 1978. Se inició en las villas de Retiro, Colegiales y Belgrano, todas ellas ubicadas en las cercanías de lugares donde se desarrollaría el Campeonato Mundial de Fútbol

de ese año. La ciudad de Buenos Aires debía presentar al mundo, cualquiera fuese el costo, una fachada progresista y ordenada. Con ese objeto, 35.000 personas aproximadamente fueron erradicadas en el curso de tres meses.

Las familias así erradicadas eran trasladadas de inmediato a otras villas miserias o a los llamados Núcleos Habitacionales Transitorios⁶, los que se transformaron, por su precariedad, en nuevas villas miseria, y lejos de ser transitorios se constituyeron en permanentes. Ahí se vive en la actualidad en un hacinamiento muchas veces peor que en las villas, con servicios sanitarios deficientes y con el agravante de que debe pagarse un alquiler, amén de que, disposición municipal mediante, pueden ser desalojados en cualquier momento.

La gran mayoría de las familias erradicadas fueron arrojadas en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, lo que agravó el ya precario panorama habitacional del conurbano. En el curso de dos años, 1978 y 1979, fueron trasladadas de este modo una 140.000 personas. Esta situación originó en 1981 una denuncia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires con respecto a la política de erradicación implementada por la Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires. El mandatario provincial argumentaba que dicha política no tenía en cuenta el verdadero problema villero y sus únicos logros habían sido el traslado del problema de un lugar a otro.

Las respuestas organizativas

Las voces públicas que expresaron su oposición al plan de erradicación fueron escasas, ya que la proscripción política vigente en ese momento, sumada al clima de represión

⁶ Creados en diciembre de 1967 por una anterior ley de erradicación, por la que se crearon alojamientos transitorios en unidades de construcción precaria para los erradicados de villas de emergencia. Según dicha ley, los villeros serían trasladados a sus viviendas definitivas en el plazo de un año.

generalizada, imposibilitaba la instrumentación de acciones colectivas por parte de los villeros para enfrentarse al operativo de erradicación. Es necesario además tener en cuenta que las organizaciones reivindicativas villeras, de activa participación en el gobierno constitucional anterior, habían sido desmanteladas y que todo intento de organización colectivo era catalogado como "subversivo" y podía ser automáticamente reprimido por el gobierno militar.

La denuncia sobre las condiciones de indefensión de los villeros y de los atropellos constantes a la dignidad humana de que eran objeto partió desde un comienzo de los miembros del Equipo Pastoral de Sacerdotes de Villas de Emergencia (EPSVE). La acción de dicha organización consistió principalmente en una amplia campaña de denuncia y de esclarecimiento ante la opinión pública. El objetivo era dar a conocer la real situación de los habitantes de la villa, principalmente para contrarrestar los efectos de la campaña difamatoria emprendida contra ellos por la Municipalidad.

El EPSVE se dirigió por carta a la máxima autoridad eclesiástica el 30 de mayo de 1977, y en ella le pedía que interviniera ante las autoridades a los fines de que éstas revieran su campaña de erradicación. Se le informaba además acerca de las precarias y lastimosas condiciones de habitación y subsistencia en la que se encontraban, los villeros. Se enunciaban las razones de esa situación debido a la agudización de algunas de las causas que dieron origen a las villas miseria, entre otras, "las dificultades crecientes, sociales y económicas en países vecinos; la postergación en nuestro país de la reactivación industrial en el interior, el innegable deterioro del poder adquisitivo del salario, el alza extraordinaria de los precios, etcétera. Es por lo tanto cada vez mayor el número de los que deben recurrir a este medio extremo para alojarse, y cada vez menor la posibilidad de salir de él, mediante la adquisición de una casa o el pago de un alquiler".

La carta continúa haciendo mención al "evidente cambio de actitud operado en las autoridades municipales, que a

partir del año 1976 ni siquiera reconocen las penosas condiciones de esa gente tratando de solucionarlas mediante la prestación de los servicios básicos que hacen a la vida urbana. Hoy no solamente no se atiende a ello sino que se juzga, además, que no debe atenderse porque se opta por una visión del problema que lo falsea y lo trastorna enteramente. Se llega a afirmar que el problema de las villas no se origina en la falta de viviendas. Otra vez sólo se piensa en eliminarlas porque hay que construir autopistas o recuperar los terrenos o porque afean a la ciudad (...), pero no se atiende al tremendo problema humano y para facilitar la erradicación basándose en casos singulares y anecdóticos se difunde una visión mixta e injusta de la realidad" (EPSVE, 30/5/77).

Condena también la ideología racista que subyace a muchas de las declaraciones de las autoridades municipales y denuncia el constante amedrentamiento policial a todas horas del día del que eran objeto los villeros.

La campaña del EPSVE para esclarecer a la opinión pública continuó sin pausa y, a mediados de 1978, hace conocer un segundo documento: "Informe sobre la situación de las villas de emergencia". En él se siguen los mismos lineamientos básicos formulados en la anterior carta dirigida al arzobispo de Buenos Aires y se exhortaba a que el público reflexionara acerca de los atropellos e injusticias de que eran objeto los villeros. Un objetivo importante del informe era el de que "entre todos ayudemos a que se posibiliten soluciones dignas a los indigentes... y cesen los desalojos e inhumanos realojamientos de una villa a otra" (EPSVE, 9/6/78).

Uno de los intentos organizativos relevantes fue el de las *Cooperativas de Autoconstrucción*. A mediados de 1978, sobre la base de una cooperativa de trabajo integrada por mujeres que hilaban y tejían, se constituyó, en la Villa N° 31, la primera Cooperativa de Autoconstrucción. Con el apoyo legal, técnico y económico de una importante organización laica de beneficencia, Caritas-Buenos Aires, alrededor de 107 familias se nuclearon y

consiguieron adquirir terrenos en las afueras de la Capital Federal. La construcción de sus viviendas comenzó inmediatamente durante los fines de semana por el sistema de "esfuerzo propio y ayuda mutua". Su objetivo, según uno de sus dirigentes, era "construir nuestras propias casas, nuestro barrio".

Promovidas por los sacerdotes del EPSVE, las cooperativas de autoconstrucción tuvieron amplia difusión. A mediados de 1982 se encontraban operando un total de 9 cooperativas formadas por ex pobladores de las villas metropolitanas, y hasta ese momento se habían construido un total de 1.332 viviendas, lo que cubría las necesidades de aproximadamente 5.500 personas, esto es, 3 % del total de la población villera erradicada. Como lo demuestran las cifras, el número de beneficiados es exiguo, ya que la posibilidad de integrar estas cooperativas está relacionado con una fuente laboral estable y un nivel de ingreso adecuado para poder afrontar el pago de las cuotas mensuales.

Las cooperativas cuentan hoy día con el apoyo de la Fundación Vivienda y Comunidad, organización creada por un grupo de profesionales cuyo objetivo es la planificación, asistencia técnica, social y económica de los planes de viviendas encarados por las cooperativas. Sus funciones abarcan desde el diseño de las viviendas hasta la organización, supervisión y dirección de los trabajos de obra, y también gestiona la captación de fondos tanto de fuentes nacionales como extranjeras.

Los fondos recaudados forman parte del Fondo Rotativo de Vivienda y son prestados a los miembros de las distintas cooperativas, de modo tal que las familias de menores recursos pueden devolverlos en plazos tales que la cuota mensual no supere el 20 % de los ingresos del grupo familiar. El monto prestado a cada familia es igual al costo del terreno más los gastos necesarios para su fraccionamiento, apertura de calles, obras de infraestructura urbana (luz, agua y desagües) y los materiales para la construcción de una casa de 40 m². El préstamo se hace sin

intereses, pero indexado; de esta manera, el valor actualizado del monto prestado retorna a la Fundación y esta puede prestarlo nuevamente a otra familia.

A pesar del carácter altamente represivo del operativo de erradicación, se organizaron comisiones de villeros para enfrentarlo. A su vez, para coordinar la acción se creó la *Comisión de Demandantes de los Barrios de Emergencia de la Capital Federal*. Esta realizó múltiples gestiones ante la Municipalidad, partidos políticos, entidades defensoras de los derechos humanos, la Iglesia, jefes de las Fuerzas Armadas, etcétera, con el objeto de requerir su solidaridad.

Esta Comisión inició juicio contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires exigiéndole el estricto cumplimiento de la Ordenanza 33.652/77, que en su art. 2, inc. c), fija como objetivo: "Crear condiciones para que los grupos familiares puedan acceder a viviendas decorosas"; para ello, según el art. 3, inc. C), debía "gestionar y obtener la cesión de tierra sea a título gratuito u oneroso, existentes dentro de la Capital Federal para el parcelamiento y urbanización con destino al realojamiento de la población a erradicar".

El Juzgado Nacional Nº 17 negó el pedido de "no innovar". Los villeros, por medio de sus letrados, recurrieron entonces a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que el 27 de noviembre de 1979 dictó la medida de "no innovar". Esa disposición precautoria ordena el mantenimiento de la situación de hecho y de derecho hasta que el juicio inicial finalice, cosa que no ha sucedido hasta la fecha (1983)⁷. Apoyándose en dicha medida, otras acciones judiciales fueron iniciadas obteniéndose el mismo resul-

⁷ Por el contrario, ante las medidas decretadas, que imposibilitaban continuar con los procedimientos compulsivos, se recurrió a formas de "desalojo indirecto" a través de actos intimidatorios como ser: corte de energía, falta de recolección de residuos, rotura de caños de provisión de agua, acumulación de escombros en el frente de las casas, retiro de las paradas de los colectivos en la zona y continuas amenazas verbales sobre plazos perentorios de desalojo.

tado para pobladores de otras villas capitalinas. El EPSVE exigió también el cumplimiento de la mencionada ordenanza mediante carta dirigida directamente al presidente de la Nación (EPSVE, 19/5/79). Asimismo, la Comisión de Demandantes inició juicio contra la Municipalidad por la "apropiación indebida" del cableado existente en la Villa N° 21 de Retiro para la provisión de fluido eléctrico, pues pertenecía a la Comisión de Vecinos y tenía un alto valor económico.

La Iglesia Católica en su conjunto, coincidiendo con la celebración del día de San Cayetano, el 7 de agosto de 1979, comprometió su acción en la causa reivindicativa de los derechos elementales de la población villera, como ser la vivienda digna. Mediante un llamamiento a todos los fieles católicos, se promovió una colecta destinada a recaudar fondos para la Cooperativas de Autoconstrucción y ayuda mutua. Caritas Buenos Aires fue la encargada de llevar adelante dicha colecta con la consigna: "Una mano para los sin techo".

El arzobispo de Buenos Aires, en carta dirigida al intendente de la Municipalidad de esta ciudad, unió su voz a las entidades que actuaban en favor de los villeros. En ella destaca la labor realizada por el EPSVE, a la que califica como de "altísimo valor, no sólo por su contenido evangélico, sino por la promoción social que logra". Asimismo, como reflexión final estima "imprescindible que se ponga especial cuidado en que nadie utilice, consciente o inconscientemente, la presión, la intimidación o cualquier otro estilo de trabajo que pueda quitar la paz y la calma aptas para el trabajo fructuoso". (Carta del Arzobispo, del 30/8/79).

La Iglesia Católica como institución y ante la proscripción de toda actividad política, se constituyó así en una instancia apta para plantear ante las autoridades los atropellos a la dignidad humana de que eran víctimas los villeros.

A fines de 1979, erradicadas ya 180.000 personas, la

Municipalidad, ante la creciente oposición a su accionar, introdujo una innovación que consistió en ofrecer, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, una línea de créditos indexados para facilitar a los villeros la compra de lotes de terreno en el Gran Buenos Aires. Los potenciales beneficiarios de esta disposición serían tan sólo una 40.500 personas, que aún residían en las villas.

Los préstamos ofrecidos, lejos de aportar soluciones constituyeron una nueva maniobra tendiente a desalojar a los habitantes de las villas, desconociendo su verdadera problemática. Basta mencionar algunas de las condiciones que se le imponían: debían firmar un convenio de desocupación para desalojar la vivienda en un plazo general de 60 días y renunciar a cualquier acción judicial; el monto tope era insuficiente para la adquisición de un terreno y construcción de la vivienda, y además debían admitir su calidad de "intrusos".

Los créditos tomados fueron en su mayoría bajo continuas amenazas de desalojo, y les era entregado en forma "graciosa" sólo una vez que habían ascendido al camión que los llevaba a su nuevo destino.

La acción erradicadora de la CMV, pese a las denuncias, protestas y demandas judiciales de los villeros, ha continuado durante estos últimos años, y si bien acusa un ritmo más pausado, aunque constante, ciertas características no han variado fundamentalmente, especialmente en lo que atañe a la intimidación de que son objeto sus habitantes.

Impacto de la erradicación

Nos abocamos aquí a la consideración del impacto que tuvo para los villeros el operativo de erradicación. Los datos cuantitativos tomados en cuenta para la evaluación del impacto provienen del informe elaborado por la CMV a mediados del año 1980, que es la única fuente de información al respecto.

El cuadro siguiente nos ilustra sobre el total de viviendas, familias y personas que existían en las villas en 1976 y en 1980, así como el total erradicado en ese período.

Población villera	Viviendas	Familias	Personas
1976	41.793	45.678	224.885
1980	9.080	9.234	40.533
Erradicados	32.713	36.444	184.352

Estas cifras significan el 78,27 % de las viviendas, el 79,78 % de las familias y el 81,97 % de las personas fueron erradicadas en el curso de cuatro años.

El destino de los erradicados según datos del mismo informe fue el siguiente (en por cientos):

A "terreno propio"	75,44
Propios medios	11,46
A otras villas y NHT	5,04
Al exterior	4,76
Al interior del país	3,30
Total	100,00

Sin lugar a dudas, las frías cifras presentadas más arriba nos proporcionan una idea acabada de las repercusiones de la erradicación. Sin embargo, nada nos dicen de la significación real de la erradicación, especialmente de los eufemismos creados por la CMV, tal como el del traslado a "terreno propio", situación inexistente en numerosos casos y que sólo significaba en la realidad que se los depositaba en cualquier lugar, más allá de la avenida General Paz, límite de la ciudad de Buenos Aires. La bibliografía especializada en las relocalizaciones forzosas (Scudder y Colson) distingue el "stress psicológico, fisiológico y sociocultural", y aunque suponemos que dichas dimensiones existen, nosotros carecemos de datos suficientes que

nos permiten ponderar con justeza la primera; es por ello que sólo nos referiremos a la segunda y tercera dimensión del "stress de la relocalización".

En nuestra opinión, una de las consecuencias socioculturales más perjudiciales para el estilo de vida de los villeros fue la desestructuración y atomización de las redes sociales de ayuda mutua, las que cimentadas en el principio de reciprocidad permitían un flujo de bienes y servicios como componente significativo de una relación social, sea de parentesco, amistad o vecindad. Estas redes le permitían al villero la transformación de los recursos necesarios para afrontar la vida en el medio urbano. Como bien dice Lomnitz (1975), una de las funciones vitales de las redes de reciprocidad es la posibilidad de utilizar los recursos sociales no sólo como mecanismos de supervivencia sino también con fines de producción, tal como fue el caso de la cooperativa de hilado y tejido mencionada más arriba, la que hasta el momento no ha sido reactivada a pesar de intentos aislados.

Otra de las consecuencias socioculturales que afectaron a la población erradicada puede observarse en las condiciones de vida de los nuevos lugares de asentamiento. La infraestructura básica de los servicios urbanos —agua corriente, luz y desagües— es notoriamente peor, en algunos casos inexistente, a la de la villa de origen.

La misma situación tiene lugar en lo que se refiere a la oferta de servicios sanitarios y educativos. En el caso de la educación, una gran mayoría de los niños villeros perdieron un año de escolaridad ante la inexistencia de vacantes en las escuelas. Esto se solucionó de manera no satisfactoria, reduciendo las cuatro horas de enseñanza por turno lectivo a tres y dos horas para poder dar cabida al creciente número de escolares, lo que disminuyó, sin duda, la calidad del servicio educativo ofrecido. La estructura hospitalaria tampoco podía satisfacer la demanda creciente de servicios requerida por el sobrepoblamiento súbito ocasionado por la erradicación. Es oportuno agregar aquí que la participación de los rubros salud y educación en el presupuesto

nacional disminuyó en el período coincidente con las erradicaciones, esto es, desde 1977 a 1982.

Consideramos que en el campo de la salud, si bien pudieron haber incidido otros factores, la política de erradicación trajo como consecuencia un aumento del nivel de desnutrición y mortalidad infantil, así como el rebrote de enfermedades anteriormente controladas tales como la poliomiélitis, la tuberculosis y la sífilis. Esto ha sido recientemente denunciado (julio de 1983) por la Federación Médica de Buenos Aires.

Las consecuencias de carácter económico que afectaron principalmente a la población erradicada tuvieron que ver con el alejamiento de la fuente laboral. Uno de los aspectos más salientes que hacen a la ubicación de las villas miseria tiene que ver con la cercanía a distintas alternativas laborales para los componentes del grupo doméstico. Es por ello que la mayoría de las 31 villas miseria metropolitanas se encontraban cercanas al casco céntrico, donde las posibilidades laborales son mucho mayores.

El traslado a zonas más distantes tuvo como corolario un aumento considerable en el costo del transporte y en el tiempo utilizado para ir al lugar de trabajo. Si además se tiene en cuenta que las alternativas laborales de gran parte de la población villera son altamente inestables, como por ejemplo el trabajo de changador en el puerto, la sola perspectiva de un costoso viaje a la fuente laboral insegura torna aún más dramática la situación. Es por ello que muchos de los villeros, con el objetivo de mantener su fuente de trabajo, así como de disminuir el costo del pasaje, recurrieron a la alternativa de buscar alojamiento en hoteles y pensiones situadas en el centro del casco urbano o en las inmediaciones del trabajo y reunirse con la familia durante los fines de semana. Esta alternativa trajo como consecuencia en algunos casos la separación definitiva de la familia.

La ruptura de las redes personales de ayuda mutua también derivó en una disminución del trabajo femenino (las mujeres en sus antiguos asentamientos se empleaban

como servicio doméstico), ya que ante la imposibilidad de dejar a los niños a cargo de alguna persona conocida y de confianza hizo que perdieran su fuente laboral.

Otra consecuencia significativa para muchos fue la pérdida de las inversiones realizadas en sus viviendas, ya sea en material de construcción, ladrillos y chapas, como en las horas de trabajo dedicadas a la construcción y mantenimiento de sus casillas.

El impacto de la erradicación también afectó a los que trabajan por cuenta propia, sea propietarios de pequeños almacenes o talleres, ya que perdieron toda su clientela, como lo expresa con toda elocuencia un villero erradicado:

Desde que vine a esta villa me arruiné. En Soldati, allá tenía en la casa un tallercito, hacía arreglos en soldaduras y otros trabajitos que en poco tiempo me significaban otro sueldo. Por la Capital siempre hay trabajo para hacer en albañilería, en lo que sea, hay que saber buscar. Cuando me vine para acá perdí muchos contactos con la clientela. Allá había siempre comida en la heladera, nos reuníamos con los amigos y cuando faltaba compraba un chanchito y hacíamos facturas y vendíamos; ahora acá no se puede, porque ¿quién nos ayuda? Acá estamos solos, nadie se conoce.

Con posterioridad a la erradicación, las alternativas económicas de la población villera se vieron drásticamente restringidas, lo que acarreó una brusca disminución en los ingresos del grupo doméstico.

Las nuevas estrategias económicas elaboradas por la mayoría de la población villera como respuesta a la erradicación, tales como la fisión del grupo familiar con el fin de reducir los costos del transporte y aumentar las alternativas laborales y la incorporación de los menores de edad en tareas remuneradas, no fueron suficientes para mantener las condiciones de vida que poseían en sus antiguos lugares de asentamiento. Por este motivo, muchas de las familias erradicadas comienzan a regresar a las antiguas villas.

Conclusiones

Hemos presentado el caso de la erradicación de villas miserias ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Este caso muestra similitudes con otros procesos de relocalización forzosa. Como sostiene Bartolomé, los aspectos salientes de estos procesos son, por un lado, "la marcada concentración temporal de sus impactos sobre el conjunto de variables sociales, económicas y ecológicas que condicionan los esquemas vitales de los (erradicados) y determinan sus estrategias adaptativas" (1983, p. 53), y por otro lado "la naturaleza compulsiva y temporalmente acotada del desplazamiento de la población" conduce a que "los actores no participen voluntariamente en esta obra" (1983, p. 53)... mientras que en otros procesos de movilidad poblacional intervienen, en alguna medida, las motivaciones y/o decisiones de las personas involucradas en los mismos, en lo que aquí nos concierne es muy escasa (o en todo caso muy indirecta) la intervención de los afectados en las decisiones que dan lugar a su desplazamiento, así como también, por lo menos hasta el presente, en la forma en que ese desplazamiento se concreta" (1983, p. 2).

Hasta aquí las características comunes de la situación descrita con otros procesos de relocalización forzosa, pero el proceso que nos ocupa refleja aspectos específicos que lo tornan aún más dramático para la población afectada.

La campaña de estigmatización, la intimidación, la inusitada violencia de los procedimientos, las promesas incumplidas, la dispersión de la población y la desestructuración de sus bases organizativas son factores que han contribuido al empeoramiento drástico de las condiciones de vida de los villeros, pero sin embargo ha puesto de manifiesto su capacidad adaptativa en las circunstancias más adversas.

Consideramos que tanto en el caso de planes de relocalizaciones que brindan nuevos lugares de asentamiento a los erradicados, como en el caso que Scudder y Colson

(1982) categorizan como el peor tipo de relocalización, aquél en el cual sólo se indemniza a los erradicados, pero no se les brinda asistencia para facilitar su rehabilitación y no existe apoyo gubernamental a un plan de relocalización de la comunidad, el impacto social sobre los afectados es menor que en el caso que nos concierne.

La asimétrica relación de fuerzas entre los villeros y el Estado hizo que la capacidad de negociación de los primeros se viera circunscripta a límites muy estrechos y por ende sus respuestas cayeran más en la esfera de la acción individual y de pequeños grupos.

No obstante el despliegue del aparato represivo para eliminar estos asentamientos del hábitat urbano, aún quedan aproximadamente 35.000 personas, diseminadas en 7 villas, en la Capital Federal, mientras que 317.000 villeros (Censo Villas de Emergencia, 1981) han reproducido dicho hábitat en el Gran Buenos Aires.

Es innecesario destacar cómo una situación de raigambres sociales muy profundas como es la presencia de estos núcleos habitacionales no encuentra un tipo de solución definitiva, aunque se la pretenda implementar con el apoyo de la máxima represión.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- BARTOLOME, Leopoldo (1983): "Aspectos sociales de la relocalización afectada por la construcción de grandes represas". Trabajo preparado para el Seminario Interamericano sobre Efectos Sociales de las Grandes Represas de América Latina, organizado por el Centro Interamericano para el Desarrollo Social (OEA) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Naciones Unidas). Buenos Aires, Argentina, 4 al 8 de julio de 1983 (manuscrito).
- COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (1980): *Villas-Eradicaciones*, Municipalidad de Buenos Aires, Argentina.
- LOMNITZ, Larissa A. de (1975): *Cómo sobreviven los marginados*, México, Siglo XXI.
- MANGIN, Williams (1965): "Latin America Squatter Settlements; A Problem and a Solution", en HEATH, Dwight: *Contemporary Cultures and Societies of Latin America*, pp. 340-365, New York, Random House.
- SCUDDER, Thayer and COLSON, Elizabeth (1982): From Welfare to Development: A Conceptual Framework for the Analysis of Dislocated People, en HANSEN, A., y SMITH, A.: *Involuntary Migration and Resettlement. The Problem and Responses of dislocated People*, pp. 267-280, Westview Press, Boulder, Colorado.
- SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, Comité Censal (1981): *Censo socioeconómico en villas de emergencia*, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

MARGINALIDAD E INTEGRACION: UNA FALSA DISYUNTIVA

VICTORIA CASABONA
y ROSANA GUBER*

Nota: El análisis presentado en esta ponencia forma parte de los resultados preliminares de la investigación "Análisis sociocultural de dos comunidades del Gran Buenos Aires: impactos externos y autogestión", realizada por el equipo de investigadores integrado por: Mauricio Boivin, Victoria Casabona, Rosana Guber y Sofía Tiscornia, bajo la dirección de Esther Hermitte. Esta investigación es auspiciada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Interamericana.

* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires.

I

Tras el golpe de estado que en 1976 instauró el gobierno de facto en la Argentina, la gestión municipal de la ciudad de Buenos Aires se dio como meta prioritaria la erradicación total de las villas de emergencia (villas miseria, en la Argentina; cantegriles, en Uruguay; favelas, en Brasil, etcétera). En aquella oportunidad, las definía como:

...asentamientos ilegales de familias en tierras fiscales y en algunos casos de terceros particulares, con construcciones que no cumplen normas mínimas edilicias o de habitabilidad, sin infraestructura de servicio ni salubridad e higiene compatibles con la vida urbana, configurando un alto grado de hacinamiento poblacional y familiar. (Sus pobladores son) familias provenientes en su mayoría del interior del país y de países limítrofes, con escasos recursos económicos y baja calificación de mano de obra, que se encuentran en estado de marginalidad (CMV, 1980, pp. 4-5).

El crecimiento de las villas, según el criterio del gobierno, ha amenazado "la calidad de vida y de población de la ciudad". La solución final concebida por las autoridades militares, o sea, la expulsión de pobladores de los asentamientos en cuestión, pretendió justificarse en el hecho de que los barrios construidos conservando las pautas de la villa "no favorecieron su integración con el resto de la comunidad ni el sentido de propiedad (...) y los pobladores mantuvieron normas de comportamiento marginales" (ibíd., pp. 6-11).

La población afectada por esta medida, según estimaciones del año 1976, alcanzaba a 208.783 personas (ibíd, p. 24).

El giro violento que cobró esta campaña de erradicación, con el alto impacto de desestructuración económica, social y política que la epilogó, imponen una seria revisión de lo que ha sido el fundamento de dichas políticas: la categorización de los pobladores villeros como "marginales". Nos proponemos aquí, pues, aportar algunos elementos para la discusión del concepto de marginalidad, a partir de algunas consideraciones teóricas y, especialmente, del trabajo de campo realizado por nuestro equipo de investigación en dos villas miseria del Gran Buenos Aires durante el año 1982 y parte de 1983.

En el campo de las ciencias sociales argentinas, diversos trabajos empíricos (Germani, 1961; Margulis, 1974; Mc Ewen, 1972) realizados respecto de las villas miseria han concluido por categorizarlas como reductos de población marginal, dada su falta de participación o su inserción deficiente en las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de la moderna sociedad urbana e industrial. Esta categorización ha sido el corolario de mediciones empíricas basadas en un esquema normativo y en pautas de participación consideradas inherentes a dicha sociedad: inserción ocupacional estable en actividades secundarias o terciarias no redundantes; escolarización de los niños y adolescentes que lleven a una capacitación laboral; participación en actividades sindicales, políticas o comunitarias en general; mantenimiento de relaciones familiares estables, no autoritarias; planificación de la natalidad; calidad habitacional, etcétera. Estos estudios concluyen que la baja integración de la población villera en las denominadas estructuras urbanas las lleva a enquistarse en pautas socioeconómicas y culturales "tradicionales", permaneciendo así al margen de la moderna sociedad urbana e industrial, cuyos valores dominantes y factores hegemónicos restan oportunidades, recursos y/o legitimidad de participación a estos grupos espacialmente localizados en las villas miseria.

Estimar los vínculos entre los sectores sociales sólo desde las citadas pautas de participación conlleva el peligro

de proponer la imagen de una estructura social dual, conformada por sectores desarticulados entre sí, que se producen y reproducen de manera autónoma, en virtud de caracteres intrínsecos.

Por el contrario, ciertos análisis marxistas realizados en el campo de la economía (Laclau, 1978; Murmis, 1969; Nun, 1969) han criticado los modelos duales que separan a los sectores precapitalistas de los capitalistas; su punto de partida es la captación de los vínculos entre ambos sectores —lo que no implica negar su especificidad—, que lleva a visualizar al sector capitalista moderno como función del atraso del sector tradicional precapitalista. Lo que subyace a esta postulación es que la participación en un sistema económico mundial cuyo modo de producción dominante es el capitalista, no excluye el mantenimiento, en ciertos sectores del sistema, de relaciones precapitalistas con fuertes elementos tradicionales, sino que más bien las implica e incluso las requiere para el mantenimiento de una tasa de ganancia media que descendería bruscamente sin la producción de dichos sectores "atrasados" (Laclau, 1978, pp. 13-41).

Esta estrategia de análisis que sostiene que la articulación de un sistema global no reside en el hecho de que sus componentes respondan a una misma lógica —productiva, social, cultural o política— parece adecuada para implementar un enfoque alternativo de la llamada "marginalidad". En efecto, si la caracterización de la población de las villas miseria es factible realizarla no sólo a partir de los modelos ideales de participación citados, quizás encontremos algunos indicios para explicar la tenaz permanencia de estas poblaciones presuntamente separadas de la sociedad moderna, urbana e industrial.

Siguiendo este criterio, postulamos que la población de las villas miseria, considerada no participante desde cierto sistema normativo, jurídico e ideológico dominante, no se halla excluida de la formación económico-social, sino que se relaciona en espacios alternativos de vincula-

ción con otros sectores sociales, así como con el Estado y sus agentes.

En las páginas siguientes presentaremos una serie de hipótesis mediante las cuales se expondrán diversas relaciones mantenidas entre los villeros y otros sectores sociales y con el Estado y sus agentes, desde dos perspectivas; la primera, desde el orden jurídico de nuestra sociedad; la segunda, desde el plano ideológico; ambas, centradas en la interacción entre los villeros y la sociedad mayor, y sus efectos en el mantenimiento de relaciones de subordinación.

II

La formulación de la ley crea dos campos diferenciados: el de lo legal, que abarca lo autorizado y lo prescripto; y el de lo ilegal, que alude a lo prohibido y lo punible, en función de la permanencia del orden social que así se establece. Como sucede en toda sociedad dividida en clases, los sectores dominantes de la sociedad argentina buscan plasmar un orden jurídico-político que no sólo excluya a los sectores dominados de ciertos ámbitos, sino que, además, les asigne un lugar específico dentro de la red socioeconómica y política de poder. Las leyes emanadas del Estado pretenden cristalizar dicho orden y se transforman, de hecho, en estrategias que efectivizan las relaciones de fuerza entre clases en lucha. Dada, pues, la dinámica de estas relaciones, el sistema de derecho se ve también impelido a incorporar compromisos impuestos en ciertas coyunturas por las luchas de los sectores dominados. Pero ello no obsta a la voluntad de preservación del orden jurídico establecido, puesto que consagra las relaciones básicas del sistema socioeconómico y político. Su reproducción y consolidación apela al funcionamiento de una serie de instituciones, organismos y actores, cuya misión es velar por que dichas relaciones no desborden los cauces fundamentales encarnados en los códigos de derecho.

Al instaurar el campo de lo ilícito y el de lo lícito, la ley cumple un papel importante, como elemento de persuasión no externamente coercitivo, en la conformación de dispositivos de consentimiento efectivizados mediante la manipulación ideológico-simbólica de los individuos. Pero ello no debe hacer pasar por alto su íntima vinculación con la violencia represiva (Poulantzas, 1981, pp. 84-89). Pues es gracias a dicho vínculo que la ley se convierte en instituyente del terreno de aplicación de la represión y de la determinación del objeto de la violencia (categorías de individuos y comportamientos).

Ahora bien, el hecho de que la determinación del campo de lo ilegal como terreno de aplicación de la represión no haya llevado ni a la desaparición de lo ilícito ni a la extinción de la violencia, impone desentrañar cuál es el signo de la articulación entre los agentes sociales ubicados en el campo de lo ilegal y el Estado y sus agentes. La realidad social que examinamos más abajo para el caso concreto de los trasgresores villeros, nos conduce a admitir que el monopolio de la represión legal que inviste a los miembros del aparato represivo estatal suele actuar como condición de posibilidad del mantenimiento de situaciones de ilegalidad, sobre la base de transacciones precisas cuyos términos no son siempre, en primera instancia, los de la represión física.

Veremos, pues, en las consideraciones siguientes, de qué manera la condición ilegal característica de muchos órdenes de la vida de los villeros, antes que aislarlos, los vincula de modo peculiar con otros sectores sociales y con el Estado y sus agentes.

Desde un punto de vista jurídico, la población de las villas miseria puede definirse como adscripta al campo de lo ilegal debido a que se ha asentado, sin respetar las normas pertinentes, en predios fiscales o privados en los que erigió sus viviendas o "ranchos"; dicha condición responde a que las villas violan una de las normas básicas de nuestra sociedad: la propiedad privada de la tierra. Asimismo, sus pobladores resultan trasgresores de las normas urbanísti-

cas oficiales, tanto en lo que respecta a la precariedad de sus viviendas, como a su disposición en el espacio urbano; por otra parte, usufructúan clandestinamente del servicio de luz eléctrica y agua corriente, y no abonan las tasas ni los impuestos municipales.

A diferencia de esta dimensión de ilegalidad, que involucra a toda la población villera, los individuos pueden encontrarse en diversas situaciones irregulares que implican una condición ilícita: son un ejemplo de ello la indocumentación personal de argentinos y extranjeros que no hubieran obtenido la radicación definitiva en el país; las relaciones matrimoniales y filiales no consagradas ante la ley; las causas pendientes con la justicia, por comisión real o supuesta de delitos; el desempeño en actividades ilegales —delincuencia, prostitución, juego, etcétera—. Estas irregularidades no son exclusivas de la población villera, pero su posición socioeconómica determina márgenes más estrechos de negociación con respecto a diversas reivindicaciones y a la apelación ante los excesos de los controles externos, los abusos de autoridad y demás situaciones conflictivas.

Las irregularidades mencionadas suelen combinarse y reforzarse mutuamente desencadenando nuevas situaciones ilícitas. En efecto, quien tenga antecedentes penales, tendrá dificultades para acceder al mercado de trabajo legal; quien carezca de documentación personal no podrá anotar a su hijo en el registro civil, lo cual probablemente retrase su incorporación al sistema educativo formal, dado que éste suele exigir la documentación pertinente; asimismo, la madre de este niño puede recibir amenazas por parte de los agentes del sistema médico en el sentido de no prestarle la atención requerida ni los medicamentos necesarios, a causa de dicha irregularidad.

El status legal del villero puede incidir en su acceso al mercado laboral legal y a los beneficios sociales correspondientes. Quienes cumplieren los requisitos mínimos —documentación personal, examen médico satisfactorio, habilidades exigidas— para acceder a un contrato de trabajo según lo previsto por la ley, se verán privados, sin embargo,

del salario familiar y de la cobertura asistencial para aquellos niños del grupo doméstico que no hubieran sido reconocidos como hijos del trabajador y para la mujer con quien no se encuentre legítimamente unido. La retracción de la demanda de fuerza de trabajo parece conjugarse con la imperiosa necesidad de un ingreso y con las diversas irregularidades citadas, imponiendo relaciones laborales mediadas por “contratistas” —subempleadores relacionados con empresas o clientes particulares especialmente en el rubro de la construcción y el estibaje—. Estos empleadores rara vez cumplen sus obligaciones patronales, tales como efectuar los aportes jubilatorios y contribuciones a los sistemas de asistencia médica, indemnizar al trabajador despedido, etcétera. La empresa y el contratista se benefician económicamente con dicha trasgresión y el trabajador la admite por constituir una de las pocas vías de acceso a una remuneración.

A pesar de que el trabajo infantil está prohibido por la ley, muchos niños deben realizar alguna contribución al grupo doméstico, ya sea en efectivo o en especie. En estas condiciones, los pequeños villeros que se encuentren vinculados a un patrón suelen desempeñarse en condiciones laborales extremadamente injustas, en virtud de exiguas remuneraciones y jornadas extenuantes. Aquellos que se desempeñan en puestos callejeros tratan de evadir la sanción policial y la consiguiente reclusión en algún instituto correccional de menores, sobornando a la autoridad y, por lo tanto, perdiendo el beneficio de toda una jornada.

Cuando el villero emprende actividades penadas por la ley, como son la recolección de residuos en la vía pública, la prostitución, la delincuencia, el ejercicio de la medicina por parte de curadores no diplomados, etcétera., diversos modos de negociación con los controles externos se imponen de inmediato; éstos perciben un porcentaje de dichas actividades a cambio de no reprimir a los trasgresores. Cuanto mayor sea la continuidad de dicha actividad y su significación económica, probablemente sea más estrecha la asociación con algunos agentes del orden, y más ele-

vada la jerarquía de los funcionarios involucrados, quienes, por otra parte, no residen en la villa. Los "socios mayores" o "protectores" de la prostituta (cafiscio, gabión, madama, alcahueta), del delincuente (jefe de la banda) o del levantador de apuestas (banquero) ostentan un doble poder frente a sus "empleados", pues no sólo son sus patrones sino que, además, se encuentran vinculados con la policía, a la que, llegado el momento, pueden instrumentar en su propio provecho, en caso de conflicto con sus protegidos o para liberarlos de eventuales sanciones.

Por su parte, el Estado no desconoce el asentamiento de las villas miserias sobre terrenos fiscales, ni las condiciones precarias e ilegales en las que viven sus habitantes. Sin embargo, sólo esgrime el argumento de que se trata de intrusos que viven gratuitamente a expensas del resto de los ciudadanos, trasgrediendo las leyes, las normas morales y las pautas de vida de la sociedad mayor, cuando pretende justificar la política y las medidas represivas que adopta con los pobladores. Un caso extremo fue la erradicación de estos asentamientos, al cual ya nos hemos referido. Las diversas estrategias oficiales destinadas a desarrollar acciones represivas sistemáticas, con el propósito de proceder a la identificación y captura de delincuentes, prostitutas, subversivos y "vagos" ha suscitado especialmente en las villas miseria una continua sensación de encontrarse a merced de la fuerza pública; pues la calidad de intrusos de sus habitantes define un estrecho margen de negociación y de réplica. La represión se combina, cuando ello es posible, con el soborno y la transacción con los agentes de contralor y represión, lo que viene a ser la contracara de la supuesta gratuidad de residir en la villa miseria, el usufructo clandestino de los servicios públicos y la tan mentada impunidad de las actividades ilegales.

En las breves y esporádicas coyunturas políticas favorables a los reclamos populares, el Estado debió acceder a algunas reivindicaciones villeras, frecuentemente canalizadas por medio de organizaciones políticas y vecinales, realizando mejoras in situ y proveyendo de materiales para

la construcción, alimentos, etcétera. En estos y otros casos aislados, ciertos grupos villeros se erigieron como contestatarios del poder oficial, reclamando planes de vivienda, mejoras en el abastecimiento de servicios o la regularización de la posesión de las tierras. No obstante, dichas reivindicaciones no tuvieron continuidad, como tampoco las mencionadas coyunturas propicias para que tuvieran el eco esperado.

Por lo general, y especialmente en los últimos siete años, los pobladores han venido negociando en la ilegalidad, dentro de los límites que ella impone. Quien se encuentre dentro del campo de lo ilícito, por ejemplo, por ser "intruso", no podrá apelar al derecho ni a la autoridad pública para zanjar conflictos de índole urbanística —invasión del terreno, cortes del agua, etcétera—, pues la ley probablemente lo condene por ser un infractor. Ello conduce a que se instauren mecanismos extrajurídicos para dirimir situaciones de conflicto, basados en las diferencias internas de poder, para las cuales puede contribuir en forma decisiva la asociación con agentes de control externo. El villero afectado por la trasgresión de otro vecino, sabiéndose él mismo ubicado en diversas situaciones ilegales, probablemente no lo denuncie a la autoridad pública a menos que sus relaciones con ella le aseguren que las acusaciones esgrimidas por su oponente serán pasadas por alto, o bien que dichas relaciones lo protejan manteniendo el anonimato del denunciante. Ello da lugar a un frecuente y hermético silencio, mediante el cual cada uno se protege a sí mismo y al vecino, que se halla involucrado en una trasgresión similar.

De lo expuesto puede concluirse que el orden ilegal en el que se ubica el status de los asentamientos villeros, así como el de determinadas actividades y condiciones de los pobladores, configuran un espacio de articulación con otros sectores sociales, así como con el Estado y sus agentes.

III

En esta interacción cabe integrar la temática de la identidad villera como una dimensión en la cual se ratifica la articulación subordinada de este sector social con respecto a la sociedad mayor.

La pertinencia de este tratamiento responde al hecho de que el "buen orden" que rige a una sociedad, en virtud de su pacto básico de dominación, busca mantenerse no sólo a través de una peculiar eficacia de las instituciones jurídicas, sino también promoviendo ciertas identidades sociales y políticas, y desalentando otras. Ahora bien, las diversas identidades forman parte de la instancia cultural-ideológica de una formación económico-social, que contribuye a hacer inteligible la realidad y sus múltiples y contradictorios mensajes, a orientar la acción en base a algunos sistemas de valores y normas socialmente relevantes, en fin, a permitir a los individuos conceptualizar sus prácticas y a desempeñarse dentro de la estructura social que integran.

Dentro de un espectro sociológico, lo que vuelve reconocible y diferenciable a un actor social con respecto a otros es precisamente su "identidad". Esta se forja en la relación con un "otro" significativo, sobre la base de un interjuego de imágenes recíprocas de adscripción y autoadscripción. A modo de imagen reflejada, la noción que sobre mí tengan los demás se revertirá como parte constitutiva de mi propia identidad, ratificada por los cursos de acción pertinentes. La manera de hacer inteligibles las identidades resulta del examen de las interrelaciones, las denominaciones, la atribución recíproca de rasgos y su valoración a partir de la ubicación sociopolítica de los diferentes actores en la estructura social.

De ello se deduce que la identidad de un actor social sólo resulta comprensible dentro de un contexto determinado, que incluye las circunstancias que le dieron origen. Es entonces capital reconocer el lugar que el grupo social en cuestión ocupa dentro de la estructura social y los antagonismos que lo enfrentan a otros grupos, en virtud de sus

intereses contrapuestos. Esta posición relativa de los actores en la escena societal se expresará, precisamente, a través de la identidad, por medio de la cual se pondrán de relieve características singulares de los diferentes actores, en función de la búsqueda de efectos sociopolíticos concretos. Es así como ciertos rasgos que conforman la identidad de un actor serán utilizados para diferenciarlo de otros con el fin de fundamentar el orden existente, explicar los antagonismos y justificar, frecuentemente, medidas discriminatorias concretas.

Imágenes altamente negativas sobre grupos sociales subordinados suelen ser correlativas a políticas discriminatorias para con ellos. Sobre esta base se construye el prejuicio, tomando como argumento elementos que, teniendo o no base empírica sólida, son implementados fundamentalmente como instrumentos de discriminación (Bastide, 1973, p. 16). El prejuicio tiende así a fomentar un conocimiento estático y maniqueo de los grupos en cuestión. Por supuesto, las generalizaciones que lo fundamentan no se constituyen de manera ilógica sino, más bien, en virtud de un ordenamiento de intereses y disputas concretas. En tanto sus categorizaciones exceden las expresiones aisladas, el prejuicio será analizado como fenómeno eminentemente social, correlato en la dimensión ideológica del orden desigual y asimétrico de la sociedad dividida en clases.

A continuación examinaremos el papel que desempeña el prejuicio en la relación que los pobladores de las villas miseria mantienen con otros sectores sociales y la manera en que sus argumentos se constituyen en elementos de la identidad villera, sin que por ello ésta sea reductible a los mismos. Sin embargo, debemos advertir que, por lo dicho hasta ahora, nos parece de importancia capital el momento político al cual referimos nuestras observaciones, ya que las imágenes transmitidas en coyunturas de avance de las fuerzas populares han de ser bastante diferentes de aquellas en que, como en el caso de este trabajo, las relaciones de fuerza son plenamente desfavorables a los villeros, en

virtud de su exclusión prácticamente total de los órganos y canales de decisión.

Desde un punto de vista histórico, el prejuicio antivillero tiene sus orígenes en la significativa migración rural-urbana que tuvo lugar desde 1930 en la Argentina. La hasta entonces predominante población "blanca" y de origen europeo, bonaerense, desplegó diversos mote despectivos para denominar a los provincianos recién llegados —raviol de fonda, descamisado, cabecita negra—, tomando sobre todo algunos de sus rasgos físicos y, especialmente, el color oscuro de la piel y del cabello y, en algunos casos, el evidente ascendiente indígena colla y guaraníco.

Tras el derrocamiento del segundo gobierno peronista (1955) este tipo de apelativos fue cediendo espacio ante la emergencia del mote "villero" que resumía efectivamente una constelación de contenidos peyorativos, pues se convirtió en sinónimo de negro-bruto-ignorante-ladron-sucio-indolente-borracho-prostituta. Para darle mayor contundencia, se suele acompañar por algunos de los citados atributos. Es probable que este nuevo apelativo haya nacido junto con las ideologías y políticas desarrollistas que surgieron en nuestro país a fines de la década del '50. El prejuicio contra la población de las villas miseria debería resultar eficiente para una política de promoción industrial, no dirigida a fomentar el consumo de las capas populares y enmarcada en un contexto de proscripción política del peronismo, partido con el que se identifica a buena parte de los villeros.

Vemos así cómo la identidad social y su instrumentación en el prejuicio resultan de interacciones concretas entre grupos de clase contrapuestos y complementarios dentro del sistema social, y no de rasgos intrínsecos a los actores aislados. En la Argentina, país que se considera liberado de problemáticas raciales o étnicas, el prejuicio antivillero viene a cumplir funciones similares, en cuanto a la asignación-exclusión de lugares en la red socioeconómica y política.

En efecto, teñidos de un halo de barbarie e incivilización, los villeros no "debían poder" vivir en edificios de departamento, "acostumbrados" a alojarse en sucios tugurios donde llevaban una vida "inmoral" y "desordenada". Las "leyendas negras" acerca de su incapacidad cultural o innata para habitar "adecuadamente" en departamentos hicieron su aparición justamente cuando se emprendieron numerosos planes de vivienda popular con el fin de desalojar las villas miseria de la Capital Federal y el conurbano. Quienes más sustentaban estas imágenes eran sus futuros vecinos, o eventuales competidores por los mismos departamentos, o bien ciudadanos involucrados en la financiación de dichos planes.

La discriminación operada a partir del prejuicio también resulta efectiva para someter a los trabajadores villeros a condiciones más duras de explotación. En primer lugar, no siempre la cercanía de las villas con respecto a las fuentes de trabajo —en cuyas inmediaciones insalubres se han instalado muchos de estos asentamientos— se corresponde con la posibilidad de ser empleados por ellas. Pero esgrimir argumentos de inmoralidad e inconducta contra los villeros —son borrachos, ladrones, irresponsables, su ausentismo es alto— justifica en muchos casos que las empresas los contraten en condiciones que contravienen lo estipulado por el derecho laboral, como ya vimos, por la intermediación de los "contratistas", en beneficio de éstos y las empresas.

En el área educativa, la discriminación es mayor por parte de sus propios compañeros de estudio o sus padres que por parte de las autoridades escolares, las que, aunque abriguen algunos prejuicios acerca de la ignorancia "propia" de los villeros, no parecen expresarlo abiertamente. En tanto, los compañeros y sus padres pueden manifestar un vivo rechazo por los alumnos villeros, especialmente ante cualquier anomalía —robo de útiles, daño físico a un niño, etcétera— con lo cual no sólo encuentran una explicación al momento de tensión, sino que además, señalan la frontera que debe separar al hijo de un no villero respecto del

compañero villero. El papel que tiene la escuela en la socialización de los jóvenes, en la conformación de grupos de amigos, actualiza la preocupación de muchos padres quienes, en virtud de las expectativas de ascenso económico-social que cifran en la escolarización de sus hijos, no desean que se vean frustradas por una posible relación con niños de baja extracción. Vemos, pues, que las tensiones sociales se reproducen en la escuela.

El prejuicio antivillero suele instrumentarse también para preservar áreas clientelísticas de eventuales competidores. Es el caso de dirigentes políticos, agentes policiales y algunos religiosos, que levantan una cortina de humo en torno de las villas, atribuyéndoles, en una primera instancia, todo lo que se considera abyecto, inmoral y prohibido en la sociedad. Estos asentamientos son presentados como *ghettos* de pobreza inexpugnables, donde todo es ilógico y caótico, donde cunden la inmoralidad y el desenfreno, de modo que el observador externo e ingenuo no se sienta tentado a asomarse, pues nada de lo que allí encuentre le resultará familiar y comprensible. La difusión de esta imagen, sea o no real, es un mecanismo que, aunque no resulte determinante, contribuye a mantener a distancia a los competidores potenciales.

Lo que intentamos mostrar hasta aquí es la utilización del prejuicio por parte de otros segmentos sociales, que contribuye a que los villeros conserven "su" lugar geográfico —los peores hábitat urbanos—; económico —puestos de trabajo más irregulares e inseguros y niveles de remuneración más bajos—; jurídico —como usurpadores, intrusos, infractores por excelencia, desprovistos de todo derecho y asistencia legal— y cultural.

Veamos a continuación de qué manera el villero asume, emplea o rechaza la identidad que le es atribuida. En tanto debe interactuar con otros sectores sociales para obtener empleo, ser asistido médicamente, lograr certificados, etcétera, el villero tiende a aceptar las normas de relación estipuladas por los sectores dominantes y, con ellas, la valoración negativa que se tiene de él. Establecer relaciones

sometiéndose a estas condiciones —muchas veces ineludibles para obtener un empleo o ser objeto de la caridad— contribuye a que el villero refuerce una identidad denigrada. La silenciosa aceptación de estos términos, que muchas veces es vista como apatía, es el precio de la relación asimétrica.

Para eludir esta identidad estigmatizada, el villero argumenta que el hecho de que en la villa habite gente "de mal vivir" no implica que todos sean iguales. Busca, así, negar la generalización e incluso descentrar de su medio la exclusividad de ciertos rasgos "patológicos", mostrando que delincuencia, ebriedad, prostitución y otros males sociales no son conductas exclusivas de los habitantes de la villa. De modo que, probablemente, la única forma de rechazar una identidad social contaminada por la lamentable identidad villera, de la que difícilmente puede sustraerse, es demostrar que la característica anómica no corresponde a la totalidad de la población; o bien que uno no pertenece por completo a ese mundo y a su gente, pues no se comparten sus defectos. Esta conceptualización se pone de manifiesto cuando aparece un representante de los no villeros dentro del barrio: una asistente social, la maestra, un contratista, el cura párroco, un dirigente político y el policía, entre muchos otros, pueden ser los destinatarios de diversas quejas sobre los demás vecinos.

Por otra parte, el villero parece hacerse cargo de su imagen desprestigiada replicándola dentro del barrio para constituir fronteras internas entre grupos de mayor y menor prestigio y recursos, o entre sectores enfrentados entre sí. Los argumentos que se esgrimen son los mismos que los no villeros usan para denigrarlos. Aparecen entonces, las distinciones entre paraguayos/bolivianos y argentinos, entre provincianos y porteños, borrachos y sanos, vagos y "laburantes" (trabajadores), etcétera.

De esta manera, la necesidad de diferenciarse de otros villeros evitando quedar confundido o fundido en su mala imagen, así como la competencia por recursos de difícil acceso en este sector social, conducen a la reproducción

del prejuicio dentro mismo del medio prejudicado. El villero parece, pues, haber incorporado las imágenes que suscita en "el otro" a sus propias categorías para relacionarse con sus vecinos y con otros sectores sociales. En ocasiones, instrumenta abiertamente alguno de estos atributos, como ocurre cuando busca despertar la caridad de los no villeros, apelando a la visualización paupérrima que se tiene de ellos.

Esta apropiación a que aludimos, se puede explicar por el hecho de que "...la opresión no logra existir en el anonimato de las estructuras colectivas; se alimenta del eco que lo social genera en los individuos. Un orden despótico se afianza cuando constituye su espejo en la subjetividad" (García Canclini, 1982, p. 54).

Conclusiones

Dimensión jurídica e ideológica son, según hemos visto, campos en los cuales se viabiliza la articulación entre los villeros y la sociedad mayor. La reproducción del campo ilícito a través de mecanismos extralegales —en los que participan activamente los agentes oficiales— y de una identidad subordinada que se funda en el estereotipo que otros sectores sociales le atribuyen a los villeros con el objeto de lograr éxito en sus transacciones, no podrían tener lugar de no mediar una activa relación con la sociedad mayor.

Los villeros ocupan una posición determinada en la estructura social y tanto ellos como los no villeros contribuyen a ejercitar y reproducir un orden en el cual se pretende que cada actor desempeñe un papel según lo esperado. Es en virtud de estas pautas, vulneradas a veces, reforzadas otras, que podemos comprender a los villeros como miembros activos de una sociedad de la que, sin embargo, perciben una ínfima parte de sus beneficios. Su caracterización, como la de prácticamente ningún grupo humano de nuestros días, no puede emprenderse según sus rasgos

intrínsecos sino en función de sus relaciones con los distintos componentes de la estructura social global.

De acuerdo con lo expuesto, esta identidad contiene ciertos rasgos que se constituyen y manifiestan en la interacción de los villeros con los demás sectores sociales. El prejuicio, como uno de los canales de expresión de la identidad, actualiza conflictos existentes en la estructura del sistema global. De modo que las actitudes discriminatorias y segregacionistas no podrían tener lugar de no mediar una activa interrelación con la sociedad mayor.

El análisis de las relaciones jurídicas e ideológicas entre estas poblaciones y su contexto social nos remite a una conclusión que dista bastante de lo que podría ser una situación de marginalidad fundamentada en rasgos anómicos de sus pobladores, cuya mentalidad tradicional los mantendría apartados de la sociedad global. Por el contrario, el signo mismo de los vínculos que hemos puesto de relieve se fundan en la inserción e interacción de los villeros con otros actores de esta sociedad.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BASTIDE, Roger (1973): *El prójimo y el extraño*. Ed. Amorrortu, Buenos Aires.
- COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, (1980): *Villas-Eradicaciones*. Publicación de la Comisión Municipal de la Vivienda-Subgerencia de Operaciones, Departamento de Erradicaciones, División Asentamientos Precarios, Sección Relevamientos Censales, Buenos Aires, 30-6-80.
- GARCIA CANCLINI, Néstor (1982): *Las culturas populares en el capitalismo*. Ed. Nueva Imagen, México.
- GERMANI, Gino (1961): "Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran Buenos Aires", en *La urbanización en América Latina*, Unesco.
- LACLAU, Ernesto (1978): *Política e Ideología en la teoría marxista*, Ed. Siglo XXI, Madrid.
- MARGULIS, Mario (1974): *Migración y marginalidad en la sociedad argentina*, Ed. Paidós, Buenos Aires.
- MC EWEN, Allison (1971): "Marginalidad y movilidad en una villa miseria. Resumen de una investigación", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, Nº 1, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
- MURMIS, Miguel (1969): "Tipos de marginalidad y posición en el proceso productivo", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, Nº 2, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
- NUN, José (1969): "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal", en *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, Nº 2, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
- POULANTZAS, Nicos (1981): *L'Etat, le pouvoir, le socialisme*, PUF, París.

RELOCALIZADOS:
ANTROPOLOGIA SOCIAL DE
LAS POBLACIONES DESPLAZADAS
SE TERMINO DE IMPRIMIR
EL 20 DE ENERO DE 1985
EN EL DEPARTAMENTO EDITORIAL
DEL IDES, GUEMES 3950,
1425 BUENOS AIRES, ARGENTINA